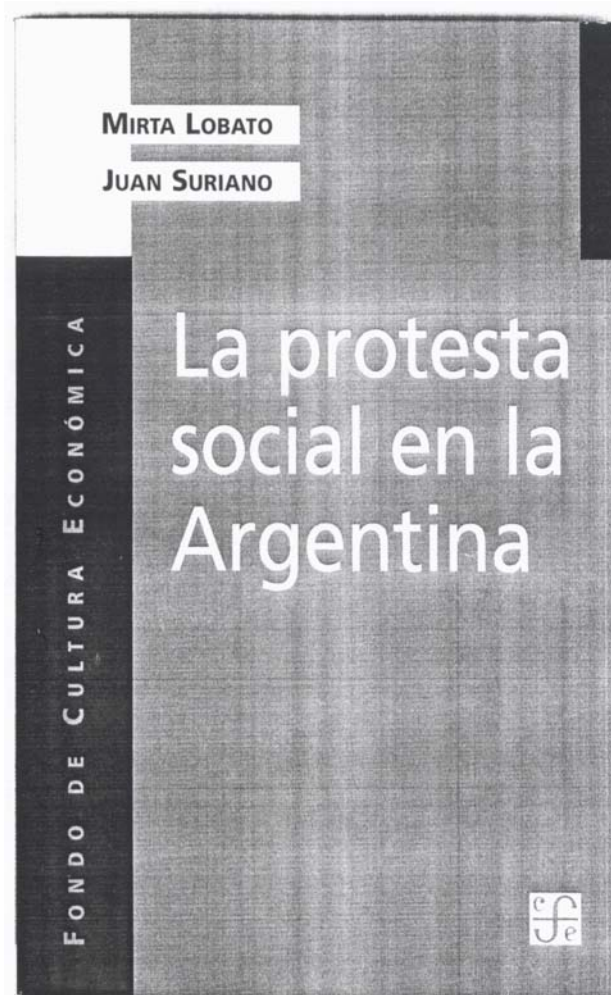




Introducción

El 19 y el 20 de diciembre de 2001 se produjo en la Ciudad de Buenos Aires una intensa movilización popular que provocó la renuncia del gobierno de la Alianza, encabezado por el presidente Fernando de la Rúa. Los saqueos a supermercados y los cacerolazos se sumaron a los innumerables cortes de rutas, que se venían realizando en todo el país desde 1996. La magnitud de la protesta ha colocado en primer plano la reflexión sobre quiénes eran los actores, dónde se realizaban las demandas, las razones por las que se efectuaban los reclamos de los sectores populares y cuáles eran las raíces históricas del fenómeno. En este libro intentamos poner la protesta social en perspectiva histórica y responder parcialmente a algunos de los interrogantes planteados. Para hacerlo, hemos privilegiado los conflictos que se articularon desde comienzos del siglo XX alrededor del mundo del trabajo, aunque incorporando otros actores sociales cuando han significado un cambio sustantivo en el tono de la protesta.

La formas recientes de la beligerancia operaron como disparadores para buscar cómo se fueron articulando los reclamos en el pasado. Pero no nos rige la idea de que las acciones de las personas se justifiquen a la luz de la evolución posterior, sino la de que en cada momento histórico se combinan y entrelazan factores estructurales, el rol del Estado, las prácticas políticas, sociales, culturales e ideológicas así como la experiencia de las personas, entendida esta última como un proceso de aprendizaje que vincula el mundo del trabajo con la

vida cotidiana. Como resultado de esos entrecruzamientos se van dibujando actores sociales y políticos, repertorios de confrontación (huelgas, boicots, sabotajes, manifestaciones, reuniones), espacios de sociabilidad (sindicatos, círculos culturales, clubes, asociaciones), ritos (conmemoración del 1ro de Mayo, el recuerdo de «los mártires») y símbolos (banderas, consignas, cánticos) que configuran la protesta social.

También se van delineando los conflictos producidos en las ciudades y en el campo, en donde la población trabajadora experimentó la explotación y la opresión capitalista bajo formas diferentes: el despotismo de la clase dominante, la distancia entre trabajadores y empresarios, la parcialidad de la ley, la represión policial, la disciplina laboral, las largas jornadas y las malas condiciones de trabajo, y la discriminación política. Todo esto ha provocado frecuentes conflictos y agitaciones que adoptaron formas variadas de acuerdo con los diferentes contextos históricos y con la compleja relación con el Estado. Así, es cierto que hubo coyunturas en que la conflictividad social pasaba a un segundo plano o permanecía larvada debajo de la superficie, ya sea por la estabilidad económica, la paz social o el equilibrio político; cada uno de estos términos se combinó de manera diversa para canalizar las demandas populares y amortiguar la conflictividad social. Sin embargo, la historia argentina del siglo XX no transcurrió sin conflictos. Al contrario, está jalonada por ellos, y desde la propia conformación como país capitalista, la protesta de los nuevos actores sociales emergió con intensidad preocupando a las élites gobernantes, que debieron apelar a concesiones de tipo político y social para neutralizar la intensidad de la protesta social. La imagen que se desprende de la historia argentina del siglo XX es la de una sociedad en donde se combinaron períodos en los que predominaba

el consenso y la paz con otros en los que la protesta social ocupaba un lugar preponderante; como ocurrió con las luchas de los trabajadores durante la primera década de ese siglo, las huelgas en la coyuntura 1917-1921 y a mediados de los años treinta, la irrupción del peronismo una década más tarde, la alta conflictividad social y política de vastos sectores de la sociedad durante casi todo el período comprendido entre 1955 y 1976, y la reacción popular, desde mediados de los años noventa, frente a los resultados de la aplicación de las recetas neoliberales.

En el actual territorio de la Argentina se produjeron protestas sociales de diverso tipo y por múltiples motivos, que pueden rastrearse varios siglos atrás, llegando a reconocerlas en el protagonismo de las poblaciones indígenas que se levantaban contra los conquistadores y en defensa de sus comunidades. Rebeliones y actos de resistencia jalonan la historia argentina hasta el presente y, sin duda, pueden ser incorporados a un libro más extenso que dé cuenta de la complejidad de las demandas y la heterogeneidad de los protagonistas. Como parte de esa historia, durante el siglo XIX la resistencia al trabajo disciplinado, al ingreso a la milicia así como a los malos tratos de dueños y capataces en las estancias conformaron el cuadro conflictivo de las áreas rurales. Pero fueron las transformaciones de la sociedad argentina consolidadas desde fines del siglo XIX las que dieron origen a conflictos que perdurarían durante el siglo XX.

En efecto, a partir de la consolidación del Estado nacional, la economía capitalista y la constitución de la clase trabajadora con intereses diferenciados de intereses de los patrones y el Estado, se fueron diseñando repertorios de confrontación que se convirtieron en el rostro visible de la protesta social durante buena parte del siglo XX. Manifestaciones, boicots, huelgas y sabotajes

se perfilaron como los medios de lucha más apropiados, aunque no todos tuvieron igual impacto para impulsar los cambios que se reclamaban. Cuando la protesta trascendió las cuestiones reivindicativas de carácter económico para explotar sentimientos de solidaridad de clase, alcanzó un grado de profundidad mayor. De todos los repertorios, la huelga permaneció como forma predominante de lucha y de negociación colectiva hasta casi un siglo más tarde, cuando a partir de la implementación de políticas económicas neoliberales, se modificó el rol del Estado, se desindustrializó el país y se produjo una intensa desproletarización. Desde ese momento, la huelga perdió parte de su eficacia y su lugar fue ocupado por los cortes de calles y de rutas nacionales y provinciales.

Durante buena parte del siglo XX, las huelgas definieron un espacio para el conflicto -el de las fábricas y sus alrededores- y delinearon una cultura obrera centrada en torno al lugar de trabajo. En cambio, las huelgas generales extendían la protesta al ámbito de la ciudad, convirtiendo las calles y plazas en el escenario de la confrontación. Huelgas parciales y huelgas generales así como manifestaciones callejeras fueron colocando el boicot y el sabotaje en un lugar secundario. Las fábricas y talleres diseminados en las ciudades resultaron escenarios propicios para las huelgas, pero las protestas podían extenderse a las calles adyacentes que, a veces, se convertían en verdaderos campos de batalla.

Las manifestaciones, en cambio, ocupaban el espacio público cercano a los íconos del poder: las plazas públicas. Era en esos espacios donde los trabajadores se mostraban a los otros (gobernantes, prensa, público en general) y demostraban sus peticiones. Las plazas albergaron cientos de actos, en particular los realizados cada 1ro de Mayo como parte de los rituales obreros.

Las plazas Lorea, Miserere (Once de septiembre) y Congreso en la ciudad de Buenos Aires fueron algunas de las preferidas para manifestar, reclamar y exigir diversos derechos. En el interior del país también se fueron marcando espacios cargados de simbolismo, y se puede afirmar que en cada ciudad hubo una o más plazas para expresar las demandas. Pero el espacio privilegiado de expresión política y social y con mayor carga simbólica fue la Plaza de Mayo, frente a la sede de las autoridades de la Nación. No es nuestro interés historiar los usos y el simbolismo de la Plaza de Mayo, sino sólo destacar su relación con la protesta. Allí, desde 1945, cuando se congregaron los trabajadores que apoyaban a Perón, hasta el día de hoy, se fueron consolidando rituales de reivindicación política, social y de derechos humanos. No en vano el principal movimiento de derechos humanos surgido en el país se denomina «Madres de Plaza de Mayo».

Las huelgas eran a veces acompañadas por un alto grado de violencia que se extendía al vecindario o a las adyacencias donde se concentraba una manifestación. Así sucedió en las huelgas generales de las primeras décadas del siglo XX, aunque la confrontación adquirió mayor territorialidad en torno a 1969, cuando se involucraron en el conflicto vecinos, estudiantes, empleados, artistas e intelectuales. La incorporación de estos sectores ampliando el arco de la protesta modificó el clásico modelo de movilizaciones estrictamente obreras, y comenzaron a ser designadas por los estudiosos con el nombre de «movimientos sociales».

Cuando las protestas adquirían un carácter violento se debía generalmente a la escasa disposición de los grupos dominantes a reconocer los derechos de los obreros, quienes debían recurrir a medidas de fuerza para satisfacer, así fuese parcialmente, sus demandas. Ade-

más, a lo largo de la historia se pusieron escasos límites a la violencia del ejército y la policía que intervinieron en no pocas ocasiones a favor de los empresarios. Con el aumento de la represión luego del golpe militar que en 1955 derrocó al presidente Perón, se fue consolidando una cultura de la rebelión que privilegió el uso de la violencia como arma política. Sabotajes, tomas de fábricas y rehenes conformaron la «resistencia» al régimen militar; y de esta forma los trabajadores no sólo reclamaban por sus reivindicaciones específicas sino también, y de manera inédita, por el retorno de su líder al poder. Sólo una década más tarde aparecieron las prácticas violentas de la guerrilla urbana, que, aunque no formaban parte de la protesta obrera, se entrometieron en ella amenazando o secuestrando empresarios y directivos con el fin, a veces, de obtener mejoras para los trabajadores.

Con la entronización de la dictadura militar, la violencia desde arriba no sólo se adueñó de los lugares de trabajo sino que derramó su manto de desaparición, tortura y muerte sobre un amplio conjunto de la sociedad. La acción represiva del Estado modificó profundamente el tono de la protesta, pues quienes se movilizaron (trabajadores, vecinos, jóvenes, artistas y mujeres) lo hicieron en buena medida y de manera novedosa, alrededor de los derechos humanos y en defensa de la vida.

Las formas de protesta se volvieron multiformes, y a la caída del régimen dictatorial, las profundas transformaciones de la vida económica, política, social y cultural bajo los efectos del neoliberalismo consolidaron una multiplicidad de caminos para efectuar los reclamos así como una diversidad de protagonistas y de demandas. En un plano, los modos adoptados por la beligerancia social fueron los mismos de siempre, y los trabajadores ocupa dos siguieron utilizando las huelgas como herra-

mienta tradicional aunque hubiese perdido su efectividad. En otro nivel, se configuraron modos emergentes de protestas, hasta que los cortes de rutas aparecieron como una herramienta eficiente para obtener respuestas a las demandas que la desocupación o la falta de inversión en «bienestar» habían provocado, y que las facciones políticas extendían y profundizaban.

La geografía de la protesta también fue cambiando a lo largo de todo el siglo xx. Al comienzo, las huelgas y manifestaciones se concentraban en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente, y en menor medida en ciudades como Rosario o Bahía Blanca. Durante la década del treinta y particularmente en los años peronistas, los conflictos se desparramaron por todo el país, pero el corazón siguió latiendo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Desde los años sesenta se produjo una marcada regionalización de los conflictos, que convirtió a provincias como Córdoba, Neuquén, Río Negro, Misiones o Tucumán en epicentros de la protesta social. Al finalizar el siglo xx, la cartografía conflictiva se organizó en las zonas más distantes del centro político, desde la Patagonia hasta Salta y Jujuy, aunque el bloqueo de las rutas se extendió con rapidez hasta la propia ciudad de Buenos Aires. En un complejo proceso, las protestas sintonizaron la música del apoliticismo, se integraron dentro de complicadas maquinarias políticas clientelares y, al mismo tiempo, las enfrentaron generando demandas de transparencia en la distribución de los recursos y en las decisiones que se tomaban. Además, los medios de comunicación jugaron un papel importante en la difusión de los conflictos, los reclamos y las denuncias.

El presente libro se basa en un presupuesto fuerte que organiza el relato: desde fines del siglo XIX se fue conformando una sociedad sobre la base del trabajo pro-

ductivo y una clase social, los trabajadores, que luchó permanentemente para que patrones y gobiernos los interpelara como interlocutores legítimos. A lo largo del siglo xx, en un complejo proceso, se fueron afianzando las herramientas de lucha que permitían amortiguar la explotación, y los trabajadores hicieron valer sus demandas avanzando hacia la obtención de la ciudadanía social. La opresión económica pero también política a la que fueron sometidos los trabajadores y el conjunto de los sectores populares durante las diversas dictaduras militares en los años cincuenta y sesenta favoreció la participación de otros actores sociales que se aliaron a la clase obrera, y convirtieron la protesta social en un fenómeno más heterogéneo.

Sin embargo, desde el comienzo de la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla en 1976, con la aplicación sistemática de las políticas neoliberales, comenzó un proceso de desestructuración de la sociedad del trabajo que alcanzó su punto culminante durante la década menemista. La transformación de la economía fue de tal magnitud que el desempleo y el empleo ocasional se han convertido en elementos estructurales que modificaron de manera notable tanto la sociedad como sus comportamientos. Como lógica consecuencia, las viejas formas de organización y de protesta de los trabajadores, si bien no han desaparecido, perdieron vigencia y peso. Los sindicatos son numéricamente débiles; su capacidad de movilización, de presión y poder económico ha disminuido y buena parte de su acción ha quedado concentrada en los gremios de servicios, afectados por la racionalización estatal.

Por su parte, la multiplicidad de grupos y partidos de izquierda no han logrado, desde el advenimiento de la

democracia en 1983, encauzar a los trabajadores formales, como había ocurrido a comienzos del siglo XX y, en parte, en la década de 1960. La transformación de una sociedad centrada en el trabajo, en donde las demandas centrales eran el aumento salarial o las mejoras en las condiciones de trabajo, en otra vinculada al desempleo y el empleo ocasional, asociada a la reivindicación de trabajo y de subsidios de desempleo, ha repercutido también en la composición de los actores involucrados y en las formas de protesta. Las huelgas persisten y coexisten con los nuevos repertorios, pero han perdido el lugar central que ocuparon durante casi un siglo, y hoy los obreros se aferran a los puestos de trabajo y ya no son los protagonistas centrales de la protesta. Ese lugar es ocupado por los excluidos del modelo (desocupados, cartoneros, beneficiarios de planes sociales estatales, vagabundos y mendigos), quienes dan forma a un nuevo cuadro de protestas, organizaciones y reclamos en donde los repertorios de confrontación privilegiados son los piquetes y cortes de rutas, pero también las tomas y los ataques a edificios públicos y propiedades de miembros prominentes del poder político.

Para poder mostrar las transformaciones en la protesta social hemos privilegiado en la organización de los capítulos los cambios en la estructura económica (sea en el agro o en la industria) y las transformaciones tanto de la población y del mercado laboral como de las características de las condiciones de trabajo y su impacto sobre las condiciones de vida. Las formas de organización tanto en los sindicatos como en los barrios y las corrientes políticas e ideológicas que contribuyeron a modelar las protestas también forman parte de este cuadro. Del mismo modo, se consideraron los cambios provocados en el nivel de lo político, pues afectaron las oportunidades, las formas y el curso de la protesta social. La

acción de los partidos políticos podía tanto empujar las demandas como desviarlas de su curso; hubo matices en los modos de interpelación y en las reacciones frente a la protesta de los sectores populares que diferenciaron a conservadores, radicales, peronistas y otras fuerzas políticas. Los vínculos de los reclamos con la política se basaron en una compleja trama de relaciones que dieron forma a la experiencia del clientelismo, que, por otra parte fue modificando sus mecanismos y sus redes para intercambiar promesas por votos, sobre todo a partir del fin de los gobiernos dictatoriales de origen militar. También las transformaciones del Estado ejercieron su influencia en las modalidades de la protesta, pues no era lo mismo una actitud prescindente e indiferente a los problemas sociales que otra más comprometida e intervencionista, claro que entre una y otra se desplegó una amplia gama de matices.

En el libro se dibujan las protestas que se convirtieron en centrales a lo largo del siglo XX y se coloca a los trabajadores como actores principales, aunque rodeados de un coro amplio de personajes secundarios que, a veces, podían llegar a ocupar el centro de la escena. Pero el panorama real de la protesta es mucho más amplio, y queda al margen de estas páginas un conjunto heterogéneo de actores y motivaciones. Permanecen en la sombra los diversos levantamientos de las poblaciones indígenas en el norte santafecino y en el Chaco, que, durante los años 1903, 1905 y 1924, se alzaron en armas para defender un mundo que veían como irremediabilmente perdido así como los reclamos más recientes de los grupos indígenas en defensa de sus tierras y del medio ambiente. También faltan las resistencias campesinas del norte, entre otras, porque aún son poco conocidas.

En el primer capítulo se explica la consolidación de la economía capitalista y la articulación de una sociedad del trabajo donde los productores, como resultado de las experiencias compartidas, protestaron, se organizaron y dieron forma a una cultura del trabajo internacionalista, acorde con los influjos ideológicos del anarquismo y del socialismo. Esa cultura del trabajo reclamó mediante el arma de la huelga, parcial o general, activa o de brazos caídos, el derecho a una vida mejor así como a organizarse y protestar. En el segundo capítulo se muestra la consolidación de la huelga como repertorio de confrontación y la activa participación del Estado en la regulación de la misma. Al mismo tiempo se examina el surgimiento y el desarrollo del comunismo en el seno del movimiento obrero y la emergencia del peronismo, que se convirtió en la identidad política y social dominante de los sectores populares. En el tercer capítulo se abordan los cambios en los repertorios de confrontación a la luz de las crisis políticas, con sus ciclos de inestabilidad política y alternancia entre gobiernos civiles y militares; el impacto de la represión y la vinculación de los trabajadores con otros sectores sociales como los estudiantes; y el papel de la guerrilla. En el último capítulo se destacan los cambios en los repertorios de confrontación durante la dictadura y en la democracia.

1. Huelgas, boicots y confrontación social 1880-1930

Las protestas populares no fueron desconocidas en la Argentina a lo largo de su historia y durante todo el siglo XIX hubo numerosos y sobrados ejemplos de ellas. Pero a partir de las dos últimas décadas de ese siglo cambió la naturaleza del conflicto: su carácter central era social y sus protagonistas, los trabajadores y el novel movimiento obrero que comenzaba a gestarse. El costado más visible de ese proceso no sólo eran las huelgas, los boicots y la organización gremial, sino también las manifestaciones ideológicas que lo contenían. Si bien durante este período factores como el ascenso social o la dificultad para constituir una identidad de clase amortiguaron el impacto de la protesta, no hay dudas sobre el alto nivel de conflictividad tanto en la primera década del siglo XX como durante la coyuntura de la inmediata posguerra.

Desde mediados del siglo XIX, la Argentina se transformó de tal modo que se convirtió en un país capitalista cuya base económica se fundaba en la producción de bienes primarios para la exportación a los países europeos. Si bien la extensión de la economía capitalista y de las relaciones salariales afectó diversas zonas del territorio nacional, el corazón de esas transformaciones fue la región pampeana y metropolitana, que hacia 1914 concentraba cerca de 74% de la población del país. A partir de allí se conformó un mercado de trabajo caracterizado por una demanda excedente de trabajadores debi-

do a la escasez de mano de obra nativa.

Esta carencia fue cubierta en buena medida por la llegada de miles de trabajadores extranjeros provenientes de diversas regiones de Europa, mayoritariamente de Italia y España, pero también de Francia, Alemania, Rusia, Polonia, Turquía, Grecia o el Líbano. Además de la apertura llevada adelante por las autoridades nacionales y las facilidades otorgadas a los inmigrantes, este movimiento de población fue posible también por otros factores: la aceleración de las comunicaciones marítimas y la baja de los precios del transporte mundial, las crisis cíclicas de las economías mediterráneas y, en menor medida aunque de modo significativo para la articulación de la protesta, por los conflictos políticos y sociales que empujaron a miles de individuos perseguidos políticamente a buscar nuevos horizontes en países como el nuestro. La población inmigrante, mayoritariamente adulta y masculina, que se sumó a la mano de obra nativa modificó de manera sustancial el número disponible de brazos tanto para las tareas rurales como para las urbanas. Así, la población económicamente activa saltó de 923 mil personas en 1869 a 3.360 mil en 1914.

En el campo, especialmente en las áreas del litoral pampeano y fuera de las áreas tradicionales, los trabajadores se ocuparon del cuidado de los ganados ovino y vacuno, de la siembra y la cosecha de diversos cereales (trigo, maíz, lino, sorgo) y del mantenimiento de la infraestructura necesaria para cada una de estas actividades; en Mendoza, del cultivo y la recolección de la vid; en Tucumán, de la caña de azúcar; en la Patagonia, de la cría del ganado ovino y también fueron centenares quienes se conchabaron en los quebrachales del Norte o en los yerbatales de Misiones.

Las ciudades crecieron notablemente y la población urbana, que en 1869 representaba el 33% de la población, se elevó en 1914 al 58%. Allí se conformó un amplio, peculiar y heterogéneo mundo de trabajadores, compuesto por una minoría de artesanos y obreros especializados y por una inmensa mayoría de peones y trabajadores no especializados provenientes en gran medida de áreas rurales.

Sólo una proporción menor de ellos estaba ocupada en una industria que crecía lentamente al amparo de cierto proteccionismo y de la sustitución de algunos productos importados. El sector industrial más destacado y que empleaba más trabajadores era el de la alimentación (carne, bebidas, harinas, dulces, galletitas). Su desarrollo fue relativo antes de la Primera Guerra Mundial, momento a partir del cual logró un importante crecimiento, especialmente gracias a la expansión de los grandes frigoríficos instalados en Avellaneda, Berisso, Zárate y Rosario. Una significativa cantidad de mano de obra era utilizada en la actividad textil, que también creció notablemente desde 1914; en la precaria y extendida industria del vestido, que alimentaba de manera incesante el trabajo femenino a domicilio; en algunas grandes fábricas (fósforos, tabaco) o en centenares de establecimientos medianos y pequeños de carácter artesanal (aserraderos, curtidurías, panaderías, carpinterías, ebanisterías, talabarterías, tonelerías, sombrererías, marmolerías, herrerías, talleres mecánicos).

A partir de la Primera Guerra Mundial y, más precisamente, en la década de 1920, la industria se complejizó y comenzaron a desarrollarse de manera relativa los rubros de petróleo, automotores, teléfonos, cemento, electricidad, metalurgia y maquinarias que ocuparían una significativa cantidad de individuos. Por su parte, miles de

obreros (pintores, yeseros, albañiles, peones) trabajaban en la construcción privada y pública (grandes obras de infraestructura), y si bien su peso variaba de acuerdo con la fluctuante demanda, siempre significaron un alto porcentaje de la población económicamente activa. Pero durante este período, uno de los núcleos más importantes del mundo del trabajo urbano se concentró en el sector servicios: miles eran los conductores de carros y carruajes, portuarios, marineros, foguistas, ferroviarios, tranviarios y municipales, a quienes se sumaban una multitud de empleados de comercio, que desempeñaban sus tareas en centenares de negocios medios y pequeños así como en las grandes tiendas. Esta composición del mundo laboral otorgaba una connotación particular a la clase trabajadora argentina, bastante diferente de los mundos obreros de los países europeos fuertemente industrializados, como Inglaterra o Alemania, y más parecida a la de ciudades orientadas a satisfacer la demanda de servicios.

Las condiciones de trabajo fueron, desde el comienzo de este proceso, una de las preocupaciones centrales de los trabajadores y la causa de gran parte de la protesta social. Así, los accidentes de trabajo, el hacinamiento, el empleo y la explotación de menores, las largas jornadas laborales, los bajos salarios, la desigualdad del trabajo femenino con relación al masculino, la disciplina laboral (reglamentos, capataces), el trabajo nocturno, la regularidad o la eventualidad del empleo y las propias formas de contratación de la mano de obra eran todas cuestiones que motivaron la protesta reiterada de los trabajadores, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y su calidad de vida.

Por supuesto, esas condiciones variaban notablemente de acuerdo con los diferentes rubros ocupacionales y la magnitud de las empresas. No significaba lo mis-

mo el trabajo en los frigoríficos, que eran grandes unidades de producción de capital extranjero con una compleja organización del trabajo, cuyas condiciones laborales se modificaban de sección en sección y en donde se superponían múltiples instancias de control, que el trabajo en empresas en las cuales muchas veces primaban actitudes paternalistas o donde patrones y obreros compartían lazos étnicos pues pertenecían a un mismo «paese» o pueblo y se habían vinculado mediante cadenas de llamada. Tampoco pueden asimilarse las condiciones de trabajo propias de las grandes fábricas con aquellas prevalecientes en la multitud de pequeños talleres existentes en el país, en donde la relación patrón-empleado era más directa y personal y sobre los que la mirada de los inspectores laborales estatales rara vez se detenía. Así como también eran disímiles las condiciones en las diversas empresas de transporte, caracterizadas por cierta regularidad en el empleo, de los propios de los estibadores y los trabajadores de la construcción para quienes el trabajo se regía por la eventualidad o la estacionalidad. De la seguridad otorgada por un empleo regular a la incertidumbre del trabajo ocasional que afectaba a millares de peones había un trecho muy amplio. Esa distancia determinó grados diferentes de asociación y agremiación así como estilos contrapuestos de protesta, bien expresados por las actitudes pacíficas y moderadas de los maquinistas ferroviarios (una verdadera aristocracia obrera), en un extremo, y los estibadores portuarios, tumultuarios y simpatizantes del anarquismo, en el otro.

Por su parte, también eran significativas las disparidades en las formas de percepción del salario (mensual, semanal, diario), el monto del mismo -incluso en similares trabajos- así como las variaciones que sufrían de acuerdo con los cambios en la oferta y la deman-

da de mano de obra. En aquellos momentos en que la oferta de brazos escaseaba los salarios aumentaban para atraer a los trabajadores, pero cuando abundaban los brazos disponibles, ocurría lo inverso, y la paga podía disminuir. Las fluctuaciones de la moneda y las crisis económicas también incidían sobre el nivel de los salarios y su capacidad adquisitiva, y en muchas oportunidades afectaron el ritmo de las actividades económicas.

Otro elemento a tomar en cuenta en las condiciones laborales estaba constituido por las características regionales, que variaban notablemente de un lugar a otro del país. En términos generales, eran relativamente mejores en las áreas urbanas que en las rurales, ya fuera por el mayor grado de organización gremial existente en las urbes o por la mejor visibilidad otorgada por la ciudad, donde cualquier conflicto podía ser rápidamente percibido por la sociedad, por las autoridades o por la prensa y puesto en evidencia. Aunque de similar gravedad, causó mucho más impacto en la opinión pública la Semana Trágica porteña, en 1919, que la huelga y la salvaje e impune represión a los peones rurales en la lejana Patagonia pocos años después.

Los conflictos desencadenados por los trabajadores y sus organizaciones en Buenos Aires durante la primera década del siglo XX no se limitaban sólo al abandono del trabajo como señal de protesta, sino también a la ocupación del espacio público por parte de los trabajadores a través de actos y mítines en la vía pública. Es indudable que estas acciones eran efectivas, llamaban la atención y preocupaban a los políticos y al gobierno, poniendo en evidencia las falencias de la organización del trabajo así como la ausencia de regulación estatal. Precisamente, la protesta condujo al Estado hacia el camino de la construcción de políticas sociales. Y en las áreas

urbanas también se concentraban aquellos sectores laborales y gremios más poderosos, como los portuarios o los marineros y foguistas, que, al ocupar un lugar clave en la economía agroexportadora, poseían mayor capacidad de presión y negociación que otros sectores. Durante la primera década del siglo XX, cada vez que hacían huelga los obreros del puerto o, una década después, cuando lo hacían los marineros y foguistas, las autoridades se veían obligadas a considerar los reclamos gremiales ya negociar (o ciertamente reprimir), frente a la posibilidad de la detención de un bien vital para el país como las exportaciones de carnes y cereales.

Dentro del mundo del trabajo rural, las condiciones laborales también variaban de manera notable. Aunque malas en la próspera pampa húmeda, eran francamente peores en aquellas regiones aisladas, en donde los sectores patronales imponían su voluntad de manera arbitraria, como en los quebrachales del Chaco y el norte de Santa Fe o en los yerbatales misioneros, donde el trabajo libre era poco menos que inexistente. En la pampa húmeda, los miles de trabajadores rurales eran peones asalariados que se empleaban de manera estacional, principalmente en la época de la cosecha de los diversos productos agrícolas o en la de la esquila del ganado ovino. Sus reclamos se vinculaban a las largas y extenuantes jornadas de trabajo, a los bajos y cambiantes salarios, a los malos tratos, a las inclemencias del tiempo, al peso de los fardos y bolsas en la estiba o a la demanda de alimentos y alojamiento digno. Debido a las características estacionales de este trabajo el peón rural se convertía en trabajador itinerante («golondrina») y, una vez finalizadas las tareas estacionales, retornaba a su provincia o país natal podía marchar a las ciudades y alternar los trabajos rurales con los urbanos. Obviamente, esta impronta itinerante de los trabajadores rurales significó

una marcada limitación para la organización gremial, y ese escaso nivel de sindicalización les restó fuerza y cohesión, atentando contra la posibilidad de obtener mejoras; sin embargo, tenían la absoluta libertad de moverse libremente, de entrar o salir del empleo cuando querían.

En cambio, en los quebrachales del norte del país o en los yerbales misioneros, aislados de las miradas indiscretas, el lugar de trabajo actuaba como una prisión, puesto que al no cobrar sus salarios en dinero y percibir en cambio vales, además de hallarse obligados a consumir en los almacenes de las compañías empleadoras, los trabajadores se encontraban endeudados permanentemente y tenían escasa posibilidad de escapar a esa situación. Allí, las condiciones de trabajo impuestas por las empresas eran infrahumanas y casi esclavas, como fue señalado por los propios observadores del gobierno, y prácticamente no existían posibilidades de organización y protesta. Las empresas gozaban de absoluta impunidad, pues contaban con la complicidad de las autoridades locales. Cuando, en 1920, el activista de la Federación Obrera Marítima Eusebio Magnasco comenzó a organizar a los trabajadores de los yerbales, fue detenido y condenado a cumplir una larga condena por delitos que no había cometido.

Si bien es cierto que las condiciones laborales fueron más graves durante los primeros años del proceso de crecimiento y tendieron a mejorar a medida que se iban conformando y fortaleciendo las organizaciones sindicales obreras o se implementaban algunas leyes de protección laboral y seguridad social, también es cierto que, hasta bien entrado el siglo XX, las malas condiciones laborales y la desprotección perduraron, especialmente en las áreas rurales.

No obstante la diversidad y la heterogeneidad laboral señaladas, sumadas a las diferentes experiencias y tradiciones que arrastraban los trabajadores venidos desde distintos lugares del mundo y con bagajes culturales disímiles, todos ellos compartían un elemento en común: la explotación. El peón patagónico, el obrero santiagueño, el zafrero tucumano, el yerbatero misionero, los trabajadores rurales del área agrícola ganadera o los miles de obreros urbanos compartían la experiencia de la explotación a que eran sometidos por los sectores patronales y empresariales, a menudo apoyados por las fuerzas policiales. La explotación incentivó, aunque de manera diferente en calidad y en cantidad, la protesta popular por mejores condiciones laborales, salarios dignos, empleo regular y por el derecho a agremiarse ya conformar sus instituciones. Sin embargo, la explotación no fue un rasgo suficiente para dotar al conjunto de los trabajadores de una identidad de clase, pues la organización gremial no había arraigado en extensas zonas del país, lo que dificultaba la conformación de un colectivo con intereses comunes.

Aun cuando las instituciones obreras, bajo la forma tanto de sociedades mutuales como gremiales, comenzaron a gestarse y a expresar sus demandas en las décadas de 1870 y 1880, fue a partir de 1890, luego de la crisis económica y social desatada en ese año, cuando las sociedades de resistencia cobraron fuerza, impulsadas por anarquistas y socialistas, a quienes se agregarían más tarde sindicalistas revolucionarios (1905) y comunistas (1918). Estas tendencias dotaron a los trabajadores y a sus instituciones representativas de un claro perfil ideológico y político que apuntaba a la defensa de sus intereses y al reconocimiento de la identidad de clase. Sociedades de resistencia, entidades de socorro mutuo, grupos políticos, círculos culturales, diarios y

periódicos, literatura, escuelas, bibliotecas, ritos y símbolos fueron todos elementos constitutivos y de autorrepresentación de la clase trabajadora que se estaba forjando.

En efecto, en torno de 1880 apareció un sinnúmero de sociedades de resistencia en las que se nucleaban trabajadores de un mismo oficio: pintores, panaderos, albañiles, calafateadores, toneleros, picapedreros, aserradores, curtidores, yeseros, carpinteros, ebanistas, confiteros y otros. El objetivo central de esas sociedades era la defensa de sus intereses reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, en los salarios y en la calidad de vida de sus representados. Algunos de ellos, especialmente aquellos que ocupaban un lugar privilegiado en la estructura económica agroexportadora (conductores de carros, portuarios, marineros y foguistas, ferroviarios), tuvieron un peso notable y se destacaron sobre el resto por su mayor capacidad de presión. Y esto era claramente percibido por las organizaciones gremiales; así, la Federación obrera Regional Argentina (FORA) en 1905 recomendaba a sus sociedades adheridas «que de declarar la huelga [...] se pongan de acuerdo con los conductores de carros para llevar a buen fin el movimiento, por ser el carro uno de los medios de lucha más eficaz».

Con todo, la tasa de sindicalización, que no representa necesariamente el nivel de protesta, durante las tres primeras décadas del siglo XX fue baja, aunque debe tenerse en cuenta que la afiliación era absolutamente voluntaria por parte de los trabajadores, quienes debían aportar los fondos necesarios para sostener sus locales y la prensa partidaria. Este rasgo marca una diferencia fundamental con el gremialismo posterior a 1943. Al convertirse en obligatoria la afiliación sindical, con aportes mixtos de patrones y trabajadores, obviamente la tasa

de sindicalización alcanzó niveles muy altos, hecho que podía significar mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida pero no implicaba necesariamente mayor combatividad o compromiso de parte de los obreros.

Al comenzar el siglo XX se conformaron las primeras federaciones, al principio por oficios y luego por industria, con el objetivo de agrupar a los diversos gremios, que, hasta entonces, actuaban de manera dispersa y no coordinada. Esas federaciones tuvieron suerte dispar y se caracterizaron por una profunda división ideológica y política, aunque generalmente proclamaban su independencia de cualquier corriente, que, no sin dificultades, mantuvieron hasta la llegada del peronismo. Al comienzo, la disputa estuvo marcada por el enfrentamiento entre anarquistas y socialistas; si bien juntos conformaron, en 1901, la Federación Obrera Argentina (FOA), poco después, los socialistas la abandonaron y crearon la Unión Gremial de Trabajadores (UGT). La FOA se convirtió en 1904 en FORA, que un año después declaró la adhesión a los principios del anarco comunismo, con lo cual condicionó la posibilidad de incorporar gremios que respondieran a otras tendencias ideológicas. En 1905, de una división del socialismo surgió un nuevo actor político e ideológico del movimiento obrero que disputaría su orientación: el sindicalismo revolucionario. Cuatro años más tarde, organizó la Confederación Obrera de la República Argentina (CORA) e intentó, sin éxito, fusionarse con la FORA, con el objetivo poco disimulado de desplazar al anarquismo y controlar el movimiento obrero. Recién en 1915 el sindicalismo logró su propósito, al obtener la mayoría durante el IX Congreso de la FORA, momento en que el anarquismo había comenzado ya su declive y se abroquelaba en la FORA del V Congreso.

Con el arribo de Hipólito Yrigoyen al gobierno en 1916 se generó una nueva relación entre el Estado y el movimiento obrero orientado por el sindicalismo, caracterizada por la predisposición al diálogo de las partes; sin embargo, no debe olvidarse que la conflictividad obrera hacia finales de la década de 1910 fue una de las más altas de la historia argentina. En 1922, el sindicalismo revolucionario, incapaz de contener los conflictos con otras tendencias en el seno de la FORA del IX Congreso, creó la Unión Sindical Argentina (USA), pero, al incluir en sus estatutos la prohibición de intervención de los partidos políticos y proclamar la consigna de «todo el poder a los sindicatos», encontró una fuerte oposición en aquellos gremios orientados por los comunistas, como la Federación Gráfica Bonaerense y la Federación Obrera Local. En 1926, tras constantes conflictos, los gremios comunistas se marcharon de la USA que ahora quedaba en manos del sindicalismo revolucionario, inaugurando un periodo de clara debilidad del movimiento obrero organizado.

La constitución, desde 1880, de un espectro político compuesto por el Partido Socialista, creado en 1896, el movimiento anarquista, las organizaciones sindicalistas o, desde 1918, los diversos grupos comunistas no sólo apuntó a orientar políticamente a los trabajadores sino a dotarlos de una ideología claramente definida en torno a la transformación de la sociedad y, en algunos casos, a la autoconciencia y la lucha de clases. Si bien cada uno de estos sectores políticos compartía el sujeto de interpelación (los trabajadores), sustentaban posturas diferentes sobre los caminos para transformar la sociedad argentina.

Así como los socialistas se inclinaron por motorizar una propuesta de lucha no violenta, gradual y paulatina, en la cual los trabajadores extranjeros debían con-

vertirse en ciudadanos argentinos para integrarse al sistema político y transformarlo gradualmente desde adentro, obteniendo, por ejemplo, una legislación laboral protectora; los anarquistas se opusieron al sistema electoral, al parlamentarismo, y fueron partidarios de un trastocamiento radical y violento del sistema capitalista, pregando la destrucción del Estado, aunque no aceptaban la lucha de clases pues violentaba el principio de la libertad y la soberanía individual. Con estas convicciones, los anarquistas se adaptaron bien a la sociedad cosmopolita de comienzos del siglo xx y lideraron la protesta de unos sectores populares poco preocupados por las elecciones, e incluso trascendieron el conflicto obrero al encabezar uno de los escasos movimientos de nuestra historia vinculados al consumo: la huelga de inquilinos. En efecto, en 1907 se produjo, durante dos meses, tanto en Buenos Aires como en Rosario, una singular protesta de los habitantes de los conventillos, que exigían una rebaja en el precio de los alquileres y mejoras en las condiciones de habitabilidad. Más de 200 mil inquilinos, alentados fervientemente por los activistas libertarios, mientras de resto de los agrupamientos políticos sólo atinaba al apoyo discursivo, dejaron de pagar los alquileres y realizaron varias movilizaciones compuestas por miles de personas, especialmente mujeres y niños, por diversas calles de la ciudad, lo que causó un fuerte impacto en el resto de la población.

Por su parte, los sindicalistas revolucionarios planteaban que la base de la organización y la acción era el sindicato. Como los anarquistas, rechazaban la política parlamentaria aunque, a diferencia de aquéllos, no veían problemas en negociar con el gobierno si ello favorecía en última instancia a las organizaciones sindicales. Si los socialistas abogaban por el gradualismo, los anarquistas

por la destrucción violenta del sistema y los sindicalistas revolucionarios por el fortalecimiento del gremio, los diversos grupos comunistas -conformados a partir del estallido de la Revolución Soviética y producto de desprendimientos del socialismo o del anarquismo, que en 1920 confluirían en la formación del Partido Comunista-, aunque variaron sus tácticas en numerosas oportunidades y sufrieron los vaivenes de la política externa de la Unión Soviética, plantearon la lucha de clases y la formación de un partido de clase como objetivo básico.

Fueron estos agrupamientos políticos, a partir de la convicción y la perseverancia de sus militantes, quienes crearon una cultura de izquierda y dotaron al conjunto de los trabajadores de sus ritos, símbolos y formas de organización y manifestación. Cientos de activistas y propagandistas recorrían una y otra vez el país con el objeto de crear sociedades gremiales y centros culturales allí donde no existían; decenas de periódicos gremiales e ideológicos informaban sobre diversos aspectos del mundo del trabajo y ponían en locución la cuestión obrera. Círculos culturales, centros de estudios y una amplia red asociativa se complementaban con la prensa y, aunque con dificultades, intentaban construir una cultura alternativa a partir de la organización de conferencias, escuelas, bibliotecas y actos recreativos de diversa índole. Allí, los trabajadores creaban sus espacios de sociabilidad: efectuaban representaciones teatrales, bailaban, cantaban, se educaban, entonaban sus himnos, desplegaban sus símbolos

Pero, sin dudas, la construcción simbólica y ritual más significativa fue la celebración del 1º de Mayo, fecha trascendental del calendario de la izquierda y motivo de la protesta obrera con mayor grado de conciencia. Aunque con diferencias interpretativas, todas las tendencias

obreras adoptaron esta fecha como propia desde el mismo momento en que la Internacional Socialista reunida en el Congreso de París la declaró, en 1889, como la celebración de la clase obrera en homenaje a los líderes obreros ajusticiados en Chicago dos años antes. Este acto se constituyó en una instancia propia de la clase obrera argentina y en una manifestación deliberada que ponía en evidencia el costado voluntario de la construcción de la clase obrera. Era un espacio de conquista ritual y simbólica, un lugar de cohesión de los intereses obreros, pues allí se representaban todas las aspiraciones y reivindicaciones de los trabajadores, fueran políticas, ideológicas, culturales o sociales.

Claro que las corrientes ideológicas asignaban diferentes sentidos al 1º de Mayo. Para el socialismo se trataba de una jornada festiva en la que los trabajadores se manifestaban pacíficamente y reclamaban sus mejoras. El anarquismo, en cambio, demostró siempre una profunda aversión hacia esa concepción, pues la fecha no podía tener un carácter festivo porque desviaba la verdadera significación de la protesta, considerada una jornada de luto y dolor por los centenares de trabajadores encarcelados, muertos y heridos por la «explotación capitalista».

Desde comienzos del siglo XX, esta manifestación trascendió el espacio cerrado para proyectarse en la geografía abierta de la ciudad. Todos los años, las agrupaciones obreras realizaban movilizaciones callejeras en donde los diferentes gremios, federaciones y organizaciones políticas se nucleaban con sus pancartas, banderas y símbolos identificatorios en las plazas Lorea, Mazzini, Constitución o Miserere (Once) convertidas en lugares paradigmáticos de concentración. Desde allí se recorrían calles y avenidas, mostrándose a los otros como un actor social que centralizaba en ese acto todos sus

reclamos, tanto las reivindicaciones de carácter económico (mayores salarios, descanso dominical, jornada de ocho horas, leyes protectoras) como las políticas (derogación de las leyes represivas, libertades, derecho de asociación gremial y política).

Esas manifestaciones reflejaban el grado de organización y lucha del movimiento obrero; a veces fueron imponentes y en ocasiones carecieron de significación. Pero nunca pasaron desapercibidas para las autoridades, que siempre las controlaban desde cerca y, en numerosas oportunidades, reprimieron con dureza a los trabajadores, como ocurrió en 1904 y, especialmente, en 1909, cuando la represión policial provocó la muerte de varios manifestantes. La respuesta de las organizaciones obreras fue inmediata: declararon la huelga general por tiempo indeterminado y llevaron adelante una de las protestas solidarias más significativas del período, hecho conocido como la Semana Roja. Las demandas incluían el esclarecimiento sobre los responsables de la represión y su castigo así como la abolición del Código de Penalidades porteño. La huelga duró una semana, tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires y se extendió hacia Rosario y a varias ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. La capital quedó paralizada por el cese casi total de actividades. Miles de trabajadores adhirieron espontáneamente y organizaron piquetes para impedir que los sectores patronales utilizaran rompehuelgas. La policía volvió a reprimir a los manifestantes en el sepelio de las víctimas del 1º de Mayo, lo que provocó nuevas muertes e incrementó la indignación de los trabajadores. Finalmente, el gobierno decidió negociar con el Comité de Huelga y cedió ante algunos de los reclamos: se abolió el Código de Penalidades, se liberó a los detenidos durante esa semana y se reabrieron los locales y periódicos obreros. Si bien algunos sectores

estaban insatisfechos por no haber logrado el castigo a los responsables, otros vivieron el desenlace como un triunfo.

Tanto la celebración del 1º de Mayo como las características de las instituciones obreras formaban parte de una cultura de izquierda internacionalista acorde con el fuerte cosmopolitismo de la clase obrera argentina de entonces, pero también vinculada a la convicción de que la transformación de la sociedad era un hecho en el que debía estar involucrado el conjunto de los trabajadores del mundo. Por eso, por un fuerte espíritu de solidaridad de clase y de convicciones políticas, fue frecuente la relación con instituciones de otras latitudes así como que las federaciones se solidarizaran con causas lejanas, no sólo a partir de declaraciones sino también de medidas concretas, como la huelga general realizada en 1909 por la FORA en protesta por el fusilamiento del educador catalán Francisco Ferrer en España o la formidable campaña en los años veinte para anular las condenas a muerte que el gobierno norteamericano había impuesto a los obreros Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti. En efecto, en el transcurso de cuarenta días, entre el 15 de julio y el 23 de agosto de 1927, se realizaron cuatro huelgas generales y varios mítines públicos en las plazas Congreso y Once, que lograron el raro fenómeno de unir a comunistas, anarquistas, socialistas y sindicalistas detrás de la infructuosa defensa de Sacco y Vanzetti.

Las manifestaciones de carácter internacionalista y de solidaridad de clase fueron, sin duda, importantes, pero sólo significaron un segmento cuantitativamente pequeño de la protesta y movilizaron escasamente al conjunto de los trabajadores. La gran mayoría de los conflictos estuvo vinculada a los reclamos estrictamente gremiales. Fue en las grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario, que en el lapso de medio siglo habían

modificado de manera radical su población original, o en decenas de ciudades intermedias de la región pampeana -como Junín, Zárate, Campana, Pergamino, Berisso, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata- así como también en varias localidades del interior -Córdoba, Tucumán, Santa Fe en donde se hicieron visibles las primeras protestas de trabajadores. A partir de los años ochenta y por varias décadas, tales protestas se convirtieron en manifestaciones inherentes al mundo del trabajo en la Argentina y fueron las expresiones del descontento e insatisfacción de los trabajadores frente a las condiciones de trabajo (salarios, accidentes, hacinamiento), de vida (vivienda y salud), la represión y por el derecho de agremiación.

Junto a esas expresiones, y del mismo modo que había ocurrido en numerosos países europeos, los trabajadores locales, guiados por activistas libertarios y socialistas, conformaron sus primeras instituciones de autodefensa y de lucha (sociedades mutuales, gremiales, culturales y de prensa). Paralelamente, las organizaciones obreras manifestaron de diversas formas su descontento y sus reclamos a través de una serie de repertorios de confrontación novedosos para el país, pero con una larga tradición bien consolidada en el viejo continente desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX: huelgas, boicots, sabotajes y manifestaciones callejeras. Todas estas formas de protesta sirvieron para ejercer su presión sobre los empresarios y las autoridades del Estado tanto para mejorar sus condiciones laborales como para exigir el derecho a la organización.

De todas las formas de protesta mencionadas, la huelga fue la herramienta de lucha más utilizada por los trabajadores y sus organizaciones y se convirtió en la característica saliente de la protesta popular durante todo el siglo XX, aunque en las últimas dos décadas su peso ha declinado sensiblemente a causa de la notable

desestructuración y reconversión del aparato productivo. Las hubo parciales y generales, reivindicativas y solidarias, pacíficas y violentas, de carácter meramente reivindicativo y políticas. De algún modo se fue definiendo una forma de exteriorizar la protesta que tendría perdurabilidad. La huelga se iniciaba con la presentación de un petitorio en el que se expresaban claramente las demandas; si la respuesta era negativa, los trabajadores abandonaban las tareas. Si bien en numerosas ocasiones los conflictos se desarrollaron de manera pacífica, en otras, el rechazo de los reclamos inducía a los trabajadores a apostarse en los alrededores de las fábricas y a conformar piquetes de huelga para impedir la entrada de quienes no adherían a la medida de fuerza o, en el caso de que los hubiera, atacar a los rompeshuelgas contratados por las empresas. Al mismo tiempo, la policía intensificaba la vigilancia; en no pocas ocasiones impedía la reunión de los manifestantes y muchas veces la confrontación terminaba con una vio lenta represión.

Junto a la huelga, los gremios, especialmente aquellos orientados por anarquistas, recurrieron frecuentemente al boicot, que implicaba el llamamiento de la población a no consumir los productos de la empresa en conflicto. El boicot no se utilizó en el sentido de los movimientos de consumo, sino como una herramienta de lucha que reforzaba las demandas y complementaba la huelga. Esta táctica fue adoptada como medio de lucha durante el primer congreso de la FOA en 1901, y ese mismo año se aplicó por primera vez por los obreros de la fábrica de cigarrillos La Popular, en protesta por el maltrato patronal. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, las organizaciones obreras lo usaron con frecuencia en numerosas empresas con las que mantenían enfrentamientos de carácter gremial. Así, cervecerías, panaderías, confiterías, dulcerías, fábricas de cigarrillos

y de fósforos, entre otras, se vieron perjudicadas por la aplicación del boicot obrero. La falta de datos al respecto no ayuda a determinar el éxito o el fracaso de esta medida de lucha. Aunque hay indicios en las memorias empresariales que permiten suponer que a veces los gremios lograron imponer sus demandas, parecería que en la mayoría de los casos pasaron inadvertidos para la población. Por otra parte, esta medida sufrió bastante desprestigio, pues en algunas oportunidades la utilizaron algunos gremialistas para extorsionar a las empresas con el objeto de obtener dinero para sus organizaciones y por otros inescrupulosos para obtener beneficios personales. El boicot fue condenado por el Partido Socialista en su congreso de 1919, que recomendó el control y reglamentación de su aplicación y la propia FORA anarquista decidió en su X Congreso en 1928 abolirlo como arma de lucha debido a su manipulación ya los inconvenientes creados alas organizaciones gremiales.

Con las huelgas hay menos dudas en cuanto a sus resultados. Existen cifras de número de huelgas, de huelguistas, de jornadas perdidas, de acuerdos y de convenios firmados. y también están las estadísticas y memorias oficiales, los boletines empresariales o los informes de prensa para confirmar la mayor o menor importancia y la magnitud de los conflictos.

En la Argentina se produjeron numerosas huelgas parciales y generales, notoriamente menos en el campo que en las áreas urbanas. En el espacio rural bonaerense pampeano las diversas organizaciones gremiales, impulsadas por anarquistas y sindicalistas, intentaron organizar a los trabajadores rurales, lo cual hicieron con relativo éxito debido tanto al carácter estacional del empleo rural, que hacia muy dificultoso construir sindicatos y mantener las redes de solidaridad, como a la diversi-

dad de labores y los intereses entrecruzados que podían manifestar los peones, los carreros y los propios chacareros. En efecto, cuando estos últimos protestaron en 1912 por el alto precio de los arrendamientos, no se aliaron con los peones quienes, a su vez, cuando protagonizaron sus conflictos se vieron enfrentados a los chacareros.

Las protestas rurales fueron escasas durante la primera década del siglo XX y recién en el conflictivo ciclo de 1917-1921 se produjeron algunas luchas importantes que se focalizaron en zonas y oficios determinados. Peones de máquinas trilladoras, estibadores y carreros realizaron huelgas en el norte fluvial bonaerense (Baradero, San Pedro); peones y braceros, en el sur de la provincia (Tres Arroyos); peones, braceros, estibadores y carreros, en el este y sur de Córdoba y en el sur de Santa Fe. Las protestas se realizaban generalmente en el momento de la cosecha presentando pliegos de condiciones con las reivindicaciones (aumentos salariales, duración de la jornada, condiciones de trabajo, reconocimiento de sus organizaciones). Los reclamos se dirigían principalmente a empresarios de transporte y maquinarias agrícolas, a cerealistas y, en menor medida, a los chacareros. Al comienzo de la década de 1920, estas protestas tendieron a decaer y a ceder ante las presiones patronales y gubernamentales.

Por su parte, en 1912, los chacareros arrendatarios protagonizaron un importante conflicto en las zonas maiceras del este de Córdoba, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La protesta, conocida como el Grito de Alcorta, tuvo su causa profunda en la caída del precio del maíz, que llevó a los chacareros a exigir a los estancieros ya las compañías colonizadoras arrendamientos más bajos y contratos más largos. A comienzos de ese año se conformó la Sociedad Cosmopolita de Agricultores y,

poco después, una asamblea de 2 mil agricultores reunidos en Alcorta declaró el paro de actividades (cese de roturaciones y siembra) por tiempo indeterminado. Ante la negativa de los grandes propietarios, la protesta se extendió rápidamente a las zonas mencionadas y, unos meses después, debido a la necesidad de unir esfuerzos, los diversos comités de lucha y sociedades de chacareros se constituyeron en la Federación Agraria Argentina.

Aunque de dimensiones y características diferentes, también se enmarcan en el conflicto rural las protestas obreras realizadas en el norte chaqueño y en la Patagonia. En el primer caso se trata de los conflictos protagonizados entre 1919 y 1921 por los trabajadores vinculados a la Forestal Argentina, empresa poseedora de cerca de 2 millones de hectáreas de tierra destinadas a la explotación de madera y tanino. Allí, como se ha expresado, las condiciones de trabajo eran particularmente duras para los miles de obreros-hacheros y peones de playa procedentes de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Paraguay. La formación de la Federación Obrera del Tanino y de otros centros obreros activó la protesta que comenzó con la presentación de pliegos de condiciones que denunciaban los magros salarios, las largas jornadas laborales, el encarecimiento de los productos alimenticios, la desocupación y la falta de libertad. Huelgas, manifestaciones y sabotajes caracterizaron la protesta, que finalmente fue neutralizada por la presión de las empresas y la fuerte represión ejercida por la gendarmería.

En la Patagonia, la característica dominante era el alto grado de concentración de la tierra y la explotación extensiva del ganado ovino en las grandes estancias diseminadas por el amplio territorio patagónico. Se explotaba la lana y la carne para la exportación y se faenaba en

los frigoríficos costeros. La mano de obra (peones, trabajadores de frigorífico, empleados de comercio) provenía de Chile, de diversas provincias y también de Europa. Las labores rurales eran de carácter estacional y se concentraban en la primavera, cuando se realizaba la esquila y, en el verano, con la marcación y la selección de animales. Durante el resto del año sólo se necesitaban grupos de peones para cuidar las majadas. Las condiciones de vida y de trabajo eran pésimas: precarias viviendas, escasa alimentación, salarios bajos, uso de vailes, malos tratos. Esta situación empeoró durante la Primera Guerra Mundial, debido al descenso de los precios internacionales de la lana y de la demanda. Los estancieros recurrieron a la reducción de costos, contratando menos peones y bajando los salarios, con lo que generaron un profundo malestar.

La protesta irrumpió en la primavera de 1920 como una extensión del conflicto mantenido por carreros y marítimos y por la propaganda de la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA del IX Congreso, que organizó a los peones. Presentación de petitorios, huelgas parciales, actos violentos de represalia y la intervención del ejército caracterizaron la protesta durante un largo año en el que no se obtuvieron resultados positivos para los trabajadores. En la primavera de 1921 estalló finalmente la huelga general, apoyada por anarquistas y sindicalistas, que paralizó el trabajo en toda la región y contó con una activa participación de sus actores, que, en ocasiones, recurrieron a la violencia (ocupación de estancias) ante la arbitrariedad patronal y gubernamental. En efecto, los llamamientos de la Sociedad Rural y de la Liga de Comercio a la represión, favorecidos por la ambigüedad del gobierno de Yrigoyen, generaron la participación del ejército así como de las guar-

dias blancas de la Liga Patriótica. De esta forma se desencadenó una inédita represión, que apeló a la aplicación de la ley marcial y a fusilamientos sumarios, lo que provocó la derrota de la protesta y centenares de víctimas enterradas en fosas comunes.

En las áreas urbanas, hasta 1901 se llevaron a cabo únicamente huelgas de carácter parcial, principalmente en el transporte (ferrocarril, carreros), la manufactura, la construcción y el puerto. A partir de ese año hicieron irrupción las huelgas generales que hasta 1930 fueron dieciocho. Nueve de ellas se realizaron entre 1901 y 1910, impulsadas por los anarquistas, y en menor medida, por los socialistas. Las huelgas generales fueron masivas en 1902, 1907 y 1909, y tuvieron distinto grado de adhesión en los casos restantes. En las dos décadas siguientes, las huelgas fueron convocadas por las diversas centrales en las que se dividía el movimiento obrero (FORA del V y del IX Congreso, COA, USA), aunque fueron los anarquistas quienes las impulsaron con mayor convicción. Prácticamente todos los paros generales realizados entre 1910 y 1930 fueron parciales y limitados al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La noción de solidaridad de clase fue clave para articular la protesta que se exteriorizaba con las huelgas generales. A ella se sumaba la visión internacionalista, la idea de que la huelga era un acto colectivo de carácter universal cuyo objetivo era hacer visible el poder de los trabajadores. La clave de la acción colectiva era la denuncia de las acciones represivas de los sectores dominantes; así, la represión policial en una manifestación, el encarcelamiento y la muerte de militantes obreros, la aplicación del estado de sitio u otras leyes represivas eran todos elementos que accionaban la solidaridad obrera.

En 1901, el motivo de las huelgas generales fue la protesta por la muerte de un obrero en la refinería de

azúcar de la ciudad de Rosario y en 1921, el asesinato de varios obreros a manos de la Liga Patriótica. En 1909, la causa fué la represión de la manifestación anarquista del 1º de Mayo; ese mismo año se produjo otra, de escasa magnitud, en repudio de al fusilamiento de Francisco Ferrer en España. En 1927 se realizaron cuatro huelgas generales de alcance parcial en solidaridad con Sacco y Vanzetti. En 1902, el motivo de la protesta general fue la solidaridad con los trabajadores portuarios, en 1907, con los obreros en huelga en el puerto de Ingeniero White y en 1919, con los trabajadores de la empresa metalúrgica Vasena. En 1905, el motivo fue la aplicación del estado de sitio (recurso constitucional que permitía la represión preventiva cuando el Estado establecía que se podía producir una conmoción pública); en 1908 y 1910, las huelgas generales se realizaron en oposición a la aplicación de la Ley de Residencia sancionada en 1902, que permitía la expulsión de los extranjeros «indeseables». En 1923 se convocó a una huelga general de protesta contra el asesinato en la cárcel del anarquista alemán Kurt Wilkens, detenido por haber asesinado al coronel Varela, jefe de las fuerzas del ejército que habían reprimido a los peones patagónicos. En 1924, el paro general decretado por la USA tuvo motivos absolutamente diferentes: se trató del desacuerdo de las organizaciones obreras con la sanción del proyecto de ley de jubilaciones, que implicaba, a su criterio, «un principio de perturbación en el seno de la clase trabajadora». La USA se oponía al descuento de los salarios obreros para garantizar la formación de una caja previsional pues suponía que eso deprimiría al salario.

Las organizaciones que convocaban a las huelgas generales tenían posturas diferentes ante este medio de lucha, pues no era aceptado sin debate en el seno de las federaciones gremiales. Los más intransigentes y quie-

nes privilegiaban la huelga general como acción de lucha eran los anarquistas nucleados en la FORA, pues pensaban que contribuiría al advenimiento de la revolución social. Para ellos, la huelga general era un momento de inflexión en el combate contra el sistema capitalista y encarnaba bien el espíritu de urgencia revolucionaria. No era interpretada como una herramienta para obtener mejoras generales para los trabajadores sino como un arma revolucionaria para transformar radicalmente la sociedad. Los socialistas y la UGT no consideraban la huelga general como un mecanismo de transformación radical; en cambio, eran partidarios de una acción gradual y organizada y frecuentemente rechazaron la posibilidad de convocar a la huelga general. No se trataba de una cuestión de principios, sino que debía servir a los fines de los trabajadores; por eso sólo apelaban a ella cuando las condiciones eran favorables y las circunstancias lo requerían (por ejemplo, en ocasiones excepcionales como la aplicación del estado de sitio y la supresión de garantías constitucionales). En algunas oportunidades, como en 1907 y 1909, se vieron obligados a confluir con los anarquistas pero estableciendo claros límites a la prolongación temporal de la medida. Los sindicalistas creían y usaban la huelga general pero en un sentido diferente al del anarquismo: la entendían como un arma para extender y exteriorizar la protesta obrera y también como una táctica encaminada a presionar a empresarios y gobierno. Se trataba de utilizar la huelga general para obtener las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores.

Al margen de las huelgas generales y de los resultados obtenidos, el movimiento huelguístico y de protesta en la Argentina se vinculaba centralmente a las condiciones de trabajo, a la cuestión salarial, al crecimiento del gremialismo ya diferentes aspectos críticos de las coyunturas socioeconómicas. Hubo dos momentos en

los que la protesta adquirió connotaciones importantes y que se destacaron claramente del resto. El primero comprende el período entre los años 1902 y 1907, en el que se realizaron más de 1.300 huelgas, las más importantes protagonizadas por portuarios, carreros, cocheros y ferroviarios. Estas huelgas se originaron en causas diversas, algunas fueron de carácter solidario pero la mayoría se relacionó con la demanda de aumentos salariales; el resto exigía la jornada de ocho horas, el descanso dominical, la libertad de los presos obreros, el derecho de asociación o la oposición a la ley de Residencia, a los despidos, a la aplicación de multas, al maltrato patronal, al trabajo a destajo, al trucksystem (sistema de vales).

Si bien con matices, las huelgas y la protesta obrera en términos generales así como sus manifestaciones ideológicas, fueron percibidas como una amenaza contra el orden social y político por parte de la elite gobernante. En un primer momento, reaccionó con la represión policial y la instrumentación de medidas destinadas a combatir al anarquismo, como la sanción de la Ley de Residencia y la aplicación del estado de sitio. Sin abandonar estas políticas, lentamente comenzaron a articularse respuestas que buscaban integrar a los trabajadores a mecanismos institucionales, entre los que debería agregarse la sanción del sufragio obligatorio y secreto masculino en 1912. Esos mecanismos buscaban regular las acciones colectivas de los trabajadores y marcar ciertos límites al poder de los empresarios. Así se sancionaron las primeras leyes de carácter laboral y, en 1907, se creó el Departamento Nacional del Trabajo, destinado a investigar las causas de los conflictos así como a regularlos. Estas medidas eran sólo leves paliativos puesto que, además de insuficientes, sólo tenían vigencia limitada en la ciudad de Buenos Aires y en los

territorios nacionales, mientras el resto del país, y en especial las áreas rurales, quedaba fuera de su alcance. Más allá de estas restricciones, las primeras políticas sociales fueron en buena medida una respuesta a la protesta obrera. El segundo periodo de auge de la protesta comprende los años 1917 a 1921; sin duda, el de mayor conflictividad en toda esta etapa. Si bien abarcó diversas zonas del territorio del país, la mayor parte se desarrolló en Buenos Aires. La protesta obrera de estos años se enmarcó en una coyuntura particular relacionada con la Primera Guerra Mundial, que derivó en la existencia de saldos migratorios negativos desde 1913. Este hecho acabó con la oferta excedente de mano de obra y fortaleció las demandas gremiales. Por otro lado, en algunos momentos de la coyuntura se produjo un deterioro del salario que incrementaron los reclamos. Esto se dio en un contexto en el que la experiencia organizativa acumulada desde fines del siglo XIX y el impacto de la Revolución Bolchevique de 1917 estimularon el clima ideológico de cuestionamiento a los sectores patronales, especialmente debido al fuerte activismo de clase de éstos a través de organizaciones como la Asociación Nacional del Trabajo, la Sociedad Rural o la Bolsa de Comercio, que intervenían activa y agresivamente en los conflictos, ya fuese presionando al gobierno para que reprimiera a los trabajadores en conflicto u organizando activamente a los rompehuelgas para vencer la resistencia obrera.

Durante ese lustro se produjeron 965 huelgas que involucraron a 851.831 huelguistas, lo que significó una pérdida de más de 11 millones de jornadas de trabajo. Estos conflictos se produjeron en sectores clave, ferroviarios, marímeros y foguistas, que tenían la virtud de paralizar el tráfico agroexportador; y también en sectores como los frigoríficos y los empleados y los obreros munici-

pales, no menos importantes por su peso económico y por sus implicaciones políticas. En 1917 fueron a la huelga los marineros y foguistas nucleados en la poderosa Federación Obrera Marítima (FOM), en demanda de aumentos de salarios, aplicación de la jornada de ocho horas y mejoras en las condiciones de embarque (higiene y alimentación). Los ferroviarios, bajo la conducción de La Fraternidad, que agrupaba a los conductores de locomotoras, y la Federación Obrera Ferroviaria (FOF), presentaron un pliego de condiciones con diversos reclamos. Los municipales lo hicieron en demanda de aumentos salariales y los obreros frigoríficos reivindicando cuestiones salariales y de condiciones de trabajo.

De una u otra forma, estos conflictos duraron varios años e hicieron emerger diversas cuestiones: en primer lugar, el fortalecimiento de las organizaciones gremiales como la FOM, la FOF, La Fraternidad o los obreros y empleados municipales, las cuales, más allá del signo ideológico (sindicalista o socialista) que ostentara su conducción, estaban en condiciones de negociar tanto con empresarios como con el Estado. El gran problema del mundo gremial seguía radicando en la persistencia de la división ideológico-política y tanto anarquistas como comunistas, sindicalistas y socialistas privilegiaban sus diferencias a sus posibles puntos en común. Esta tendencia a la dispersión del movimiento obrero significó un impedimento para encarar acciones comunes. En segundo término es de destacar el nuevo rol desempeñado por el Estado. Si bien el gobierno de Yrigoyen no profundizó demasiado la legislación social iniciada por los conservadores, introdujo un cambio importante en la forma de conducir los conflictos. El presidente impulsaba la intervención del Departamento Nacional del Trabajo o participaba como mediador personalmente. De esta

forma, obligó en varias ocasiones a los empresarios a ceder ante las presiones sindicales; esto ocurrió con las huelgas marítimas y en algunas ferroviarias. Sin embargo, cuando no podía resolver los conflictos debido a la intransigencia patronal persistía en actitudes represivas hacia los trabajadores, como ocurrió con las huelgas municipales, en los frigoríficos, en algunas ferroviarias o en la ya mencionada huelga de los peones patagónicos. Por último, es importante señalar la fuerte intolerancia de las organizaciones patronales, que actuaban como verdaderas entidades de clase ante las reclamaciones obreras y la acción del gobierno. En cada gremio en lucha creían percibir las avanzadas del maximalismo y en cada oportunidad en que el gobierno decidía laudar de manera favorable a los reclamos gremiales, las entidades empresarias lo rechazaban tajantemente y lo acusaban de estar en connivencia con los sindicatos.

Fue en este clima de turbulencia social -agravado por un contexto internacional en el que la Revolución Soviética y los estallidos en Alemania y Hungría marcaban una coyuntura revolucionaria-, de contradicciones militantes, de ambigüedades gubernamentales y de temores e intolerancia patronales en donde estalló el conflicto conocido como la Semana Trágica que, quizás, fue la protesta obrera más importante hasta el Cordobazo en 1969.

En enero de 1919, mientras se desarrollaba una huelga en demanda de aumento de salarios y reducción de la jornada laboral en los talleres metalúrgicos Vasena, se produjo un incidente entre huelguistas y rompehuelgas, que finalizó con una represión policial que provocó varios muertos. Inmediatamente, la FORA del V Congreso (anarquista) llamó a la huelga general para el día 9 de

enero, a la que se incorporó de manera ambigua la FORA del IX Congreso (sindicalista). Durante todo el día se produjeron incidentes entre piquetes de huelguistas y la policía, hasta que esta última reprimió el cortejo fúnebre de las víctimas obreras anteriores, provocando nuevas muertes entre los manifestantes. El impacto de los acontecimientos fue notable y se agravó con la ola de rumores injustificados lanzados por los sectores de la derecha conservadora sobre un inminente «complot maximalista». El ejército intervino de manera unilateral y el gobierno primero intentó hallar una salida negociada para luego optar por la represión no sólo estatal sino también paraestatal, en tanto que alentó ala acción a grupos de civiles a los que dejó actuar libremente. Estos grupos saquearon locales obreros, golpearon a manifestantes y atacaron el barrio judío del Once. Por su parte, el movimiento obrero manifestó durante el conflicto posturas diferentes. Mientras los anarquistas vinculados a la FORA del V Congreso intentaban sin éxito empujar el conflicto hacia un movimiento insurreccional, los sindicalistas de la FORA del IX Congreso trataban, como habían hecho siempre, de evitar actos de violencia y encausar la negociación con los empresarios y el Estado. Los socialistas, por su parte, usaban la tribuna parlamentaria para denunciar la represión e intentaban también encaminar el enfrentamiento por canales pacíficos así como impulsar una legislación laboral que evitara este tipo de estallidos.

De hecho, el impacto del movimiento huelguístico acaecido entre 1917 y 1921 así como los sucesos de la Semana Trágica empujaron al gobierno a profundizar su política laboral. En principio, amplió las atribuciones del Departamento Nacional de Trabajo al otorgarle funciones de arbitraje y de policía laboral más definidas. Por otro

lado, envió diversas iniciativas laborales al Congreso: a mediados de 1919 presentó varios proyectos referidos a contratos colectivos de trabajo, conciliación y arbitraje de conflictos y asociaciones profesionales. Dos años más tarde, el Poder Ejecutivo envió a las Cámaras un proyecto de Código de Trabajo que profundizaba el rol regulador del Estado y, si bien se asemejaba bastante al de 1904, se diferenciaba de aquel sustancialmente en que atenúa notablemente los aspectos represivos al consagrar el derecho de huelga y legalizar la sindicalización.

Finalmente, estos proyectos no fueron tratados en el Parlamento, poco interesado en reformas sociales, y la ausencia de conflictos graves durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) contribuyó a su olvido. Este descenso de la conflictividad social se vinculaba, principalmente, a una coyuntura económica favorable, caracterizada por el incremento sostenido de las exportaciones y cierto descenso del costo de vida así como el consecuente aumento del salario real, que mejoró relativamente los niveles de vida de los trabajadores. El resultado de esta situación, sumado a los constantes enfrentamientos entre las diversas tendencias obreras, repercutió en el movimiento huelguístico de reclamos salariales y mejores condiciones de trabajo, que descendió notablemente. Se mantuvo, en cambio, la intensidad de las protestas de carácter solidario aunque limitadas casi al mundo de la militancia obrera.

2. Crisis e industrialización: el nuevo marco de la protesta, 1930-1955

La crisis económica, la profundización del proceso de industrialización y la mayor intervención estatal contribuyeron a modelar la protesta social en un periodo marcado por el cuestionamiento a la democracia liberal y la consolidación de diversos proyectos políticos nacionalistas. La crisis de 1929 colocó el problema de la desocupación como un tema crucial, al menos en los primeros años de la década del treinta, y la consolidación del trabajo fabril afianzó los repertorios de confrontación asociados con el mundo del trabajo, como las huelgas. El mayor peso social y político de los trabajadores, paralelo a la fuerte participación del Estado, contribuyó a una mayor integración de las clases asalariadas en el plano social y político.

La fe en el progreso que la economía agroexportadora parecía sostener comenzó a ser cuestionada desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, y algunos sectores empezaron a plantear la necesidad de diversificar la economía e impulsar y profundizar el proceso de industrialización. La prédica a favor de la industria pudo instalarse porque la Primera Guerra Mundial creó dificultades para el abastecimiento de algunos bienes necesarios tanto para otras industrias como para el consumo y, además, porque ya era innegable el desarrollo de fábricas y talleres que abastecían el mercado interno.

Al mismo tiempo, muchas compañías que hasta ese momento habían introducido los bienes terminados comenzaron a instalarse en el país, y cuando estalló la crisis económica de 1929, que afectó tan duramente a los países del mundo occidental, se produjo una profundización del proceso de sustitución de importaciones. Nuevas fábricas se sumaron a las existentes y algunas de ellas se transformaron, ampliaron y reorganizaron para poder satisfacer los requerimientos de la demanda. La industria textil creció notablemente, del mismo modo que la explotación petrolera y el sector de la construcción, que, a la vez, dio un importante impulso a la industria del cemento. Las firmas norteamericanas que habían desembarcado en el país en la década previa consolidaron su presencia en el panorama industrial local y se destacaron en los rubros metalúrgico y de maquinarias (Remington Ran, Otis Elevator), automotor (Chrysler, General Motors), de artículos eléctricos (Standard Electric, General Electric, RCA Victor, IBM) y en la industria farmacéutica y de tocador (Colgate, Parke Davis, Palmolive).

Las nuevas compañías y las empresas que se ampliaban y renovaban se localizaron en la zona periférica de la ciudad de Buenos Aires conformando un primer cinturón industrial, hacia donde se trasladaban los trabajadores. A su vez, las mejoras en los servicios de transporte urbano posibilitaron una mayor separación entre las áreas de radicación de industrias y las viviendas de las familias obreras. El crecimiento de la industria del cemento y las características de su explotación favorecieron la constitución de lo que se ha denominado «sistema de fábrica con villa obrera» en algunos lugares como Olavarría (provincia de Buenos Aires) o Frías (provincia de Santiago del Estero). Del mismo modo, la explotación de hidrocarburos se realizó sobre la base de la unión del

yacimiento petrolífero y el campamento, como sucedió en las zonas de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

El crecimiento de las actividades industriales favoreció también la ampliación de las oportunidades laborales y la relativa consolidación de los trabajadores de talleres y fábricas. Al mismo tiempo, el trabajo y las relaciones con los patrones variaron en algunas empresas, pues la transformación de las compañías implicó la introducción de maquinarias y de formas de organización del trabajo que modificaban las relaciones más cercanas y personales existentes en los pequeños talleres. Las mejoras en las instalaciones y en los métodos de elaboración tuvieron consecuencias en la experiencia de trabajo, ya que se introdujeron métodos modernos de control de la eficiencia y el esfuerzo del trabajador. Como consecuencia de todos estos cambios, el obrero moderno adquirió perfiles más definidos, mientras que la figura del trabajador que alternaba su trabajo con labores rurales o como cuentapropista fue perdiendo intensidad.

También en el campo se produjeron algunos cambios. La agricultura, que desde fines del siglo XIX se había expandido con el cultivo de trigo, maíz, lino, avena, cebada y centeno, comenzó a retroceder durante la década del treinta. Todos los cultivos fueron afectados, especialmente el de maíz. La disminución del área sembrada fue acompañada por el aumento de las tierras destinadas a la ganadería, aunque es cierto que la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial amortiguó la tendencia a tal reducción. La transferencia de tierras de una actividad a otra gravitó sobre la estructura ocupacional, pues la ganadería demandaba menos trabajadores que la agricultura. Así, disminuyó el número de arrendatarios y se incrementó la desocupación de los peones rurales.

El desenvolvimiento de la economía fue bastante complejo y contradictorio, sobre todo cuando se desencadenó la crisis económica de 1929. La caída de los precios agropecuarios afectó tanto a la agricultura como a la ganadería. Mientras el aumento de los derechos de importación favoreció a las industrias que transformaban las materias primas producidas en el país (alimenticias, textiles), la desvalorización de la moneda perjudicó a las que debían importar materias primas (metalúrgicas).

Inicialmente, los desajustes provocados por la crisis transformaron radicalmente los niveles de ocupación, que, según información oficial, afectó a 334 mil personas en 1932. El 44% de los desocupados eran trabajadores agrícolas y jornaleros sin especificación de tareas y el 37%, obreros industriales y del transporte. Más de la mitad de los desocupados estaban en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, y el resto en las de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Sin embargo, el fenómeno fue semejante a un movimiento sísmico, pues se sintió también en las tradicionales provincias expulsoras de mano de obra, como las del Noroeste, las que incrementaban la oferta de brazos con los peones golondrinas. La desocupación se convirtió en un dato que acompañó buena parte del periodo y lo diferenció notablemente de la etapa previa; aunque también es cierto que la recuperación económica comenzada en 1933 ayudó a mejorar los niveles de empleo, sobre todo con la creciente actividad industrial.

Por diversas razones disminuyó la inmigración transoceánica, se acentuó la inmigración de los países limítrofes (Bolivia, Paraguay) y se aceleró la migración interna. La disminución de la cantidad de inmigrantes y la llegada constante al litoral de trabajadores provenientes de las otras provincias argentinas modificaron tam-

bién el perfil sociocultural de la mano de obra ocupada en las diversas actividades. La industria de las grandes ciudades, en particular Buenos Aires, atrajo a miles de personas, que abandonaban las provincias y se radicaban en las zonas adyacentes al puerto de Buenos Aires y en la periferia de esa ciudad. Ese crecimiento de la población no estuvo relacionado con una adecuada oferta de vivienda y se conformaron las «villas miserias», barrios de viviendas sumamente precarias, donde en muchas oportunidades se recreaban las formas de vida existentes en los lugares de origen de sus residentes.

La disminución constante de inmigrantes provocó la paulatina nacionalización de la mano de obra y la pérdida de cosmopolitismo de la clase obrera. Este proceso no sólo fue provocado por el cambio en la relación extranjeros/nativos, sino también por la creación de un espacio para la recepción y difusión de las prácticas discursivas del nacionalismo y por una mayor difusión de los contenidos relacionados con una corriente que podríamos denominar nativista.

En el plano político, la situación sufrió también profundas mutaciones. El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 puso fin a la experiencia democrática de los gobiernos radicales. Desde el gobierno de Uriburu, y prácticamente durante toda la década, los sindicatos orientados por anarquistas y comunistas fueron perseguidos y empujados a la clandestinidad; sus líderes fueron encarcelados, torturados y obligados a exiliarse, y los extranjeros considerados peligrosos por el régimen fueron deportados. Se aplicaron sistemáticamente la ley marcial y el estado de sitio y se creó la Sección Especial de la Policía, con el objetivo de «extirpar» el comunismo y perseguir a los activistas de izquierda. La vida sindical del periodo se desarrolló entre la represión lisa y llana y

una mayor intervención gubernamental en las relaciones laborales, pues desde algunas instituciones estatales se reconoció que los sindicatos podían tener un lugar subordinado en el proceso político.

En cuanto a las condiciones de trabajo, durante la década de 1930 persistieron los viejos problemas relacionados con la jornada laboral, los salarios y las condiciones de salubridad e higiene, aunque comenzaron a percibirse ciertos cambios. En algunas actividades -la industria de la carne, por ejemplo-, las largas jornadas de trabajo, propias de períodos expansivos de la producción, se convirtieron en jornadas inestables, en las que un día podía trabajarse 14 horas y en otro apenas 5 o 6 horas. La inestabilidad de la jornada laboral estuvo en la base de las demandas para establecer la llamada garantía horaria. Con este mecanismo se buscaba establecer también un salario que garantizara la subsistencia del trabajador y su familia. Al mismo tiempo, y como la situación de los trabajadores no era uniforme, comenzaron a visualizarse los signos de los beneficios obtenidos por algunas capas del mundo obrero. Los trabajadores más organizados, como los ferroviarios, podían mostrar sus logros en materia de bienestar. Servicios de salud, proveedurías y áreas de descanso eran el producto de su mayor poder de negociación tanto por su importancia para el desenvolvimiento económico como por el grado de organización que tenían.

De modo que la mayor organización de los trabajadores redundó no sólo en la consolidación de algunos gremios con poder como La Fraternidad (maquinistas ferroviarios), sino también en la puesta en práctica de programas de asistencia social que buscaban fomentar sociedades de ayuda mutua, cooperativas y la instalación de consultorios médicos, odontológicos y legales

para los afiliados. En algunos gremios se puso énfasis en la creación de escuelas técnicas y en la práctica de deportes. Sin embargo, no todos los sindicatos tenían los medios para organizar programas sociales, pues carecían de recursos. Debe considerarse que la afiliación a los sindicatos y el aporte de dinero no eran aún obligatorios, razón por la cual muchas veces los gremios no podían concretar esas aspiraciones. En algunos casos, el aporte de los gobiernos municipales fue importante en esta materia, como sucedió con los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, cuyo gobierno proveyó los elementos indispensables para levantar un centro recreativo. Al promediar la década del treinta, algunos gremios también inauguraron centros de vacaciones en las sierras de Córdoba.

Pero no sólo los trabajadores demandaron y realizaron aquellas relacionadas con su bienestar y el de sus familias, las empresas también comenzaron a desarrollar políticas, aunque limitadas, en ese sentido. Las compañías que constituían una unidad entre la fábrica y la villa obrera construyeron viviendas y áreas de recreación para sus empleados. Las grandes empresas como Grafa (textil), Swift y Armour (frigoríficos) y Ducilo (fibras sintéticas) crearon clubes sociales y deportivos que se sumaron a los ya organizados por algunos sindicatos. Sin embargo, la inmensa mayoría de las fábricas y los talleres carecían de estas áreas sociales.

Lo mismo sucedía en el interior del país. En algunas regiones, como en los obrajes de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Chaco o en los yerbales misioneros, persistían las peores condiciones de vida y de trabajo. La labor en los obrajes, algodonales, yerbales, ingenios y canteras se caracterizaba por las jornadas extenuantes y la mala alimentación. Los trabajadores estaban a merced de conchabadores y capataces que

abusaban de ellos en extremo, y eran expoliados por el endeudamiento que significaba el pago de sus salarios con vales y la obligación de comprar mercaderías en las proveedurías patronales a precios abusivos. Como se ha sostenido en el capítulo anterior, el pago de salarios con mercaderías era un sistema clave de la explotación capitalista en estas zonas y se practicaba en los lugares donde el poder del patrón no estaba bajo la mirada atenta de las organizaciones gremiales y contaba con la complacencia de las autoridades locales y nacionales. Incluso, se practicaba a pesar de los esfuerzos realizados por algunos funcionarios del Departamento Nacional del Trabajo o de la acción de denuncia permanente de los diputados socialistas en la Cámara de Diputados.

En estas regiones, la protesta colectiva fue casi inexistente y en numerosas oportunidades, quedaba en los marcos de la resistencia individual ante los abusos cometidos, pues, la mayoría de las veces, ante el menor asomo de cuestionamiento de las malas condiciones de vida y de trabajo, los asalariados eran despedidos y sus familias desalojadas de los ranchos miserables. El poder y la arbitrariedad de las empresas era posible porque los intereses de las autoridades confluían con los de las compañías y convertían las nociones de justicia, igualdad y libertad en conceptos vacíos de sus componentes más elementales.

Como se ha visto, la expansión de la industria hizo más visible la figura del trabajador industrial, hecho que tuvo consecuencias importantes en la organización y consolidación de los gremios por industria y que condujo a la conformación de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1930. Su creación puede interpretarse como el logro de la constitución de una organización unificada que podía cohesionar la lucha sindical para obtener los derechos económicos y sociales de los tra-

bajadores. En la conformación de la CGT confluyeron la unión Sindical Argentina, de tendencia sindicalista, y la Confederación Obrera Argentina, predominantemente socialista. La iniciativa de la unidad le correspondió a la Federación Obrera Poligráfica Argentina, que propuso la creación de una central unificadora «para contrarrestar la ofensiva del capitalismo». Sólo la FORA anarquista fue totalmente refractaria a la unidad sindical.

Se ha señalado también que, durante las primeras décadas del siglo XX, esas confederaciones gremiales no lograron agrupar la totalidad de los sindicatos existentes y compitieron entre sí para afiliar a los trabajadores. De algún modo, la militancia gastaba su tiempo, sus energías y sus recursos en combatirse mutuamente. Las razones de esa competencia eran políticas, pues había diferencias sobre las formas de combatir la explotación, de vincularse con los partidos políticos y con el Estado. Pese a las divergencias, todas las ideologías relacionadas con el mundo obrero imaginaban necesaria la unidad para combatir al capital, pero en la práctica, las disidencias implicaban la existencia de múltiples identidades políticas. En 1930 se logró esa unidad, aunque no se amortiguaron las disputas ideológicas -incluso las personales- entre sindicalistas, anarquistas, socialistas y comunistas. Como resultado de las disidencias se produjeron nuevas divisiones en 1935 y 1943. Recién durante los gobiernos de Perón la CGT lograría mantener la unidad, aunque a costa de perder la autonomía de sus miembros hasta convertirse en la ejecutora de las políticas gubernamentales en el movimiento sindical.

Aunque las organizaciones gremiales de la CGT planteaban la necesidad de la unidad sindical, lo cierto es que recelaban entre sí, ya fuese porque las consideraban anarquistas o porque apoyaban a sectores críticos

u opositores dentro de la organización sindical opuesta. El proyecto de unidad determinaba el principio de independencia de los sindicatos de todos los partidos políticos y agrupaciones ideológicas, y establecía límites a los obreros con responsabilidades en la organización gremial para ocupar los cargos políticos a nivel nacional o provincial. El proceso de unificación se concretó el 27 de septiembre de 1930 luego del derrocamiento del presidente Yrigoyen y cuando comenzaban a sentirse las consecuencias de la crisis económica.

La unificación se realizó con la hegemonía de los sectores sindicalistas y el predominio de la Unión Ferroviaria; por eso pronto estallaron las tensiones entre socialistas y sindicalistas. Además en 1935, los comunistas, que habían ido consolidando su presencia en diferentes actividades industriales, abandonaron la táctica de «lucha de clase contra clase» y entraron en la CGT socialista. Ese mismo año se produjo una importante crisis en la Confederación, que barrió los deseos de unidad y agudizó la competencia entre sindicalistas y socialistas.

El gremio ferroviario estuvo en el foco de la tormenta debido a la actitud de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad ante la crítica situación del sector. A raíz de la crisis económica de 1929, se había producido una importante declinación del tráfico en los ferrocarriles y, en consecuencia, de las ganancias. Por esa situación, las empresas querían despedir a seis mil trabajadores. Para evitarlo, los dirigentes gremiales aceptaron la distribución de las tareas entre el personal existente, la reducción de la jornada laboral y descuentos en los sueldos para pagar al personal que se consideraba sobrante. Las decisiones se aceptaron a regañadientes y afectaron la credibilidad de los sindicalistas, que hasta entonces ha-

bían sido hegemónicos. La situación fue aprovechada por socialistas y comunistas, que realizaron una activa campaña contra los dirigentes sindicales ferroviarios.

El conflicto ferroviario desencadenó la división de la organización gremial y de allí surgieron la CGT Catamarca, con hegemonía sindicalista y la CGT Independencia, orientada por socialistas. La primera dependía de la Federación Obrera Marítima y de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos. La CGT socialista incluía sindicatos como la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, la Federación de Empleados de Comercio, la Unión Tranviarios y la Unión Obreros Municipales. Si la convivencia entre socialistas y sindicalistas fue complicada, no lo fue menos entre socialistas y comunistas. Aunque al inicio los comunistas moderaron sus consignas y enfatizaron la necesidad de la unidad, las brechas se abrieron cuando los nazis invadieron la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos internacionales operaban tanto a favor de la acción conjunta de socialistas y comunistas como de las discrepancias.

La Guerra Civil española y la campaña antifascista ofrecieron un amplio espacio para las coincidencias y el trabajo conjunto en contra de la «opresión imperialista». La denuncia del imperialismo fue clave en la táctica del Partido Comunista y motivó varios roces con las posturas del socialismo. Pero cuando el ejército alemán invadió la URSS en 1941, los comunistas entendieron que se había modificado el carácter de la guerra, por la que abandonaron el lenguaje de denuncia del imperialismo y promovieron la defensa de las democracias amenazadas por el nazismo, entre las que incluían a la Unión Soviética. Esta postura parecía acortar las diferencias entre comunistas y socialistas, pero perduraban otras razones para mantener la discordia entre ellos. Las críticas

de los comunistas a la dirección cegetista sobre el «neutralismo político» y su diálogo con el gobierno eran un punto de fricción importante. Las discusiones entre unos y otros se mantuvieron hasta que se produjo una nueva separación en 1943.

La CGT N° 1 se declaraba políticamente prescindente y estaba encabezada por Luis Domenech, que nucleaba a los gremios ferroviarios, tranviarios y cerveceros. La CGT N° 2 era liderada por el socialista Francisco Pérez Leirós y apoyada por los gremios de la construcción, los gráficos, los empleados de comercio, los metalúrgicos y La Fraternidad. Las divisiones, enfrentamientos y luchas en el seno de la CGT hicieron que al producirse el golpe de Estado de 1943 estuviera dividida y debilitada, situación que favoreció la intervención del nuevo secretario de Trabajo, coronel Juan Domingo Perón, en las cuestiones laborales y sindicales.

En términos generales se puede señalar que la organización sindical durante el período 1930-1945 creció, aunque no de manera espectacular. El grado de sindicalización variaba según las ramas de actividad y la región del país. Había gremios que ya se habían afianzado como organizaciones obreras, como por ejemplo, La Fraternidad, que agrupaba a más del 90% de los maquinistas y fogoneros y la Unión Ferroviaria, que representaba al 80% de los trabajadores. La afiliación era menor en otros casos, como en las industrias metalúrgica y gráfica o en los numerosos ramos vinculados con la construcción. La afiliación a un gremio era voluntaria, lo mismo que los aportes para el sostenimiento de la institución. Incluso la mayoría de los dirigentes gremiales cumplía sus funciones sin recibir ningún tipo de remuneración -aunque es cierto que gremios poderosos como el de los ferroviarios asignaron a sus funcionarios una renta equivalente a la

que tenían cuando ejercían su oficio-. Estos rasgos afectaban claramente la acción de los dirigentes gremiales, que debían esforzarse para evitar divisiones y el descontento de las bases. Además, aunque se iba verificando un proceso de burocratización, eran infrecuentes los casos de corrupción de los dirigentes sindicales.

Todas las transformaciones analizadas influyeron en las formas que adquirieron la protesta social y la movilización de los trabajadores. Las luchas llevadas a cabo durante la década del treinta pueden dividirse en dos etapas claramente diferenciadas. La primera, de 1930 a 1934, se distinguió por la tendencia decreciente a la movilización, acorde con las dificultades planteadas por la crisis económica y la visibilidad de la protesta de los desocupados. No obstante, en 1932 se produjeron huelgas importantes entre los trabajadores petroleros de Comodoro Rivadavia y en los frigoríficos de Buenos Aires. El segundo período se extendió desde mediados de la década, cuando, al reactivarse la economía, se promovió también la ocupación, lo que robusteció la capacidad de negociación del sindicalismo. En esta etapa, numerosos conflictos se resolvieron a través de la negociación, hecho visible en el número de huelgas ganadas y transigidas. La mayor institucionalización del conflicto fue posible también porque los trabajadores contaron con una organización más proclive al diálogo. La CGT asumió al comienzo la función de coordinar la política de sus miembros, pero, a medida que se fue consolidando su relación con el Estado, en particular durante el peronismo, fue asumiendo una función mediadora entre las demandas de los sindicatos que la integraban y el Estado, hasta convertirse en la ejecutora de las políticas de gobierno.

También es importante destacar que el estallido de la crisis de 1929 no repercutió en todos los sectores de la actividad económica por igual. Favoreció aquellas actividades relacionadas con la sustitución de importaciones y afectó de manera significativa las industrias tradicionales de exportación, como la de la carne. El impacto de la crisis se hizo sentir en los primeros años sobre todo porque la desocupación fue su resultado más visible. Protestas de desocupados fueron frecuentes en la zona aledaña al puerto de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se conformó una coordinadora de desocupados. La desocupación impulsó la organización de «ollas populares» con el doble sentido de ayudar a mitigar el hambre y de protestar por la falta de trabajo. La olla popular congregaba al trabajador y su familia, pero eran las mujeres las encargadas de preparar los alimentos.

Sin embargo, la desocupación como motor de la protesta social fue desapareciendo a medida que el fantasma de la crisis se alejaba, y el mundo del trabajo siguió siendo el foco desde donde surgían las razones para alimentar huelgas y manifestaciones, que siguieron desarrollándose a lo largo de la década del treinta y la del cuarenta. La consolidación del proceso de sustitución de importaciones convirtió a la manufactura en la actividad principal en el desarrollo de las huelgas, seguida por el transporte y la construcción. Las causas de las huelgas eran similares a las del período anterior: mejores condiciones de trabajo y salarios adecuados, pero también cobraron fuerzas las demandas por estabilidad laboral, en particular en aquellas actividades económicas que habían sido afectadas por la crisis económica.

Aunque se produjeron numerosos paros parciales, las huelgas generales no tuvieron la virulencia del pasa-

do, en comparación con el período anterior. De todos modos, el panorama de la protesta organizada en fábricas y talleres fue más complejo, pues a la paralización de las tareas se sumaron los paros parciales y el trabajo a desgano o a reglamento. La noción de trabajo al reglamento estaba asociada fundamentalmente a la extensión de los convenios colectivos de trabajo en algunas ramas industriales que establecían las pautas y modalidades de trabajo. El proceso de negociación colectiva que involucró a trabajadores, empresarios y Estado fue el resultado de la intensidad y la difusión alcanzada por la movilización y por los conflictos laborales que acompañaron la reactivación del ciclo económico experimentado desde 1935.

Así, las protestas en el mundo del trabajo, que al inicio de la década del treinta parecían estar adormecidas, comenzaron a activarse paulatinamente, hasta alcanzar un carácter de confrontación violenta en la huelga general solidaria con el gremio de la construcción en 1936. La huelga general del 7 y el 8 de enero fue declarada por el Comité de Defensa y Solidaridad con los obreros de la construcción y apoyada por la CGT Independencia, mientras que la CGT Catamarca se mantuvo al margen. Además, algunos gremios adhirieron agregando sus propios objetivos para la huelga. Por ejemplo, la Federación de Líneas de Colectivos protestó por la persecución oficial a los colectivos y contra los monopolios del transporte, y el Sindicato Único de Obreros de la Madera reclamó la libertad de todos los presos sociales.

Los trabajadores de la construcción se encontraban en huelga desde el mes de octubre de 1935, en demanda de aumento de salarios, el reconocimiento del sindicato, la abolición del trabajo a destajo, el descanso dominical, la jornada de cuatro horas los sábados y por

la responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo. La huelga general solidaria se declaró para el día 7 de enero de 1936 y fue reforzada con la realización de asambleas en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y con un acto en la Plaza Once. La protesta se extendió a los barrios más alejados del centro, como Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Crespo, Caballito y Chacarita.

Asambleas, piquetes, ataques a diferentes medios de transporte (trenes, colectivos, tranvías), en particular a los tranvías de la empresa Anglo, y movilizaciones barriales fueron las formas que adquirió la protesta. Según el diario La Prensa del 8 de enero de 1936, se habían movilizado «muchachos, mujeres, chicos y hombres», que se reunían en las esquinas y participaban en los ataques a los medios de transporte. Los reclamos de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y la movilización de los vecinos tuvo una rápida respuesta en la intervención de la policía, que detuvo a varios dirigentes, cerró algunos locales gremiales, y prohibió las asambleas y los actos públicos. Como en el gremio de la construcción se había conformado una importante corriente gremial comunista, intervino también la Sección Especial de la policía y se detuvo a varios militantes de esa tendencia ideológica, además algunos civiles atacaron a los manifestantes, tal como sucedió durante los acontecimientos ocurridos en la Semana Trágica de 1919. La huelga general de enero de 1936 se mantuvo durante dos días, aunque el paro continuó en el gremio de la construcción, que obtuvo algunas de las demandas luego de casi cien días de inactividad. Sin embargo el triunfo más claro de la movilización gremial fue la conformación de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que rompió con la atomización del gremio.

En cuanto a otras formas de protesta, como manifestaciones y mitines, se mantuvieron a la largo de toda

la década del treinta, en particular aquellos que se organizaban los 1ro de Mayo. Aunque en 1925 la fecha había sido declarada feriado nacional, no era reconocida ni por los empresarios ni por los gobiernos conservadores, por lo que los obreros podían ser despedidos y las manifestaciones prohibidas. Para evitar las persecuciones, las conmemoraciones se realizaron en algunas ocasiones en locales cerrados (Casa Suiza, Salón Verdi), tal como ocurrió en 1932 y en 1935, cuando la CGT organizó sendos actos para reclamar la creación de un seguro nacional a la desocupación, la vejez y la invalidez, la reducción de la jornada de trabajo, el establecimiento de comisiones mixtas para la fijación de los salarios, el cumplimiento de la legislación del trabajo y vacaciones pagas.

La oposición a la guerra al fascismo y el reclamo de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo convocaron la participación de la CGT y de los partidos Socialista, Comunista, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista en el acto organizado el 1° de Mayo de 1936. Las columnas marcharon desde Plaza Once hasta el Congreso por la avenida Rivadavia. Como en otras manifestaciones, se llevaban carteles, banderas y pancartas alusivas y se entonaban diversos cánticos. Siguiendo la tradición inaugurada a comienzos del siglo xx, año tras año, socialistas, sindicalistas y comunistas, así como las debilitadas huestes anarquistas, realizaron numerosos actos que competían entre sí.

También se realizaban demostraciones callejeras y reuniones improvisadas en fábricas y en barrios como una forma de reivindicar el derecho de reunión, que había sido cercenado durante los gobiernos de Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo, caracterizados por la constante persecución a los opositores.

En cuanto a los trabajadores rurales es bastante

complicado un análisis de los conflictos que se produjeron en diversas regiones del país, sobre todo porque se conoce poco y sigue siendo notable la ausencia de investigaciones sobre el tema. En la etapa previa y durante la década del treinta en los pueblos del litoral pampeano se organizaron Sindicatos de Oficios Varios (SOV) que nucleaban a un conjunto heterogéneo de trabajadores, incluso los peones rurales. También se produjeron huelgas vinculadas con la agricultura protagonizadas por los trabajadores portuarios de los pequeños puertos del litoral o por los estibadores; reclamaron por las condiciones de trabajo en las empresas cerealeras, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. En esta última, los jornaleros desocupados protestaron hacia 1939 reclamando el derecho a la subsistencia del trabajador y su familia, y lograron la intervención del Departamento Nacional del Trabajo.

La mediación de un resorte del Estado como el Departamento Nacional del Trabajo es un claro indicio de la mayor institucionalización del conflicto laboral, visible, por otra parte, en el incremento de las huelgas transigidas, que favorecían la obtención de las demandas por parte de los trabajadores. Sin embargo, el cambio en el nivel de intervención estatal en los conflictos laborales se produjo entre 1943 y 1946, cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el entonces coronel Perón realizó una clara política de cooptación de trabajadores y gremios, así como de confrontación abierta con las organizaciones comunistas y socialistas en el seno del movimiento obrero.

El golpe militar de 1943 encontró a los trabajadores divididos y sin una representación en el nivel nacional. El sindicalismo tenía un desarrollo desigual en el país pero no era una fuerza menor si se lo compara con otros mo-

vimientos obreros de América Latina, incluso con algunos de Europa. Los gremios del transporte y de los servicios como ferrocarriles, puertos, comercio y gráficos estaban en manos de socialistas y sindicalistas. Los comunistas, en cambio, lograron organizar algunos gremios industriales, y desde 1942 compartieron el liderazgo del movimiento sindical. Sin embargo, la tarea de los comunistas no era fácil porque debían enfrentarse a la permanente hostilidad de los empresarios y del Estado.

La llegada de Perón al Departamento Nacional del Trabajo produjo un cambio en la política represiva del gobierno militar, pues partía de la premisa de que los trabajadores no debían estar sometidos a la voluntad de los empresarios y que la intransigencia patronal podía llevar a rebeliones que alterarían el orden social. Para él, la intervención estatal podía encauzar cualquier proceso que amenazara con la confrontación entre las clases. El cambio clave estuvo dado por el interés de Perón en tomar contacto con los dirigentes sindicales de los principales gremios y revisar los reclamos obreros.

El respaldo del Estado a través de la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión fue clave para aumentar la sindicalización de los trabajadores y para promover la negociación colectiva, que otorgó mayor legitimidad a las organizaciones obreras. En el camino, los dirigentes socialistas y comunistas habían sido encarcelados o simplemente barridos de los gremios por nuevos militantes obreros más proclives al nuevo gobierno, ya fuese porque se produjo un drenaje de militantes hacia el peronismo o debido a la adhesión de las masas al nuevo proyecto político.

Los dirigentes sindicales aprovecharon las nuevas orientaciones del gobierno e inicialmente trataron de mantener cierta independencia, pero al ver sus realiza-

ciones amenazadas, sobre todo cuando el caudillo fue obligado a renunciar y detenido, abandonaron su postura y se involucraron más con la figura de Perón. Fue entonces cuando se movilizaron dando forma a una de las manifestaciones más importantes de la historia argentina contemporánea, el 17 de octubre de 1945. El resultado fue el rescate de Perón de la cárcel, su reacomodamiento en el seno de las Fuerzas Armadas y la reapertura del juego político con vistas a la realización de nuevas elecciones presidenciales. El 17 de octubre fue al mismo tiempo una gran movilización de masas y una huelga general con el objetivo de liberar a Perón. La manifestación fue tanto espontánea como organizada, pues muchos trabajadores abandonaron sus lugares de trabajo y otros fueron movilizados por las organizaciones gremiales. En algunas localidades, los manifestantes se expresaron destruyendo símbolos que se asociaban con el poder: la Universidad de La Plata; los diarios El Día en La Plata, La Prensa en Buenos Aires y La Capital de Rosario; el Jockey Club, de La Plata.

Una vez que Perón obtuvo su libertad, se abrió un complejo proceso que culminó con el triunfo electoral de la alianza que lo llevó a la primera presidencia de la Nación. Sin embargo, la nueva situación no aplacó la movilización de los trabajadores, que se volcaron a las organizaciones gremiales. La afiliación sindical creció de manera inusitada, entre otras razones porque el gobierno apoyó ese proceso. También aumentó la participación en actividades sindicales; por ejemplo, en reuniones de diverso tipo, sobre todo en los dos primeros años del régimen peronista, cuando los trabajadores pensaban que sus intereses estaban amenazados. Luego, gradualmente fueron disminuyendo los niveles de participación.

Además, las autoridades estatales otorgaron el monopolio de la representación a quienes apoyaban la

política de Perón. El resultado indiscutible fue una fuerte intervención y supervisión oficial de la vida interna de las organizaciones sindicales, lo que se sumó a la centralización de los sindicatos por ramas de actividad con independencia de la calificación profesional. La centralización sindical favoreció el peso de los dirigentes nacionales sobre los locales, pues tenían la capacidad para firmar los convenios, declarar una huelga o levantarla, y también porque controlaban los recursos económicos de las organizaciones al recibir los aportes y las cuotas sindicales. El único espacio de intervención gremial que equilibraba las fuerzas internas de la organización sindical eran las comisiones internas de fábrica, que, en el marco de la movilización obrera, se multiplicaron en las empresas de todo el territorio nacional.

Un elemento clave del nuevo panorama sindical fueron el aumento del control de la CGT sobre los sindicatos y la política de intervención tanto de las autoridades sindicales nacionales como del propio gobierno, sobre todo cuando un gremio se negaba a poner fin a un conflicto. Así, numerosos sindicatos fueron intervenidos. Por ejemplo, en 1946 y en 1952, se intervino la Unión Obrera Metalúrgica; en 1946, al sindicato del calzado; en 1946, 1947 y 1950, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA); en 1947 y 1950, a los telefónicos; en 1950 y 1953, el gremio de la carne; en 1949 y 1955, la FOTIA y en 1951 la Unión Ferroviaria, por mencionar sólo algunos casos.

La intensa movilización de los trabajadores que abrió el apoyo brindado por el Estado implicó una tensión permanente entre las demandas de los trabajadores, los intereses de los líderes sindicales y las iniciativas del gobierno. Los paros y las huelgas se multiplicaron entre 1946 y 1950 tanto en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires como en las ciudades y los pueblos del in-

terior. La geografía de las huelgas fue amplia, así como diverso el perfil de los trabajadores que las protagonizaban. En 1946, los trabajadores de la carne reclamaron mejoras salariales y el reconocimiento del convenio de 1944, así como también los obreros de la construcción - de Córdoba y Rosario. En 1947 entraron en huelga los trabajadores metalúrgicos, los textiles y de la construcción, y en 1948, los bancarios. A esto habría que agregar las huelgas de los trabajadores de las empresas petroleras patagónicas de 1947 y 1948 y las de los ingenios azucareros tucumanos en 1948.

También se destaca la huelga de los trabajadores ferroviarios de 1950, porque permite percibir las dificultades para articular el nacionalismo económico del gobierno y los intereses obreros. El gobierno había nacionalizado los ferrocarriles cuando tenían un cuadro financiero complicado y se encontraron con un sistema ferroviario obsoleto, tecnológicamente atrasado y en un estado lamentable de conservación. El Estado no podía hacer frente a la modernización del servicio y mantener los sueldos de los trabajadores; por eso, las tensiones alrededor del salario estallaron en noviembre de 1950, cuando los peones, guardabarreras y guardatrenes del Ferrocarril General Roca iniciaron un paro demandando un incremento salarial. La huelga se extendió a las otras líneas ferroviarias y el gobierno, que inicialmente acordó un aumento de los jornales, dio marcha atrás a la decisión y encarceló y despidió a los huelguistas. En enero de 1951 se inició una nueva huelga de todos los gremios ferroviarios para presionar a los interventores a desistir de la política represiva y por la libertad de los dirigentes presos. La huelga fue declarada ilegal y los trabajadores movilizados por el Ejército. Alrededor de dos mil obreros fueron detenidos y trescientos de ellos quedaron encarcelados cuando la huelga finalizó.

Para 1951, el gobierno había establecido su control sobre el movimiento obrero con la destrucción de los sindicatos opositores. Sin embargo, permanecían algunos motivos para protestar: la inflación y los problemas económicos de 1951-1952 afectaron los salarios de los trabajadores, y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza convocó a un congreso para analizar el costo de vida en 1953. El gobierno evaluó peligrosa la iniciativa gremial y Perón denunció el objetivo de los trabajadores como un complot para desacreditar al gobierno. La CGT, ya subordinada al Estado, se mantuvo insensible a la convocatoria de Luz y Fuerza.

Como señala Louise Doyon, es difícil reconstruir el panorama de la protesta durante el peronismo, sobre todo a partir de 1954, cuando la censura gubernamental impidió la cobertura periodística y las estadísticas oficiales limitaron la información. Sin embargo se puede decir que la protesta, aun bajo el control del gobierno, de la CGT y de las organizaciones que se subordinaron disciplinadamente a Perón, recurrió a diversos repertorios de confrontación. El trabajo a reglamento fue el medio de lucha elegido para protestar en la industria petrolera privada, en el transporte de colectivos, en las industrias metalúrgicas, textiles, del calzado, del vidrio, del caucho y del cemento. Los paros y las huelgas de brazos caídos se produjeron en el sector de seguros, la industria láctea, los servicios de hospitales, el puerto de Buenos Aires y la industria metalúrgica. En cuanto a las huelgas generales, salvo la masiva manifestación del 17 y el 18 de octubre de 1945, no hubo expresiones de ese tipo como en el pasado pues ahora se realizaban dentro de los marcos movilizados del gobierno.

Un elemento clave para el desarrollo de las huelgas fue todo el proceso de negociación colectiva, pues muchas de ellas estallaban cuando se llegaba a un punto

muerto en la negociación. Además, las huelgas más exitosas eran aquellas que estaban relacionadas con mejoras salariales y era más difícil obtener el apoyo del gobierno en aquellas vinculadas con el control de las condiciones de trabajo.

Por otra parte, los empresarios no se mantuvieron inactivos ante la constante presión de los trabajadores y reclamaron mayor productividad. El gremialismo empresario demandó el aumento de los rendimientos laborales por medio de incentivos, la restricción de los márgenes de ausentismo -incluso los justificados- y la flexibilización del régimen de indemnizaciones por despido así como del preaviso. Los debates sobre estas cuestiones entre empresarios, dirigentes gremiales y el Estado ocuparon un lugar central durante el Congreso de la Productividad reunido en 1954.

La protesta social de los trabajadores del campo es aún menos conocida que la de los trabajadores industriales urbanos, aunque, desde que se estableció en 1944 el Estatuto del Peón, no fueron pocos los conflictos entre peones y arrendatarios principalmente. El Estatuto protegía a los trabajadores permanentes más que a los estacionales, pues determinaba la necesidad de un sueldo mínimo, asistencia médica y farmacéutica, vacaciones pagas e indemnización por despido y regulaba las condiciones en que debían ser alojados los trabajadores y la cobertura de alimentación.

La aplicación del régimen legal generó dificultades a las familias chacareras, sobre todo a las más pobres, que intensificaron la utilización de la mano de obra familiar. Como consecuencia, aumentó la desocupación y la migración hacia las ciudades. La desprotección de los trabajadores permanentes fue clara, pues los sindicatos rurales ponían su acento en la situación de los trabajadores transitorios. Los sindicatos rurales controlaban las

bolsas de trabajo que se habían creado para distribuir las labores, en particular durante la época de la cosecha, y organizaban los turnos de trabajo. Numerosos decretos fijaron salarios mínimos y condiciones de trabajo para la recolección, el desgrane y el transporte de maíz y girasol.

Los trabajadores del campo, como los obreros industriales, sentían el respaldo de los funcionarios estatales y exigieron el cumplimiento de la legislación. Además, en algunas ocasiones se asaltaron las chacras y se destruyeron las máquinas cosechadoras, tal como ocurrió en la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Los problemas laborales del agro reunieron al conjunto de las entidades patronales. La Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación de Entidades Productoras de Leche y las Confederaciones Rurales Argentinas más la Federación de Asociaciones de Productores de la Industria Forestal y el Centro de Acopiadores de Granos enviaron un memorial al Presidente de la Nación para explicar los problemas existentes en la producción agraria.

La geografía de los conflictos rurales no se limitó a la región litoral. En mayo de 1946 los arrendatarios de la puna jujeña marcharon hacia la Capital Federal para exigir los títulos de propiedad de las tierras que ocupaban, reclamando el derecho a la tierra. El «Malón de la Paz», como se lo llamó, recorrió los más de dos mil kilómetros que separan a Jujuy de Buenos Aires con la esperanza de que el nuevo presidente diera curso a sus reiteradas demandas. Cuando llegaron a Buenos Aires fueron saludados por Perón desde los balcones de la Casa Rosada y trasladados al viejo Hotel de Inmigrantes, donde permanecieron hasta que fueron devueltos hacia su provincia sin haber obtenido sus demandas.

Durante el peronismo se produjo una intensa movilización de las clases populares que no siempre vieron satisfechas sus expectativas. Esa movilización tuvo diferentes formas: manifestaciones y marchas crecieron en número, aunque a veces se las hiciera bajo el amparo gubernamental, y aumentaron las huelgas en todas sus formas: las que abarcaban a todo un gremio, a una fábrica o a una sección. Incluso las protestas se incrementaron, a pesar de la opinión de los dirigentes gremiales y políticos asociados con Perón.

Durante los años peronistas también cambió el rol de las organizaciones gremiales y sus vínculos con el Estado, y se transformaron los rituales de los trabajadores. Entre estos últimos, el más conocido fue la celebración del 1° de Mayo. Como se ha señalado, esta fecha fue instituida como rito obrero internacional en 1890. Su establecimiento fue el resultado de un acto político deliberado y la manifiesta intención de crear una clase -la clase obrera- a través de la pedagogía de la fiesta. En parte fue una creación desde arriba, de las corrientes más organizadas de los trabajadores en términos políticos. Con la celebración se instauró una tradición con símbolos, eslóganes y diversos recursos que se sumaron a la preocupación de hacer visible la multitud, como señal ostensible del consenso al que habían llegado los trabajadores.

Como se ha señalado, las corrientes ideológicas obreristas asignaban diferentes sentidos al rito obrero del 1ro de Mayo, y frente a las tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas, el peronismo produjo tanto una ruptura como un cambio de sentido de los rituales obreros. Dicha jornada se convirtió en un combate por el espacio simbólico y fue cambiando hasta adquirir un tono apoteótico en las celebraciones oficiales. El 1° de Mayo de 1946 fue el primero que presidió Perón. El acto principal fue convocado por la CGT, los sindicatos autónomos,

y contó con el apoyo del Partido Laborista, que se había convertido en el partido que había dado sustento a la movilización política que terminó con el triunfo electoral de febrero de 1946. La columna de manifestantes fue encabezada por Juan Domingo Perón, María Eva Duarte, el coronel Mercante y el secretario de Trabajo y Previsión. Por primera vez en cincuenta y cinco años de historia de la celebración del 1° de Mayo, las autoridades nacionales encabezaron la marcha junto a los trabajadores. Por primera vez también Perón asoció la fecha con el emergente movimiento peronista.

El 1° de Mayo de 1946 se inició un proceso de apropiación de los símbolos y significados asociados al Día de los Trabajadores y a las ideologías que en el pasado habían pugnado por orientarlos. En principio, fue asociado a la victoria obtenida por el pueblo el 17 de octubre de 1945, cuando los trabajadores se movilizaron para liberar a Perón de la cárcel en la que había sido confinado por sus compañeros de armas. La CGT enfatizó que se trataba de un «día de sana alegría y verdadero descanso del músculo». El 1° de Mayo fue considerado un día de fiesta porque, como resultado del triunfo del peronismo los trabajadores podían encarnar el sentimiento nacional. Además, la presencia de Perón implicaba una clara ruptura con el pasado en el que los gobiernos oligárquicos reprimían a los trabajadores y provocaban violentos enfrentamientos.

Este ayer enunciado con palabras se convirtió en imágenes en 1949, cuando se publicó el folleto 1° de Mayo ayer y hoy. El “ayer” estaba marcado por los “excesos, torpes y abusivos”. que alimentaba el «odio que se convertía en sangre humilde cada 1° de mayo». El «ayer» estaba marcado por «crespiones, cuando los capitalistas contribuían a la división de las masas popula-

res e inclusive ‘fabricaban’ víctimas, con sádico regocijo de los agitadores importados, y los trabajadores no encontraban respuesta a sus justas demandas en los gobiernos ni en los parlamentos». En contraposición, la Argentina del «hoy» era la de la «Patria redimida» y por eso «el 1° de Mayo no es ya la fecha propicia al dolor y la desgracia, sino a la alegría. La Fiesta del Trabajo, realizada jubilosamente por quienes trabajan en la edificación de la Patria». Ya en 1947, el 1° de Mayo fue tomado por la prensa peronista -La Época, El Líder; El Laborista- en su carácter de fiesta nacional. También comenzó a enfatizarse que dicha jornada tendría otro sentido, pues serviría como muestra de homenaje y gratitud hacia Perón quien había llevado felicidad al pueblo.

La prensa también exaltaba esa imagen de ruptura. Por ejemplo, en el diario **Democracia** del 2 de mayo de 1949 se expresaba que «La celebración del Día de los Trabajadores, que no hace muchos años se limitaba a rencorosas expresiones de rebeldía y a tumultuosas manifestaciones callejeras presididas por la bandera roja, es ahora un acontecimiento que congrega al país entero en un mismo impulso de júbilo y de gratitud».

No sólo el 1° de Mayo adquirió un nuevo significado con el peronismo; las huelgas generales desaparecieron como forma de confrontación con los patrones y el Estado y las manifestaciones de trabajadores respondieron al régimen eran rápidamente acalladas. Sin embargo, las clases populares estaban movilizadas y presionaban para modificar las condiciones de trabajo, obtener mejoras salariales, reconocimiento de sus organizaciones y legitimidad para intervenir en la resolución de los problemas laborales. Esa movilización fue siempre conflictiva para el gobierno y para las organizaciones sindicales, que

necesitaban la presencia activa de los trabajadores para alcanzar las metas de gobierno y mantenerse en el poder.

En el periodo 1946-1955, el movimiento obrero ganó una importante influencia en la vida económica y política del país, sobre todo porque fue respaldado por el Estado y el gobierno peronista. Pero este proceso dejó también sus consecuencias. Por un lado, facilitó la supervisión de las organizaciones obreras por parte de los poderes públicos y, por otro, los sindicatos fueron perdiendo su autonomía para presionar sobre el gobierno y se vio limitado su margen de maniobra. Ya desde los momentos tempranos de la presencia de Perón en el gobierno militar, y luego durante su primera presidencia constitucional, los gremios hacían propaganda y movilizaban a sus afiliados a favor de la causa peronista pero en los años cincuenta se integraron completamente a ese movimiento político. Todo esto se dio dentro de una intensa movilización de los trabajadores y una agitación social que no siempre se encuadró dentro de las ideas del gobierno sobre productividad y conciliación de clases. Incluso hubo dirigentes que mantuvieron la idea de que el sindicato debía ser una fuerza independiente y orgánica a favor del cambio, pero la mayoría de los líderes gremiales y de los trabajadores se vincularon más estrechamente con Perón. Los «leales», como se los denominaba, fueron ganando terreno. Esa lealtad se expresaba como adhesión formal y de apoyo al régimen, y activamente con el proselitismo desplegado en apoyo al Segundo Plan Quinquenal del gobierno, a las metas de productividad, a la reforma de la Constitución o a la reelección de Perón.

3. La radicalización de la protesta, 1955-1976

Los años transcurridos desde el primero al último derrocamiento del peronismo muestran aspectos de continuidad en el proceso de crecimiento y modernización de la economía, aunque se vio cruzado por una infinidad de conflictos sociales y de los propios vaivenes derivados de la inestabilidad política, que repercutían directamente en el rumbo de la economía. La protesta social de los trabajadores se generalizó y complejizó debido a los conflictos internos del peronismo, a la regionalización de éstos y a la incorporación de nuevos actores sociales, como los estudiantes universitarios. Pero también se ampliaron los repertorios de confrontación: a las huelgas y las movilizaciones callejeras ya tradicionales se agregaron formas de protesta menos utilizadas, como las ocupaciones fabriles, el trabajo a desgano, las marchas de hambre y métodos de acción directa como el sabotaje y el atentado, e incluso la toma de rehenes. El alto grado de violencia presente en la protesta se vinculaba centralmente a la ilegitimidad política y al sesgo represivo de la mayoría de los regímenes políticos existentes durante esos años.

La reconfiguración del mundo del trabajo se relaciona directamente con los cambios en la actividad productiva (agro e industria) y en el sector terciario. Al margen de las crisis cíclicas o de las diversas políticas que caracterizaron el período y de los resultados obtenidos,

puede decirse que, en materia económica, predominaron las ideas desarrollistas basadas en privilegiar el desarrollo industrial básico (acero, celulosa, maquinarias) con aportes del capital extranjero y el impulso a las economías regionales.

En ese contexto, a pesar de la modernización tecnológica de la actividad agropecuaria y de la diversificación de cultivos, el sector rural continuó su estancamiento y se acentuó la disminución argentina en el comercio mundial de productos agrícolas. Sólo hacia el final del periodo (1970-1976) se produjo una recuperación coyuntural, como consecuencia de la mayor demanda internacional y de los mejores precios, que permitieron el aumento de las exportaciones tradicionales y de los cultivos industriales, lo que redundó en mayores saldos de la balanza comercial.

La industria, en cambio, vivió una etapa de crecimiento relativo debido a varios factores: en primer lugar, al proceso de transformación y redimensionamiento de las empresas, que implicó tanto la racionalización de las formas de producción como la concentración en grandes plantas; en segundo término, al ensanchamiento del mercado interno, y, por último, al impulso de las exportaciones industriales alentado por el apoyo estatal y por el trato preferencial obtenido en el comercio regional. Como consecuencia se produjo un importante desarrollo de las industrias química, siderúrgica y automotriz enmarcado en un proceso de descentralización geográfica que condujo al crecimiento de regiones como Córdoba y Santa Fe (automotores), Patagonia (aluminio, gas, petróleo), San Nicolás y Villa Constitución (siderurgia). La contracara de este fenómeno fue la decadencia de otros sectores de la industria vinculados a la alimentación (especialmente azúcar y carnes), la industria textil y, en parte,

electrodomésticos, que por tamaño, malas condiciones técnicas, falta de equipamiento o vetustez quedaron fuera de competencia o sobrevivieron mal.

En el caso tucumano es interesante señalar que la debacle de la industria azucarera fue una consecuencia directa de las políticas eficientistas del gobierno de Onganía. Éste había puesto énfasis en la transformación de la provincia {operativo Tucumán} con el objeto de racionalizar la industria del azúcar; se trataba de apoyar sólo a los sectores más eficientes y diversificar la industria. El fracaso de esta política determinó el cierre de 11 de los 27 ingenios, lo que aumentó el desempleo de manera notable e impulsó una masiva emigración de la población afectada hacia las zonas urbanas de mayor desarrollo.

Estas transformaciones incidieron directamente sobre la composición de la fuerza de trabajo, que fue disminuyendo su proporción de extranjeros debido, en buena medida, al freno del flujo inmigratorio. En efecto, el porcentaje de extranjeros en la población total del país descendió al 13,5% en 1960 y al 9,5% en 1970. Por otro lado, también se produjo un cambio en el interior de la población extranjera, en tanto que la mayoría provenía de los países limítrofes {Paraguay, Chile, Bolivia}. La caída de la inmigración, mayoritariamente masculina, derivó en un incremento del 20 al 23% del componente femenino en la fuerza de trabajo entre 1947 y 1969. También aumentó la urbanización de la fuerza laboral, mientras se agudizaba el despoblamiento de las áreas rurales, cuyo ejemplo más dramático fue Tucumán, que expulsó al 20% de su población. De esta manera se acentuaban las desigualdades regionales. El desarrollo industrial y el aumento de la tecnificación agrícola contribuyeron de manera significativa a profundizar ese proceso. La población rural, que en 1947 representaba el 37,5% del total

de habitantes, descendió al 26% en 1960 y al 21 % diez años más tarde. Así, el establecimiento de nuevas industrias transformó en parte el mapa urbano, incidiendo en el notable crecimiento de ciudades como Rosario o Córdoba y sobredimensionando áreas como el Gran Buenos Aires, en donde se radicaban de manera masiva la corrientes migratorias procedentes de países limítrofes y del interior (Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes o el Chaco) . Un fenómeno similar, aunque de menor magnitud, se produjo en el Comahue y en Comodoro Rivadavia, por el auge del petróleo, y en el Alto Valle del Río Negro, por el «boom» frutícola.

Con respecto a la clase obrera asalariada se perciben ciertos cambios en relación con la etapa peronista. Si bien su volumen se mantuvo estable, su peso relativo en la estructura social retrocedió, pues se manifestó un estancamiento en el empleo industrial como consecuencia de la concentración, que produjo un mayor volumen de producción con menos obreros. Como contrapartida, aumentó el número de trabajadores en la construcción merced al impulso de las obras públicas. También hubo un incremento del empleo urbano, que redundó en un crecimiento de los sectores medios asalariados, menos en el sector servicios y en el comercio y más en el empleo administrativo industrial, que requería un mayor nivel educativo profesional y técnico. También aumentó significativamente el cuentapropismo (comerciantes, electricistas, plomeros, mecánicos, tintoreros, peluqueros, albañiles, pintores, etc.), que si bien se convirtió en buena medida en un bolsón de trabajo improductivo fue una vía de ascenso social para sectores de la clase obrera.

Aunque ya se había configurado en el periodo anterior, el mundo del trabajo se transformó y complejizó.

Entre los obreros industriales ahora adquirirían mayor importancia los trabajadores de las industrias siderúrgica, de máquinas y herramientas, de las automotrices, del petróleo y sus derivados. Ese peso les confería un lugar clave a la hora de la protesta y la negociación, y sus sindicatos alcanzaron un poder político inédito en tiempos pasados. En cambio, perdieron relevancia ciertos grupos de trabajadores vinculados a la industria textil o a la alimentación, cuyos mejores ejemplos lo constituyen la decadencia inexorable de la industrias frigorífica y azucarera. Los trabajadores de la construcción, siempre en situación más precaria, constituyeron un sector numéricamente importante debido a la notable cantidad de obras públicas encaradas en esos años: el túnel subfluvial que unía Santa Fe y Paraná, la obra hidroeléctrica Chocón-Cerros Colorados en Neuquén o los cientos de kilómetros de carreteras pavimentadas. En el sector servicios, las transformaciones también fueron significativas aunque las características del empleo tendían a acercarlo más a los sectores medios que a la clase obrera. Si bien es cierto que se consolidó un área obrera en empresas como Gas del Estado, Agua y Energía o en los servicios eléctricos, también lo es que, proporcionalmente, eran superiores en número los empleados administrativos y el sentido de pertenencia a la clase obrera era bien distinto en unos y otros. Por otra parte, los trabajadores portuarios no tenían la importancia de medio siglo atrás, los ferrocarriles profundizaban su decadencia y comenzaban a expulsar trabajadores; los tranvías desaparecían con rapidez y eran reemplazados por los colectivos, cuya capacidad de empleo no sólo era menor sino que se nutría parcialmente de los mismos propietarios de transporte. En sentido contrario, siguió incrementándose el número de empleados tanto en el área comercial como administrativa (sumados estatales y privados), engrosa-

do también por miles de maestros y profesores. Los numerosos sindicatos que agrupaban a empleados de comercio o a diversos tipos de trabajadores estatales se contaban entre los que reunían mayor cantidad de afiliados.

Las condiciones de trabajo empeoraron al anularse algunas conquistas obtenidas durante el gobierno peronista. Especialmente se modificó la situación interna en las empresas, en tanto se acentuó el control sobre los obreros, se otorgó cierta impunidad a la patronal para expulsar a los activistas gremiales y se intensificaron los ritmos de trabajo en busca de mejorar la productividad. A pesar de la escalada represiva, se mantuvieron conquistas fundamentales como la jornada de ocho horas, el aguinaldo y las vacaciones pagas, y, pasados los años inmediatos al golpe de 1955, muchos sectores amparados en la fuerte capacidad negociadora de sus sindicatos lograron mejoras sustanciales en las prestaciones de salud o en la infraestructura vinculada al esparcimiento y el ocio (hoteles y recreos en diversos centros de veraneo) que no habían conocido en épocas del peronismo. Por supuesto, las condiciones laborales y los problemas que preocupaban a los trabajadores continuaban siendo dispares y era enorme la distancia entre, por ejemplo, los obreros urbanos empleados en ramas en crecimiento (metalurgia, automotores, siderurgia) y los trabajadores de la industria azucarera en Tucumán o de los obreros empleados en la construcción de grandes obras. Mientras los primeros concentraban sus esfuerzos en discutir sobre las categorías laborales y los ritmos de producción, en mejorar su calidad de vida o la libertad de movimiento de sus representantes, los otros se movilizaban en torno a reivindicaciones básicas, como evitar el cierre de las fuentes de trabajo, lograr el recono-

cimiento de sus delegados gremiales, disminuir la larga jornada laboral u obtener alimentación y vivienda dignas.

Menos disparidad existía en torno al salario, pues ésta fue una preocupación común del conjunto de los trabajadores que marcaría en buena medida el ritmo de la protesta obrera. Hasta la presidencia de Arturo Illia, los salarios tuvieron un comportamiento inestable pero con clara tendencia a la baja, especialmente durante el gobierno de Aramburu ya partir de la gestión económica de Álvaro Alsogaray en 1959. Hacia fines de 1962, el porcentual del salario en el PB1 había caído de un 47% a un 38%. Luego del mejoramiento producido entre 1963 y 1966, volvió a descender notablemente durante el régimen del general Onganía. Este proceso desembocó en un fuerte deterioro de los asalariados, agravado por la espiral inflacionaria y el desempleo, que serían causales importantes de las protestas de fines de los años sesenta. Durante el gobierno peronista inaugurado en 1973, los salarios se recuperaron relativamente mientras duró el pacto social implementado por el ministro de Economía José Gelbard. Su plan se basó en el congelamiento de precios y la suspensión de las convenciones colectivas durante dos años después de otorgar, al comienzo de su gestión, un aumento generalizado del 20% en los salarios. Pero, en 1974, ciertos desajustes internos y la crisis internacional del petróleo desestructuraron la economía y marcaron el derrumbe de dicho plan. La inflación se desbocó rápidamente y, con ella, los precios y salarios cayeron en una espiral imparable que llevó a los trabajadores a presionar constantemente por aumentos salariales para equilibrar su constante deterioro.

La protesta vinculada al mundo del trabajo se complejizó notablemente en tanto recorrió caminos escasamente transitados anteriormente. En primer lugar, porque, en

buena medida, su destino estuvo ligado a los avatares del peronismo tanto por su intención de recuperar el poder como por las luchas internas que, una vez atenuada la Resistencia, lo desgarrarían hasta la debacle producida en 1976; en segundo término porque, como consecuencia de las políticas de desarrollo regional adoptadas en esos años, las grandes protestas y la conflictividad social se desplazaron hacia el interior del país y, por primera vez, Buenos Aires no fue el eje de las mismas; por último, porque los trabajadores establecieron alianzas con otros sectores sociales como los estudiantes universitarios y su acción adquirió en este periodo, de la mano de organizaciones de izquierda peronista y no peronista, grados de radicalización política e ideológica inéditos. Nunca antes, ni aun durante el liderazgo anarquista a comienzos del siglo XX, la protesta obrera se manifestó tan politizada y, si se quiere, radicalizada.

Cuando en 1955 los gobiernos surgidos del golpe militar de ese año decidieron marginar y prohibir la participación política del partido peronista cerrando los canales de expresión legal, la protesta se vehiculizó en buena medida y de manera forzada hacia prácticas extraparlamentarias y de acción directa. Todo este periodo, al menos hasta 1973, se caracterizó por la frustración política de vastos sectores de la población y particularmente de la clase obrera. Además, este proceso se desarrolló en un contexto internacional que ayudó a magnificar y radicalizar esa frustración. En efecto, si la prohibición del peronismo contribuyó a agudizar el malestar popular, otros factores externos le dieron un sustento ideológico: la Revolución Cubana en 1959, los diversos movimientos de liberación nacional, la protesta de la juventud norteamericana contra la guerra de Vietnam, la derrota de los Estados Unidos en dicha guerra, la irrupción generalizada de sectores juveniles, la liberación femenina,

la revolución sexual», el movimiento del Mayo Francés en 1968. Todos éstos fueron elementos que motivaron la percepción generalizada de un clima de cambios e incidieron directamente en la radicalización de vastos sectores de la juventud de clase media, que incentivaron la acción colectiva, la movilización, las prácticas violentas y el descreimiento de lo que entonces se denominaba despectivamente «democracia burguesa».

Una democracia burguesa que fue denostada, si no por todos, por amplios sectores de la sociedad. Al principio por el derrocamiento de Perón y la marginación electoral del peronismo, que convertía a la democracia implementada por la «revolución libertadora» en un simulacro débil. Luego, la desilusión provocada por el gobierno de Frondizi, tanto a peronistas como a sectores medios progresistas, profundizó el descreimiento en el sistema, que alcanzó su punto culminante a partir del golpe del general Onganía y del fuerte autoritarismo implementado desde 1966. A partir de ese momento confluyeron el malestar económico y el político, así como el impacto de los movimientos internacionales, y, cada vez más, los sectores radicalizados tuvieron la ilusión de que el cambio revolucionario de la sociedad era posible y que la clase obrera sería uno de sus protagonistas.

A fines de 1955, la prohibición de la participación política del peronismo alcanzó también a sus organizaciones gremiales. En noviembre de ese año, después de la convocatoria aun paro general, se intervino la CGT y también a buena parte de los sindicatos más importantes. De esta manera quedaron fuera de circulación una gran cantidad de viejos dirigentes sindicales peronistas, acusados por los sectores más duros de inoperancia frente al avasallamiento de sus instituciones. Pero el gobierno no sólo apuntó a la dirigencia gremial, sino que tam-

bién avanzó sobre un punto muy sensible de la organización sindical representado por las comisiones internas de fábrica, verdadera fuente de poder de los trabajadores y uno de los nudos de la represión a la clase obrera peronista. Mediante el decreto 2.739 se autorizaba a los sectores patronales a eliminar «los obstáculos a la productividad», lo que implicaba suprimir el margen de control que tenían las comisiones internas sobre los procesos de producción. Esta acción era fundamental para facilitar la implementación de métodos de racionalización y eficiencia que la industria venía reclamando desde hacía tiempo; el mismo Perón había reconocido este problema al efectuarse el Congreso de la Productividad en 1954. Para complementar esta medida se reglamentó el derecho de huelga, se derogó la Ley de Asociaciones Profesionales y, consecuentemente, se avanzó sobre las conquistas obreras y se congelaron los salarios.

No obstante, esta represión violenta y generalizada sobre el movimiento obrero y los sectores populares no obtuvo los resultados esperados en cuanto a desperonizarlos y, en realidad, no hizo más que reforzar y radicalizar la identidad peronista de buena parte de los trabajadores, cuyos objetivos combinaban reivindicaciones de tipo económico (recuperación salarial y de antiguas condiciones de trabajo) , solidarias (libertad a los compañeros detenidos y perseguidos, recuperación de las prácticas gremiales, devolución de las instituciones sindicales) y políticas (el retorno de Perón y la legalización de su partido).

Cerrados los canales de expresión y participación normal y en reclamo de la restitución de sus instituciones, los trabajadores iniciaron un inédito proceso de protesta espontánea que se conocería como la Resistencia. Sin embargo, es importante destacar que este proceso excedió el marco del mundo del trabajo y que abar-

có amplios sectores de la sociedad que recurrieron frecuentemente al terrorismo y al sabotaje, atentando contra depósitos de grano, de combustibles, plantas de electricidad o el transporte público. En el mundo laboral, esta nueva y peculiar forma de lucha se centraba en la resistencia al régimen en los mismos lugares de trabajo y se basaba en la formación de comités clandestinos. Sus tácticas eran diversas, abarcaban desde el sabotaje (colocación de bombas, rotura de elementos vitales de la industria o el transporte) o las huelgas salvajes hasta el trabajo a desgano. En marzo de 1956, la protesta se hizo más formal al crearse el Comando Sindical Peronista, cuyo objetivo era organizar a las bases para participar en las elecciones de delegados gremiales con el fin de formar las nuevas comisiones internas de fábricas. Cuando se realizaron los comicios, a fines de ese año, en la mayoría de los casos triunfaron jóvenes dirigentes peronistas fogueados en la Resistencia, que reemplazaron a los viejos sindicalistas de la época de Perón. Estos nuevos dirigentes orientarían las luchas llevadas adelante en 1957 y 1958.

A la dificultosa reconstitución de los sindicatos, se agregaron los esfuerzos para articularlos en algún tipo de entidad federativa. A comienzos de 1957, impulsado por los comunistas, un grupo de gremios peronistas y no peronistas se nucleó en la Comisión Coordinadora Intersindical con el objeto de unificar diversas tendencias sindicales, aunque pronto los peronistas desplazaron a los comunistas de la dirección. En julio de ese año realizaron una huelga general apoyada por más de dos millones de trabajadores, y luego de su activa participación en varios conflictos, se disolvió en septiembre de 1957 ante la convocatoria aun congreso normalizador de la CGT.

Allí, ante la falta de acuerdo entre los gremios

peronistas y no peronistas, se constituyeron dos nucleamientos relativamente importantes. Por un lado, los sindicatos no peronistas -entre los que se destacaban los empleados de comercio, los bancarios, el personal civil de la nación o los municipales- conformaron los 32 Gremios Democráticos, que más tarde se convertiría en Movimiento de Obreros Unificados (MOU), mientras que los representantes de los sindicatos peronistas (metalúrgicos, textiles, del vestido, petroleros) se autodenominaron 62 Organizaciones.

La llegada al poder del doctor Arturo Frondizi en 1958 modificaría la relación entre el gobierno y el movimiento obrero organizado, que se legalizó y recuperó parte del poder perdido, y llevó adelante una importante cantidad de huelgas de tipo reivindicativo, especialmente en demanda de aumentos salariales. El nuevo gobierno reimplantó la vigencia de la Ley de Asociaciones Profesionales y el derecho de huelga. Además, anuló el decreto 9.270, que garantizaba la representación de las minorías en las direcciones sindicales, privilegiando la centralización de los sindicatos tal como funcionaban durante el régimen peronista. Esta política, que contó con el apoyo de Perón, favoreció a las dirigencias gremiales clásicas y neutralizó y debilitó la Resistencia y la postura de los sectores más duros y de la izquierda, quienes por diferentes motivos buscaban democratizar el funcionamiento de los sindicatos. No obstante, a pesar del desplazamiento del sector resistente del peronismo, éstos persistieron en alternativas intransigentes y terminaron volcando su apoyo a acciones de carácter violento, como los primeros focos de la guerrilla rural en el norte del país. La tregua entre el gobierno de Frondizi y el movimiento obrero duró sólo ocho meses, y el conflicto social volvió a agudizarse. En enero de 1959, el Presidente firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que

lo obligaba a modificar la política de precios y salarios, así como a racionalizar el gasto público y que, entre otras condiciones, preveía la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre. En respuesta al plan de estabilización, que afectaba centralmente salarios y puestos de trabajo, se instrumentó una fuerte protesta que provocó innumerables huelgas en las que participaron un millón y medio de trabajadores. Entre ellas se destacaron dos conflictos; uno de ellos fue el que mantuvieron los trabajadores petroleros en contra de los contratos firmados por el Presidente con empresas extranjeras. Es interesante destacar que esta huelga fue orientada por comunistas y radicales, mientras que los dirigentes peronistas no la apoyaron en función de los acuerdos de su partido con Frondizi. Cuando esta alianza se rompió, los líderes peronistas se incorporaron a la protesta. El otro conflicto destacado fue la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, en donde los obreros ocuparon la planta, ubicada en el barrio porteño de Mataderos, para evitar su privatización. Luego de varios días de resistencia fueron desalojados violentamente por el ejército que, de esa manera, se involucraba en la represión de la protesta social con la autorización del poder político. El saldo fue duro para los obreros: decenas de heridos, centenares de detenidos y cinco mil obreros cesanteados. Al día siguiente, casi espontáneamente y rebasando a sus dirigentes, miles de trabajadores fueron a la huelga general en solidaridad con los obreros cesanteados. La represión desbarató rápidamente la protesta y, si bien algunos sectores del movimiento obrero pretendían continuar el conflicto, las 62 Organizaciones, argumentando la perspectiva de un nuevo golpe militar, levantaron el paro general, y el conflicto finalizó con la derrota de los trabajadores.

Pero el resultado más preocupante que arrojó la ola

de protesta fue la aplicación, desde marzo de 1960, del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) por parte del gobierno, ciertamente por la presión del ejército pero también por propia voluntad. Esta política implicó una dura represión (estado de sitio, encarcelamiento, persecución de activistas) tanto contra la dirigencia peronista como de izquierda. Sin duda, la represión, en el marco de una coyuntura fuertemente recesiva, debilitó el poder negociador de los dirigentes sindicales y afectó notablemente la capacidad de movilización y de protesta del movimiento obrero, que entró en un ciclo defensivo y de desmovilización.

En estas circunstancias, el MOU desapareció, mientras las 62 Organizaciones manifestaban dos posturas bien diferenciadas: una, mayoritaria, era pragmática y negociadora; la otra, minoritaria, era partidaria de confrontar con el gobierno de Frondizi. Al predominar la primera se reforzó la centralización y la burocratización de la dirigencia sindical peronista; desapareció, en buena medida, la democracia interna y la dirigencia se alejó de sus bases, sobre las que estableció un férreo control. Esta sería la característica central de gran parte del gremialismo peronista durante las últimas décadas del siglo XX e imprimiría su sello a un segmento de la protesta de este periodo. Fue en ese momento cuando el sindicalismo se convirtió en un fuerte factor de poder hacia el interior del movimiento justicialista, eclipsando al ala política y desafiando incluso el liderazgo del propio Perón. Ya en 1962 ese sector había impuesto sus candidatos en las elecciones para renovar legisladores y gobernadores. La figura que encarnó mejor esta línea gremial fue el dirigente metalúrgico Augusto T. Vandor, y aquello que se ha denominado «vandorismo» representaba palmariamente al poder sindical, que, como tal, dialogaba

corporativamente de manera directa con otros factores de poder como el gobierno, la cúpula eclesiástica, el empresariado o los militares. Por un tiempo, este sector ejerció un fuerte control sobre sus organizaciones; no obstante, grupos radicalizados, por entonces minoritarios, provenientes muchos de la Resistencia y otros de la izquierda, ejercieron una constante y pertinaz denuncia contra el vandorismo por considerar que sus dirigentes se habían corrompido moral y políticamente, habían traicionado el espíritu combativo del peronismo y burocratizado las instituciones del movimiento obrero, alejándose de sus bases.

Ahora bien, el poder del sindicalismo vandorista se basaba en dos cuestiones centrales. Por un lado, cuando el gobierno de Frondizi le concedió la personería aun solo sindicato por rama, les otorgó el control sobre todas las actividades; por otro, este sector poseía el manejo de las finanzas de los servicios sociales ofertados por los diversos sindicatos. El control de los fondos multimillonarios reforzaba de manera notable el poder de la dirigencia, puesto que la oferta de una amplia gama de servicios sociales les permitía llevar adelante una política clientelística de vastos alcances y neutralizar a las generalmente débiles oposiciones internas. Débiles porque su actividad era permanentemente hostilizada con la fuerza por la burocracia y porque, gracias al sistema electoral vigente, las listas ganadoras se quedaban con todos los cargos impidiendo la representación de las minorías. Un sistema perverso que frenaba cualquier atisbo de oposición, pero que ataba a la burocracia a la negociación permanente con los gobiernos, pues si éstos modificaban la política de las personerías o decidían intervenir los fondos le causaban un daño sustancial a la dirigencia sindical.

Cuando se reconstruyó la CGT en 1963, las 62 Organizaciones, hegemонizadas por el vandorismo, dominaron claramente la escena frente a la débil oposición de unos escasos y pequeños gremios comunistas. El resto de los sindicatos no peronistas, antes nucleados en los 32 Gremios, aunque manifestaba una postura independiente, de hecho dialogaba y acordaba frecuentemente con las 62 Organizaciones. Ésta cedió a aquéllos la mitad de los puestos en el nuevo Comité Central de la CGT, pero se guardaron para sí los puestos clave e impusieron al secretario general.

Reconstruida y fortalecida, la CGT asumió una activa oposición a la política económica del gobierno provisional del doctor José María Guido. En mayo de 1963 lanzó un plan de lucha consistente en la realización de marchas, ocupaciones fabriles, cabildos abiertos, así como también actos eminentemente políticos, como la celebración del 17 de octubre como Día de la Lealtad o el recordatorio de la muerte de Eva Perón. La segunda fase del plan de lucha se llevó adelante hacia mediados del año siguiente, en el marco de una coyuntura económica más favorable, durante el gobierno del doctor Arturo Illia. El apoyo de la clase obrera al plan fue indudable, pues se produjeron más de diez mil ocupaciones fabriles y se movilizaron alrededor de cuatro millones de trabajadores. Ante la presión, el gobierno realizó numerosas concesiones, como la sanción de la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil. No obstante los buenos resultados obtenidos, el sindicalismo peronista alentado por Vandor resolvió redoblar la oposición al gobierno radical, que tenía una debilidad de origen al haber sido superado en las elecciones presidenciales por el voto en blanco, hecho que cuestionaba sin duda su legitimidad y minaba su poder; en marzo de 1966, frente al fuerte acoso gremial, el gobierno de Illia promulgó un decreto mediante el cual reformaba la Ley de Asociaciones Profesionales, en un

claro intento por limitar el poder sindical, en tanto pretendía democratizar el sistema y recortar el control de los fondos. Desde ese momento, la dirigencia sindical peronista profundizó su hostilidad al gobierno atacándolo sistemáticamente, y cuando se produjo el golpe de Estado del general Onganía, le manifestó su apoyo de manera poco disimulada.

Pero el nuevo régimen militar se sentía suficientemente fuerte para imponer sus proyectos y no estaba dispuesto a negociar con el poder sindical, pues intentaba evitar este tipo de presiones. No sólo prohibió la actividad política, también estableció un rígido control de precios y suspendió las negociaciones colectivas, lo que afectó indudablemente la capacidad negociadora de los sindicatos. La CGT, obligada por la situación, en marzo de 1967 convocó aun paro general para repudiar la política económica del ministro Krieger Vasena. En respuesta, el gobierno endureció aún más su postura, interviniendo y suspendiendo la personería de varios gremios importantes. Ante estas circunstancias, un grupo de sindicatos decidió sin tapujos colaborar abiertamente con el régimen. Este sector recibió el nombre de «participacionismo» -más adelante, Nueva Corriente de Opinión-, y sus exponentes más importantes eran Juan José Taccone (Luz y Fuerza) y Rogelio Coria (Unión Obrera de la Construcción). El vandorismo, que había cifrado expectativas en la dictadura militar, manifestó su punto débil, pues quedó atrapado entre dos incómodas opciones: por un lado, existía la posibilidad de endurecerse, pero a riesgo de que el gobierno le cortara el manejo de los fondos; por otro, se enfrentaba al posible alejamiento y la radicalización de las bases por su inacción frente a una política económica que afectaba notablemente a los trabajadores. Optó finalmente por una táctica intermedia y ambigua.

Al realizarse el congreso normalizador de la CGT en 1968, el vandomismo y las 62 Organizaciones se encontraron con un amplio segmento de gremios en franco estado de descontento con la vieja dirección por su incapacidad para enfrentar la política de Onganía. Esa insatisfacción generalizada se manifestó en la derrota del candidato vandomista. En efecto, el dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense, Raimundo Ongaro, fue elegido secretario general de la CGT. El vandomismo, en minoría pero controlando los sindicatos más importantes, se retiró del congreso y abandonó la CGT. En adelante coexistirían dos confederaciones: la CGT de los Argentinos (CGTA), dirigida por Ongaro, y la CGT Azopardo, encabezada por los vandomistas.

La CGTA estaba conformada por una gama de gremios disímiles políticamente, muchos de los cuales, al poco tiempo, la abandonaron para sumarse a la CGT de la calle Azopardo o para mantenerse al margen de la disputa. Ongaro le impuso a la CGTA una impronta de protesta orientada en dos direcciones. En primer lugar, ejerció una dura crítica y oposición al verticalismo y la burocratización implementados por el vandomismo o el participacionismo; por otra parte, desarrolló una oposición mucho más frontal a la dictadura, radicalizando la protesta obrera. Además, promovió nuevas formas de movilización y de protesta que, en su aspecto más novedoso, incluían la alianza de los trabajadores con sectores no tradicionales, como el movimiento estudiantil o los curas radicalizados tercermundistas.

Los estudiantes universitarios ya venían manifestando un profundo malestar desde que el régimen de Onganía había intervenido la universidad en 1966, durante la Noche de los Bastones Largos, coartando la libre expresión de las ideas e imponiendo una política autori-

taria en los claustros. Dos meses después del golpe, varias agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Córdoba decretaron un paro con movilización en el que se produjeron disturbios que incluyeron la toma del barrio Clínicas por parte de los estudiantes, apoyados por los vecinos. El 7 de septiembre de 1966, Santiago Pampillón, estudiante de ingeniería y subdelegado de la planta automotriz IKA, fue asesinado por la policía y la CGT Córdoba decretó un paro de repudio de una hora por turno. De esta manera comenzaba a sellarse, al menos en Córdoba, la unidad de las protestas obrera y estudiantil en tanto ambos sectores se hallaban notoriamente perjudicados por el gobierno militar.

También se había radicalizado e incorporado a la protesta popular un sector de la iglesia católica latinoamericana influido por el obispo brasileño Helder Cámara que, en 1967, confluyó en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). Un año más tarde, cerca de trescientos sacerdotes se reunieron en Córdoba y conformaron formalmente el movimiento en la Argentina. Al comienzo, principalmente en Córdoba y Tucumán, y luego en casi todo el país llevaron adelante una intensa actividad en barrios obreros y marginales, que incluía su participación en marchas de hambre y huelgas, solidarizándose de esa manera con la protesta de los trabajadores en conflicto.

No debe olvidarse que, acompañando (o como consecuencia de) este proceso, se acentuó la radicalización política y se produjeron profundas transformaciones tanto en el peronismo como en la izquierda. La fuerte y constante represión de los gobiernos militares a las manifestaciones opositoras y la proscripción política consolidaron la idea de que la violencia, ya fuera de masas o foquista, era el único método valedero. Por un lado, se

conformaron aquellos grupos políticos que adherían al uso de la violencia de masas, como por ejemplo el Partido Comunista Revolucionario (PCR), partidario de la inserción popular, surgido de una escisión del Partido Comunista (PC), o el partido maoísta Vanguardia Comunista (VC), desprendimiento del Socialismo de Vanguardia e impulsor de la Guerra Popular Prolongada. Por otro lado, los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), proveniente de la izquierda, Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), cuyo origen eran algunos núcleos supervivientes de la Resistencia y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) creado en 1969 como consecuencia de la formación, un año antes, del Partido Revolucionario de los Trabajadores «El Combatiente», bajo la dirección de Mario Roberto Santucho. Poco después se agregarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, que serían las organizaciones guerrilleras más importantes a la luz de la notable peronización de los sectores juveniles de izquierda. En 1969, el malestar obrero profundizó la protesta de tal manera que se convertiría en rebelión popular. Ya el año anterior, la provincia de Tucumán se había transformado en uno de los centros de la protesta nacional a partir de las importantes movilizaciones de los trabajadores azucareros. La inquietud de los trabajadores era una consecuencia directa de la racionalización encarada por el gobierno de Onganía, que desembocó en el cierre de once ingenios y el despido y la desocupación de miles de obreros. Ante el declive de la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), dividida entre vandonistas y ortodoxos, y la propia fragmentación de la acción obrera, dirigentes de base apoyados por los sacerdotes del MSTM se pusieron a la cabeza de la protesta obrera que adquirió amplia difusión y visibilidad. Contribuyó a ello el apo-

yo activo de un importante grupo de artistas plásticos de vanguardia a través de la muestra *Tucumán arde*. En el mes de marzo de 1969, los trabajadores azucareros realizaron una larga marcha desde el ingenio Bella Vista hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán. ‘

Por su parte, en el norte de Santa Fe (Villa Guillermina, Villa Ocampo), sin alcanzar la envergadura de la protesta tucumana pero contribuyendo a profundizarla, también se realizaron varias marchas de hambre para exigir la preservación de las fuentes de trabajo, en especial en los talleres ferroviarios, que habían comenzado a cerrarse a partir de la racionalización ferroviaria encara da por el gobierno de Frondizi.

Pero donde la protesta alcanzó su mayor dimensión fue en la ciudad de Córdoba. La agudización del clima de descontento en la década de 1960 se debía, al margen del repudio al autoritarismo del gobierno militar, a una conjunción de factores locales. En principio, a la larga lista de reclamos del movimiento obrero se agregó el incumplimiento por parte del gobierno nacional de la puesta en marcha de las convenciones colectivas de trabajo; la supresión del «sábado inglés», por el cual los obreros trabajaban cuatro horas los sábados y cobraban ocho, y la confirmación de la vigencia de las «quitas zonales», que permitía a los trabajadores de Buenos Aires cobrar más que sus pares cordobeses. Sin duda, la sumatoria de todos estos elementos generalizaron el clima de malestar en el mundo del trabajo cordobés.

El otro factor que incidió en la explosión de la protesta se vinculó a la peculiaridad del sindicalismo en esa provincia. Por un lado, porque los trabajadores de algunas importantes plantas de las industrias automotriz (Fiat) y petroquímica estaban organizados como sindicatos de fábrica, y esa independencia de las direcciones sindica-

les nacionales, contra lo que esperaban el gobierno y las empresas, radicalizaron notablemente a los trabajadores. Por otro lado, las regionales locales mantenían cierta independencia política con respecto a las centrales nacionales, situación que les permitía tomar decisiones y maniobrar sin preocuparse por la postura de las cúpulas. Los casos más importantes en este sentido, aunque con diverso grado de autonomía y líneas políticas diferentes, los constituían el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dirigido por El pidio Torres, que agrupaba a los trabajadores de algunas importantes plantas automotrices (IKA, Grandes Motores Perkins), y el gremio de Luz y Fuerza, orientado por Agustín Tosco. Éstos y otros sindicatos más pequeños equilibraban en la CGT local las posturas que respondían a la conducción nacional (vandalismo, 62 Organizaciones). Ante el clima de malestar generalizado, la CGT local lanzó la *Declaración Córdoba* llamando a conformar un amplio frente civil en oposición al régimen. Y en realidad, las condiciones para conformar ese frente estaban dadas. El movimiento estudiantil se hallaba ampliamente movilizado, no sólo en Córdoba sino en otras provincias. En Corrientes, mientras los universitarios reclamaban por el cierre del comedor estudiantil, fue asesinado por la policía el estudiante Juan José Cabral. Inmediatamente se organizó una manifestación de repudio en la ciudad de Rosario, en la que cayeron asesinados por la represión otros dos estudiantes. La CGT rosarina respondió con un paro general el 23 de mayo y la jornada derivó en una amplia manifestación de repudio que ha sido conocida como el «Primer Rosariazo». La movilización estudiantil en oposición a la represión y en solidaridad con los estudiantes correntinos y rosarinos se ex-

tendió a Córdoba, donde, el 26 de mayo, abandonaron las aulas y ocuparon el barrio Clínicas, donde levantaron barricadas y enfrentaron a la policía, que realizó un gran número de detenciones, incluyendo la de Raimundo Ongaro. Frente a la presión de la protesta, la CGT cordobesa decretó un paro de cuarenta y ocho horas a partir del 29 de mayo, mientras que las dos centrales nacionales (la de Azopardo, y la de los Argentinos) llamaron a un paro nacional de veinticuatro horas para el 30 de mayo.

El 29 por la mañana, los trabajadores de las grandes plantas fabriles (Fiat, IKA-Renault, ILASA, Perkins, Thompson Ramco, Transax y otras) y del sector público abandonaron el trabajo y marcharon en manifestación desde el barrio obrero de Santa Isabel. La columna obrera creció de manera incesante con la incorporación de vecinos y estudiantes. Cuando la policía reprimió violentamente y mató a un delegado de IKA, la protesta se convirtió en la gran revuelta popular espontánea denominada Cordobazo. La rebelión, en la que participaron vastos sectores de la sociedad cordobesa, rebasó tanto a la autoridad policial como a la dirigencia sindical en su conjunto y, en algún momento del día, pareció controlar la ciudad. Por la noche, la mayoría de los trabajadores retornaron a sus domicilios mientras los estudiantes mantenían la resistencia ocupando varios barrios y algunos sectores de la izquierda creían vislumbrar una insurrección popular. Al día siguiente, a pesar de que se mantenían algunos focos aislados, la protesta había finalizado y los resultados eran elocuentes por su importancia: más de diez muertos según la versión oficial, cerca de cien heridos, varios centenares de detenidos, entre los que se contaban importantes dirigentes como Agustín Tosco, y cuantiosos daños a la propiedad de las empresas,

sobre todo extranjeras. Pero más importante que esos datos fue el impacto político causado por el Cordobazo, que se convirtió en un verdadero punto de inflexión en la escena política argentina. En principio, motorizó un ciclo de protestas en las que, como venía sucediendo, el movimiento obrero, aunque continuaba siendo el protagonista principal, no estuvo solo sino que fue acompañado por estudiantes, sacerdotes, intelectuales y artistas. En esta protesta, además de la clásica oposición a la dictadura ya los sectores patronales, se destacaron como rasgos novedosos tanto el rechazo a la burocracia sindical como el importante pero disímil grado de radicalización ideológica. Por otro lado, la protesta cordobesa produjo una hecatombe política, en tanto radicalizó a amplios sectores de la juventud que aparecían dispuestos a borrar el pasado y construir una sociedad nueva y que engrosaron las filas de las organizaciones de izquierda insurreccionales o guerrilleras. El impacto político se relacionaba también con la capacidad de un movimiento popular de estas características para contribuir a provocar la crisis y el derrumbe de un gobierno; no sólo cayó el gobernador cordobés Caballero sino, un año más tarde, el general Onganía y también su sucesor, el general Levingston, incapaces todos de resolver las causas de la convulsión social desde un régimen autoritario. La fuerza de este movimiento residió en que canalizó la acumulación de diversos factores de agravio e injusticia de amplios sectores de la sociedad durante quince años, entre los que la proscripción política del peronismo no fue un tema menor. La brecha entre la sociedad civil y el sistema de poder se amplió de tal manera que hicieron eclosión en un momento de debilidad del régimen autoritario y de radicalización de un importante segmento de la población.

No obstante, hay que resaltar que uno de los límites de este movimiento en el plano del mundo del trabajo fue su escasa ascendencia sobre el movimiento obrero de Buenos Aires, en donde el sindicalismo clásico mantuvo su influencia, o al menos la capacidad de enfriar los conflictos, a pesar de la política combativa de una CGTA cuyos límites estaban demarcados por la escasa envergadura de los gremios adheridos.

El peso del Cordobazo en la clase trabajadora y en el ciclo de protestas posterior se centró en Córdoba y en ciertos bolsones del interior como Tucumán, Rosario, Neuquén o las provincias del litoral. En Córdoba, después del estallido de mayo de 1969, se gestó un sindicalismo combativo que estaba constituido por una importante y variada gama de sindicatos que iban desde aquellos liderados por peronistas combativos (Unión Tranviarios Automotores) hasta gremios como Luz y Fuerza, orientados por independientes de izquierda como Agustín Tosco. Pero, a la vez, a la izquierda de aquellos se articuló una corriente sindical clasista con características peculiares y diferenciadoras de las tradicionales formas de hacer gremialismo. Este movimiento estaba liderado por los sindicatos de la empresa Fiat: Sindicato de Trabajadores Concord (SITRAC) y Sindicato de Trabajadores Materfer (SITRAM), cuyas direcciones se habían renovado a comienzos de 1970. La nueva conducción, elegida directamente por las bases, cambió radicalmente las tácticas de acción gremial y materializó una ofensiva constante contra la empresa para obtener mejores condiciones de trabajo y mayores salarios.

En principio, el clasismo se manifestaba profundamente antiburocrático y basaba su política sindical en la democracia interna y en la participación masiva y directa de los trabajadores. Indudablemente, la no pertenencia a

federaciones de carácter provincial o nacional facilitaba esa prédica, aunque en un mediano plazo también lo haría más vulnerable a la ofensiva empresarial ya la acción represiva. En segundo lugar, esta corriente adhería ideológicamente al clasismo obrero, una definición que postulaba la unidad de la clase obrera y la defensa de sus intereses, radicalmente opuestos al de los empresarios, así como la lucha contra el capitalismo y la imposición de una sociedad socialista. En este sentido, el sindicato pretendía ser un verdadero concientizador de los obreros. Por último, reformularon la acción gremial. Además de las huelgas y las ocupaciones fabriles, recurrieron a repertorios de confrontación menos formales, como la acción directa (toma de rehenes, sabotajes) o la alianza con organizaciones vecinales, parroquiales y políticas; así como a diversas formas de difusión de sus reclamos que acercaban métodos formales, como la apelación a los medios de comunicación, o informales, como la asistencia a asambleas universitarias o las huelgas de hambre, cuyo contenido simbólico era indudable. Precisamente, al realizarse en un barrio obrero de Córdoba una huelga de hambre para exigir la reincorporación de obreros despedidos en la navidad de 1970, recibieron la adhesión de los grupos armados FAL, ERP y Montoneros, en una muestra elocuente del grado de radicalización que había asumido un vértice de la protesta social en la Argentina. Este hecho también evidenció el interés de los grupos armados por extender su influencia al mundo del trabajo. En enero de 1971, el conflicto se intensificó: primero fueron ocupadas las plantas de Fiat con toma de rehenes debido al despido de varios delegados; luego se le reclamó a la empresa el equiparamiento de los convenios salariales con los del SMATA. A pesar del laudo favorable del Ministerio de Trabajo, la empresa descono-

ció el reclamo, por lo que la CGT cordobesa decretó un paro general el día 12 de marzo. Ante esa decisión, el gobernador Uriburu declaró, refiriéndose a la vanguardia obrera, que cortarían la cabeza de la «víbora venenosa». Frente al paro se establecieron fuertes diferencias tácticas entre los sindicatos combativos (incluido Luz y Fuerza) y el SITRAC-SITRAM. Mientras los primeros decidieron la toma de plantas y luego efectuar una concentración, los segundos tomaron las calles de la ciudad; en los incidentes producidos por la represión policial murió un trabajador. El 14 de marzo, durante su entierro, se produjo una gran protesta, que, a diferencia del Cordobazo, estuvo integrada centralmente por trabajadores, y que derivó en graves enfrentamientos con la policía y la destrucción de numerosos bienes de empresas privadas y estatales. La falta de acuerdo entre el SITRAC-SITRAM y el resto del movimiento obrero cordobés facilitó la rápida y efectiva represión, que dio por finalizado el Víborazo, como se denominó irónicamente a la protesta. No obstante sus límites, el conflicto acabó con el gobernador Uriburu, y pocos días después, renunció el presidente Levingston. Entre los bolsones de protesta en el interior no cordobés había que recalcar, en primer lugar, la reactivación, casi simultánea al Cordobazo, de la protesta en Tucumán. Fueron sus promotores los trabajadores despedidos de los ingenios azucareros y el movimiento estudiantil. En mayo de 1969, los despedidos del ingenio Bella Vista realizaron una marcha que, si bien reclamaba la reapertura de los ingenios, era a la vez una clara manifestación contra la dictadura. La movilización terminó ocupando el centro de San Miguel de Tucumán, con el activo apoyo de los curas tercermundistas y, fundamentalmente, de los estudiantes, quienes, ante la clara situación de decadencia y fragmentación de la FOTIA, tomaron la dirección del movimiento.

Por su parte, en Rosario, los despidos de varios trabajadores en algunos talleres ferroviarios motivaron la reacción de los obreros, que, ante la inflexibilidad de un gobierno decidido a aplicar la justicia militar, extendieron el conflicto a diversas regionales de la provincia y del país. La CGT local declaró un paro activo de treinta y ocho horas en solidaridad con los obreros ferroviarios a partir del 16 de septiembre de 1969. Ese día, miles de trabajadores marcharon por el centro y los barrios obreros de la ciudad y fueron duramente reprimidos por la policía y la gendarmería nacional. La movilización, conocida como el *Segundo Rosariazo*, alcanzó un alto grado de violencia, y fueron destruidas por los manifestantes decenas de propiedades vinculadas a empresas e instituciones represivas.

Otro conflicto importante fue protagonizado por los trabajadores de la construcción de la monumental obra El Chocón-Cerros Colorados, en la provincia de Neuquén. Entre marzo de 1969 y mediados de 1970, centenares de trabajadores se organizaron desde la base y al margen de la UOCRA y realizaron numerosas huelgas por el reconocimiento de sus delegados, aumentos de salarios, mejoras en las condiciones de vivienda y de trabajo -especialmente de seguridad, ya que varios obreros habían fallecido debido a la alta peligrosidad de los trabajos-. El apoyo del obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, cercano a los sacerdotes del MSTM, ayudó a otorgarle visibilidad a la protesta.

Por último, conviene mencionar la formación y las luchas, en 1971 y 1972, de las Ligas Agrarias en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco. Si bien éste no fue un conflicto obrero sino de pequeños y medianos productores rurales, se enmarcó claramente

en el clima de radicalización de la protesta social en este periodo y contó con el apoyo de sectores del catolicismo tercermundista y de la juventud peronista. Las Ligas crecieron por diversos motivos: en primer lugar, porque dieron cabida a una protesta que la Federación Agraria no estaba conteniendo debido a sus alianzas con el gobierno y los grupos monopólicos; por otro lado, porque incluyeron en su seno distintos sectores con una amplia diversidad de problemas, como los productores de algodón de Chaco y Formosa, afectados por la caída de los precios y la reducción de subsidios, los productores de té y yerba mate de Misiones y los de tabaco de Corrientes, los primeros perjudicados por la desregulación del mercado y los segundos por la concentración industrial y el desplazamiento de los productores.

Ahora bien, una circunstancia de carácter político modificó en parte el sendero y el carácter de la protesta social, aunque no dejó de acentuarse la radicalización y la violencia política. En marzo de 1971 asumió la presidencia el general Alejandro A. Lanusse, quien ante el fracaso de los postulados del golpe militar de 1966 decidió buscar una salida política con el objeto de destrabar la conflictiva situación del país. Convocó a un Gran Acuerdo Nacional (GAN), reactivó la actividad partidaria y fijó un cronograma electoral. Buena parte del sindicalismo se vio obligado a reformular sus estrategias en términos políticos. Los sectores del gremialismo peronista combativo se lanzaron a la lucha interna para ganar espacio en el seno del peronismo frente a la burocracia sindical. Tosco proponía un frente de fuerzas progresistas y el sector más radicalizado del movimiento obrero, el SITRAC-SITRAM, se hallaba entrampado en un purismo obrero que lo aislaría del resto de los trabajadores. A fines de

1971 se produjo la intervención militar de la fábrica Fiat y se retiró la personería gremial del SITRAC-SITRAM, que fue adjudicada a la Unión Obrera Metalúrgica. De esta manera, el gremialismo clasista recibió un duro golpe. Una de las consecuencias de esta derrota derivó en la trágica acción foquista del ERP, el cual, reemplazando la acción de las bases, secuestró en 1972 al director general de Fíat Concord con el objeto de reincorporar a los trabajadores despedidos durante la disolución del SITRAC.

En este contexto crecerían las opciones más violentas, puesto que las organizaciones más radicalizadas no creían ni estaban de acuerdo con la salida electoral. La profundización de la alternativa violenta fue alimentada no sólo por el convencimiento de sus protagonistas sino también por otros hechos. En principio, por una escalada represiva que no se moderó ni siquiera ante la salida política y qué llenaba de presos políticos las cárceles. En este sentido, la muestra más dramática fue el fusilamiento de dieciséis guerrilleros detenidos en Trelew que habían intentado fugarse del penal de Rawson. Por otra parte, no debe olvidarse que Perón alentó el desarrollo de las formaciones especiales y la táctica guerrillera como parte de una estrategia que denominaba «guerra integral» y que apuntaba, por un lado, a debilitar a los militares y recuperar el poder político y, por otro, a consolidar su liderazgo en el interior del peronismo. En efecto, para equilibrar el poder adquirido por la dirigencia sindical vandomista, Perón abrió los espacios internos a la Juventud Peronista (JP), vinculada a Montoneros, al convertirla en la cuarta rama del Movimiento Justicialista.

La derivación de esta política, que era una manifestación más del importante protagonismo juvenil en este periodo, fue el crecimiento explosivo y, si se quiere, fugaz de la JP, convertida entonces en centro de la protes-

ta popular. Desde su primer acto en noviembre de 1972 hasta la ruptura con Perón dieciocho meses después, la JP canalizó en buena medida los reclamos populares alrededor del retorno de Perón al poder y el triunfo del justicialismo en las elecciones, que relegó a la izquierda no peronista a un lugar mucho más modesto. La JP centraba su acción en dos enemigos: el poder militar y la burocracia sindical, y para ello se valía de la movilización popular y del apoyo a la acción armada de Montoneros. De acuerdo con el carácter movimientista y populista del peronismo, la JP extendió con éxito su radio de acción en varios frentes como los barrios, las villas de emergencia, los estudiantes o las fábricas, aunque en estas últimas su influencia era menor debido a que la burocracia sindical no dejaba de tener una fuerte presencia. Estas formas de acción derivaron en la creación de un frente popular que se convirtió en un verdadero movimiento de masas, denominado la Tendencia Revolucionaria. Estaba conformado por la JP, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Agrupación Evita de la rama femenina y el Movimiento de Inquilinos Peronistas.

En un contexto en el cual la sociedad manifestaba fuertes expectativas de cambio, la JP desempeñó un rol central en el resonante triunfo peronista de las elecciones del 11 de marzo de 1973, así como en la movilización de festejo y en la realizada el día de la asunción del presidente Cámpora. El 25 de mayo, cientos de miles de personas coreaban consignas a favor de la revolución y las organizaciones guerrilleras, que no habían abandonado la lucha armada, y denostaban a los militares y a la burocracia sindical. Ciertamente, la movilización popular excedería el nuevo proceso de institucionalización, que no podía satisfacer las exigencias de cambios radicales.

Durante el corto gobierno de Cámpora (cuarenta y siete días) se produjo un estallido cuasi insurreccional, en tanto rebasó en parte a los dirigentes, que derivó en una irrefrenable oleada de tomas y ocupaciones de instituciones de lo más diversas: fábricas, universidades, colegios, hospitales, comunas, medios de comunicación, entes estatales. El gobierno, tironeado por diversos sectores, fue incapaz de resolver este problema y cayó el 12 de julio presionado por el propio Perón. El líder había retornado al país el 20 de junio e ignoró una imponente manifestación de bienvenida, y de fuerza, preparada por la JP a la que asistieron cerca de dos millones de personas. y desde ese momento, se dedicó a resolver la implementación del pacto social. Para ello tenía que desarticular a los sectores más contestatarios del Movimiento, y comenzó la embestida contra la JP y los Montoneros, cuyo momento de inflexión se produjo en el acto del 1° de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo. En esa oportunidad los atacó duramente y se produjo una ruptura de hecho. Esa embestida no reconoció límites en sus métodos, e incluyó las acciones parapoliciales de la Triple A que poco después creó López Rega, uno de los allegados más cercanos al caudillo. Para neutralizar a la Juventud y al gremialismo combativo y clasista, Perón reformuló su relación con el sindicalismo tradicional que desde el asesinato de Vandor había decidido acatar sus tácticas. A partir de su regreso, Perón se apoyó activamente en la CGT y las 62 Organizaciones, orientadas por los dirigentes metalúrgicos José I. Rucci y Lorenzo Miguel. En enero de 1974 creó el instrumento legal adecuado a través de la sanción de una ley que otorgaba el monopolio a los grandes sindicatos frente a las estructuras locales o descentralizadas.

Sin embargo, ni la reconstitución del poder sindical ni el pacto social lograron aplacar la conflictividad obrera,

que presionaba en busca de una recomposición salarial mayor a la otorgada y que se manifestaba en innumerables huelgas y tomas de fábrica. Esa presión condujo a la Gran Paritaria de marzo de 1974, por la cual se acordó un aumento salarial del 13%. Sin embargo, ese incremento se neutralizó rápidamente en tanto los empresarios y comerciantes lo trasladaron a los precios. A partir de ese momento, y afectado también por la crisis internacional del petróleo y por la propia crisis de gobernabilidad que sucedió a la muerte de Perón, el pacto social se derrumbó, y con él, el modelo peronista. La economía y la política ingresaron en un sendero de absoluta inestabilidad.

Apoyada en la siniestra figura de López Rega, la presidenta Isabel Perón rechazó absolutamente las acciones de gobierno e impuso la censura a la actividad artística, periodística e intelectual; la persecución y la represión paraestatal a través del incremento de la actividad de la Triple A, que asesinó a varios centenares de personas; y también la represión directa a los diversos conflictos, como las huelgas del polo siderúrgico de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica, que contó con la complicidad de la dirección nacional del gremio.

Por otro lado, Isabel Perón, al privilegiar su alianza con López Rega e implementar el plan económico neoliberal de Celestino Rodrigo, que desembocó en un proceso hiperinflacionario, se enfrentó con el sindicalismo.

Precisamente, los sindicalistas aprovecharon la impopularidad de aquéllos y, luego de convocar al movimiento obrero a una marcha y un paro general en junio de 1975, los obligaron a renunciar y recuperaron, por poco tiempo, su gravitación política. Entre la caótica situación

económica, la crisis de gobernabilidad y la profundización de la represión, la protesta social quedó acorralada y casi sin posibilidad de expresarse. A ello contribuyeron también ciertas tácticas adoptadas por la izquierda guerrillera, tanto peronista como no peronista. Si bien es cierto que la represión implementada por el gobierno y la propia derecha del peronismo dificultaban notablemente las acciones de las organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles que actuaban en la superficie, la absoluta militarización del ERP y de los Montoneros que privilegiaban la lógica de la guerra, contribuyó a hacer más difícil esa actividad. ¿Cuál podía ser el destino, sino la tortura y la muerte, de los militantes del Movimiento Sindical de Bases, que respondía al ERP, o de los miembros de la Juventud Trabajadora Peronista, vinculados a Montoneros, que actuaban a cara descubierta? El predominio de la lógica militar terminaba por anular la acción de masas y por herir gravemente a las formas de protesta que se habían desarrollado durante casi un siglo. Por supuesto, ninguna de estas razones puede avalar el golpe militar encabezado por el general Videla ni, menos aún, la monstruosa política de exterminio y violación de los más elementales derechos humanos llevada adelante por las tres ramas de las Fuerzas Armadas encaramadas en el gobierno con la complicidad de ciertos sectores de la sociedad civil.

4. Dictadura y democracia: los cambios en la protesta popular, 1976-2001

En 1976 se produjo en la Argentina un nuevo golpe militar que generó cambios profundos en la economía, la sociedad y la cultura, que modificó las formas de la protesta social e instauró un gobierno dictatorial sin antecedentes en cuanto a la magnitud de la violación de los derechos humanos. La protesta obrera estuvo marcada por una política represiva que diezmó las organizaciones de base y eliminó a los trabajadores más combativos. La extensión del autoritarismo a todos los niveles de la sociedad civil ayudó a que algunos sectores de la población buscaran nuevos canales de participación democrática y expresión política, por lo que la protesta social excedió el mundo del trabajo e involucró a familiares de los detenidos y desaparecidos, vecinos, amas de casa, jóvenes y artistas. Con el advenimiento de los nuevos gobiernos democráticos a partir de 1983, resurgieron los repertorios de confrontación tradicionales. Pero en los noventa, luego de más de una década de transformaciones bajo el signo del neoliberalismo y de las enormes dificultades de los partidos políticos para responder a las demandas de la sociedad, se incorporaron a la protesta social una amplia gama de actores y recursos que se expresaron con nuevos repertorios de confrontación.

Dictadura y democracia constituyen dos polos antitéticos que encuentran un punto de confluencia en el

contexto neoconservador que las atravesó. Tanto desde Inglaterra, con el liderazgo de Margaret Thatcher, como desde los Estados Unidos, con Ronald Reagan, se difundieron ideas y prácticas sociales que generaron un vasto consenso en torno del dominio de los mercados. Este proceso permitió la especulación financiera, que facilitó ganancias rápidas a los capitales «impacientes» y destruyó las bases del Estado de Bienestar. Entre los años setenta y noventa, los sindicatos perdieron parte de su poder político, mientras que las grandes empresas eliminaron puestos de trabajo y usaron todo su poder para obtener mayores ganancias, y los gobiernos, en particular los de los llamados países «emergentes», fueron cada vez más dependientes de las decisiones de los organismos financieros internacionales y más benévolos con los dueños de los capitales. Además, la caída de la Unión Soviética afianzó el proceso de globalización puesto en movimiento por el imperialismo moderno y se barrieron las posibilidades de poner límites a la arrogancia de las políticas neoliberales de los Estados Unidos.

En la Argentina se realizaron numerosos experimentos acordes con ese clima de ideas global, aunque la opresión diferenció claramente a los gobiernos militares de los civiles que les sucedieron. La dictadura militar instalada el 24 de marzo de 1976 cometió un verdadero genocidio e instaló la palabra *desaparecidos* como símbolo de la represión brutal que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas. Desaparecieron miles de activistas y dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos, intelectuales, periodistas, religiosos y artistas, así como familiares de las víctimas.

La represión fue fundamental para implementar la política económica y social del gobierno. Buscó destruir la tradición de intervención estatal que se había forjado a

lo largo del siglo XX e impulsar un mercado de capitales a corto plazo y la movilidad sin trabas de las divisas. Las primeras medidas del equipo económico encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz suprimieron las negociaciones colectivas y prohibieron las huelgas. Poco tiempo después se realizó una reforma financiera mediante la cual se liberalizaron las tasas de interés al mismo tiempo que el Estado garantizaba títulos y depósitos a plazos fijos. El predominio de la especulación financiera se extendió a toda la población, que vivió al ritmo de la «tablita», tal el nombre con el que se designaba la pauta cambiaria, o de la «bicicleta», con el objetivo de acumular «plata dulce», de acuerdo al lenguaje de la época. También se generó una marcada concentración económica de empresarios o grupos familiares nacionales - como Bulgheroni, Macri, Fortabat y Pérez Companc, o de multinacionales como Bunge y Born y Techint-. El crecimiento de estas empresas se produjo a partir de las concesiones de obras y prestaciones de servicios al Estado, y los empresarios hicieron fortunas impresionantes con inversión y riesgo mínimos de su parte. Paralelamente, se eliminó en forma progresiva la protección a la producción local. La reducción de los aranceles y la apertura de la importación a bienes de todo tipo afectaron las industrias protegidas por el Estado, que ahora no podían competir con los precios de la producción industrial extranjera.

Una consecuencia de la política económica fue la disminución notable del nivel de actividad de los sectores automotor, metalúrgico, siderúrgico y textil, y el achicamiento de los niveles de producción de otros, con la sensible reducción del personal ocupado y el cierre de numerosas fábricas. A pesar de las dificultades planteadas en la producción, el desempleo no aumentó demasiado, probablemente por el crecimiento del

cuentapropismo; sin embargo, las cifras globales esconden la caída de la ocupación industrial y las diferentes situaciones regionales. La disminución del empleo industrial fue leve e ininterrumpida entre 1976 y 1980: descendió del 35 al 30% de la población económicamente activa. Pero al final del gobierno militar, el porcentaje de desocupados rondaba el 8%, el cual afectaba tanto a las ciudades del litoral como a las del interior del país, y aumentó la cantidad de personas que entraría al escenario de la protesta demandando alimentación básica y trabajo.

Achicar el rol del Estado en la economía fue una consigna clave. Afectó diversos servicios y preparó el camino para el proceso de privatización posterior, al generalizarse la idea, que en parte era cierta, sobre la ineficacia de la presencia estatal en áreas de servicios como teléfonos, gas, aguas corrientes, correos, líneas aéreas, ferrocarriles. En el caso de los ferrocarriles, la supresión de los servicios de trenes no sólo modificó el carácter de la red ferroviaria y el poder de las organizaciones gremiales ferroviarias, también comenzó un lento proceso de aislamiento de las localidades más alejadas, donde los criterios de rentabilidad y eficiencia utilizados por las autoridades eran inadecuados para el mantenimiento de las comunicaciones. Se cerraron más de 800 estaciones ferroviarias, se clausuraron alrededor de 4.500 kilómetros de vías férreas y los servicios disminuyeron casi el 40 por ciento.

Las medidas económicas, políticas y sociales produjeron cambios importantes en el mundo del trabajo. En la clase obrera disminuyeron los asalariados y se incrementó el número de trabajadores autónomos, especialmente electricistas, mecánicos, peluqueros, taxistas, albañiles, pintores, plomeros y peones. El achicamiento

de la clase obrera tuvo como contraparte el crecimiento de los sectores medios, integrados por un porcentaje importante de trabajadores autónomos y comerciantes minoristas. Durante el gobierno dictatorial se produjo un notable descenso del salario real, que en 1978 apenas cubría el 57% de la canasta familiar. Además, la suspensión de los derechos laborales y de las negociaciones salariales, así como de los aumentos automáticos, le otorgaba al Estado un poder ilimitado para decidir unilateralmente los aumentos de salarios de acuerdo con el nivel de productividad. Además, debe agregarse que, como los reajustes se fijaban porcentualmente, los salarios menores eran los más castigados, y, dentro de esta franja, fueron más afectados los estatales que los privados.

El menor poder adquisitivo del salario se vio agravado por el deterioro del sistema previsional debido a la paulatina extensión del trabajo en negro o por la eliminación de la contribución empresaria al financiamiento del sistema. El gobierno militar sacó a las obras sociales del control de los sindicatos, disminuyó el gasto social y comenzó a transferir el área de salud al sector privado. De modo que era cada vez más difícil recibir atención médica en los hospitales o contar con una jubilación o pensión que permitiera vivir sin zozobras.

Todas las medidas afectaban directamente a los trabajadores ya sus familias, y las reacciones se produjeron en varios frentes. Como el gobierno militar se propuso modificar el rol de la clase obrera y de sus representaciones, se atacó no sólo a los sectores más combativos del movimiento obrero sino también a la vieja estructura sindical que se había consolidado desde 1945. También se desarticuló la estructura nacional centralizada del movimiento obrero, que, por otra parte, había sido

cuestionada en la década anterior por sus propias bases.

Para desestructurar la acción gremial, el gobierno sancionó leyes represivas que apuntaban a prohibir las actividades gremiales (ley 21.356), suspender el derecho de huelga (ley 21.261), eliminar el fuero sindical especial (Ley 21.263), reimplantar la ley de residencia (Ley 21.259) y garantizar la seguridad industrial con penas y sanciones para quienes realizaran medidas de fuerza (Ley 21.400). Paralelamente, se derogaron otras leyes derivadas de las demandas y protestas de los trabajadores, como el Estatuto del Docente (Ley 21.278), y se produjo la eliminación de varias cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo (Ley 21.476) y se produjo la anulación de una parte importante de las disposiciones de contratos de trabajo (Ley 21.297). El broche de oro de estas medidas fue la sanción de la ley 22.105 de Asociación Gremial de Trabajadores, que apuntaba a reducir y neutralizar el poder sindical a través de la eliminación de la CGT, permitiendo la libre afiliación y prohibiendo los grandes sindicatos por ramas. A la vez, se transfirieron las obras sociales sindicales al Estado y, de esta manera, se privó a los gremios del uso de los aportes de los trabajadores. Esta cuestión tenía una doble implicación: le restaba poder económico a las organizaciones gremiales y desarticulaba el sistema de obras sociales en tanto red de unidad y solidaridad entre los trabajadores. Durante este periodo, se buscaba destruir el tipo de organización sindical afianzado durante la segunda mitad del siglo XX y, en buena medida, los gremios tuvieron que resistir las disposiciones implementadas por el régimen. El gobierno militar clausuró la vida política y sindical, y arremetió contra ella interviniendo la CGT y los sindicatos más importantes, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos (SMATA), los telefóni-

cos (FOETRA), la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE), por mencionar sólo algunos. Las Fuerzas Armadas fueron implacables en la persecución de los dirigentes gremiales, incluso con quienes en el pasado habían mantenido fluidas comunicaciones con los gobiernos de facto. Su política era lograr la subordinación de los sindicatos o, si no lo lograban, ilegalizarlos, para lo que contaban con la activa participación de organismos estatales como el Ministerio de Trabajo.

El tema de la productividad fue importante para el gobierno y los empresarios. Como se ha visto en el capítulo anterior, la cuestión era de larga data y no había podido ser resuelta luego del golpe de 1955. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las demandas de los empresarios, querían «restablecer el clima de autoridad» en las empresas, pues consideraban la lucha reivindicativa en los lugares de trabajo como una especie de guerrilla industrial -incluso hablaban del «accionar clandestino de algunas comisiones internas»-. Por ello, los planes de disciplinamiento y control incluyeron el envío de tropas o comandos parapoliciales a los lugares de conflicto. Fue frecuente la detención y/o desaparición de activistas y delegados en las mismas plantas fabriles, como ocurrió en las empresas Yelmo, Mercedes Benz y Ford en Buenos Aires, en las seccionales de SEGBA, en los ingenios azucareros de Tucumán o en Acindar (Villa Constitución), donde se profundizó la represión iniciada durante el gobierno de Isabel Perón. En algunas empresas llegaron a desaparecer casi todos los miembros de las comisiones internas.

Al mismo tiempo, la represión empresarial fue notable, pues muchos directivos colaboraron activamente con la represión denunciando a los activistas y delegados de sus plantas o ajustando internamente los mecanismos

de contención. La magnitud de la represión produjo una notoria desmovilización general de los trabajadores entre 1976 y 1981, aunque la resistencia fue importante en algunas fábricas y empresas de servicios.

Los trabajadores organizados siguieron utilizando los repertorios de confrontación que habían empleado tan eficazmente en décadas anteriores, pero evitaron los enfrentamientos abiertos y directos, pues eran muy vulnerables ante la represión. Por eso utilizaron a menudo la huelga de brazos caídos y el trabajo a desgano o a reglamento, usado en el pasado cercano y que ahora pasó a llamarse «trabajo a tristeza» debido a las dificultades impuestas por la insuficiencia del salario, el cerceamiento de los convenios y los despidos. Esta herramienta servía además para evitar la represión. Ante la presencia patronal o militar, los obreros comenzaban a trabajar lentamente; cuando se retiraba la presencia amenazante, volvían a la posición inicial. En ocasiones, este procedimiento se repetía varias veces al día. En octubre de 1976, el gremio Luz y Fuerza, compuesto por trabajadores de las empresas eléctricas privadas y estatales, recurrió a esa medida para protestar contra el despido de trabajadores al aplicarse la Ley de Prescindibilidad, por el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo y por la rebaja salarial. Durante los meses sucesivos, los trabajadores protestaron trabajando a desgano o «con tristeza» y realizando apagones que afectaron todo el territorio nacional. En respuesta, el gobierno detuvo, despidió, secuestró e hizo desaparecer a numerosos activistas. El más importante de ellos fue el dirigente Oscar Smith, quien desapareció en 1977. A partir de ese momento, la protesta de los trabajadores comenzó a declinar.

Durante 1977, los reclamos y las manifestaciones fueron escasos, aun cuando se registraron algunos con-

flictos en diversos lugares del país. Durante los años siguientes, la protesta se intensificó y se expresó de diversas formas: trabajo a desgano, presentación de petitorios, estado de alerta o huelgas sorpresivas que se caracterizaban por su limitada duración para evitar la intervención de las Fuerzas Armadas o policiales. Es imposible detallar cada uno de esos conflictos: se produjeron en todo el territorio e involucraron a trabajadores de cuello blanco (bancarios, judiciales) obreros de fábricas importantes del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Villa Constitución; trabajadores ferroviarios de Taquí Viejo y de los ingenios en Tucumán. Los asalariados ferroviarios, metalúrgicos y mecánicos estuvieron al frente de numerosas luchas. En 1981, la agitación en el campo laboral comenzó a generar inquietud al régimen militar, y hasta la CGT se animó a declarar un paro general el 22 de julio de 1981. Aunque el acatamiento fue dispar, se hizo sentir en los establecimientos industriales del Gran Buenos Aires, en tanto que, en el interior del país, el ausentismo fue del 50 al 60%. Ese mismo año, el obispado de Quilmes organizó una «Marcha de Hambre» bajo la consigna «Pan y trabajo». El 7 de noviembre, una nueva marcha, organizada por la CGT y algunos partidos políticos, se dirigió a la iglesia de San Cayetano en demanda de «paz, pan y trabajo». San Cayetano era (y es) motivo de devoción popular entre quienes buscan trabajo y la convocatoria de la CGT reunió a unas 50 mil personas que de ese modo expresaban su insatisfacción, coreaban consignas contrarias al régimen militar y reclamaban por los desaparecidos. El miedo comenzaba a neutralizarse y la protesta empezaba a tener mayor visibilidad. La CGT, liderada por Saúl Ubaldini, convocó siete paros generales durante la dictadura. En los primeros demandó la plena vigencia de la Ley de convenciones colectivas de trabajo, mejores salarios y el fin de la desocupación. Re-

cién cuando aparecieron grietas en el poder dictatorial se repudió la política económica del gobierno, aunque ninguna huelga fue convocada en defensa de las libertades elementales cercenadas. Los paros realizados en 1979 y 1981 tuvieron adhesión parcial, pero el del 30 de marzo de 1982 fue acompañado por una movilización a la Plaza de Mayo con el objetivo de demostrar el descontento de los sectores populares. Ese día, la Plaza y los alrededores estaban tomados por la policía, con todo el arsenal represivo de carros de asalto, camiones hidrantes, policías a caballo y helicópteros. Los manifestantes fueron reprimidos y se detuvo a varios cientos de personas. La escena se repitió en Mendoza, Rosario, Tucumán y Córdoba. Dos días después comenzó la Guerra de Malvinas, y el escenario de la represión se transformó en otro, con manifestantes que exteriorizaban su apoyo al intento de recuperar las islas; esta vez no hubo castigo policial. A partir de la derrota militar en Malvinas se abrió una crisis política en el régimen militar que lo llevaría a su caída. En ese contexto, los paros generales por mejoras salariales y en repudio al gobierno realizados en septiembre y diciembre de 1982 y en marzo y octubre de 1983 tuvieron mayor repercusión.

El conjunto de la resistencia obrera a la dictadura puede dividirse en dos momentos. Inicialmente tuvo un carácter defensivo. Para comprender este rasgo es preciso tener en cuenta que los militares entendían como «subversivo» todo tipo de confrontación social y que instauraron una política destinada a «extirpar» todo intento de «disociación social». Los reclamos obreros se realizaban en un clima de amenazas y presiones que fue claramente expresado por un obrero cuando decía que «uno estaba trabajando y tenía un soldado con un fusil al lado». La magnitud de la represión en el campo laboral sólo pudo realizarse con el apoyo decidido de los empre-

sarios, que contribuyeron a la depuración del movimiento obrero de todos los elementos que pudieran obstaculizar los planes para disciplinar y subordinar a la clase obrera.

La cúpula sindical sólo en muy pocos casos tuvo una actitud claramente opositora. Buscó, como en el pasado, acercarse a los militares para recuperar el terreno perdido y, al mismo tiempo, intentar la unidad de los dirigentes, pues había varias fracciones en disputa. Esa unidad tenía el claro objetivo de reconstituir las alianzas políticas que les restituyeran un lugar preponderante en las estructuras de poder, sobre todo porque las divisiones in ternas enfrentaban a colaboracionistas y no colaboracionistas, a los 25, la CNT y los 20, a la CGT Brasil y a la CGT Azopardo. Pero la organización y de centralización de las luchas obreras fueron más el resultado de los impulsos dados por las desmembradas comisiones internas, cuerpos de delegados y asambleas de fábrica que por el papel jugado por las cúpulas sindicales. Avanzaban o retrocedían en el proceso de recomposición y unidad presionados por las circunstancias políticas externas y sólo en contadas oportunidades denunciaron la violación sistemática de los derechos elementales.

Como contracara de la actitud de buena parte de la dirigencia sindical, la resistencia a la dictadura tuvo un actor clave en el movimiento de derechos humanos que, aunque no era nuevo —la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por ejemplo, fue fundada en 1937, impulsada por el Partido Comunista—, adquiere una nueva dimensión con la conformación de asociaciones por parte de los familiares de los afectados por la represión. Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza Mayo se constituyeron entre 1976 y 1977. La resistencia

era una clara actitud defensiva y reactiva que se basaba en la defensa de un vínculo primario: el de la familia como base de la solidaridad y la acción colectiva. Marchas y movilizaciones fueron las formas de protesta cuyo objetivo era la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, y la consigna «aparición con vida» fue el elemento aglutinante de un movimiento heterogéneo, ya que a los familiares se fueron sumando otros actores. El 30 de abril de 1977 comenzaron las marchas semanales de las Madres de Plaza de Mayo. Una de ellas, Marta, sostenía varios años después: «Como todas las madres he venido a manifestar por la vida de mi hijo. Hoy veo más allá. No quiero que otra madre, en este país u otro, tenga que vivir los años que yo vengo viviendo. Más allá de mi caso personal, es el principio mismo del uso sistemático de la represión y el terrorismo de Estado como método de gobierno lo que quiero denunciar y combatir». Esta protesta se dio en el espacio simbólico de la Plaza de Mayo, donde a partir de 1981 comenzó a organizarse la «marcha de la resistencia» que dura veinticuatro horas y cuya consigna varía cada año. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se creó en noviembre de 1977 con el objeto de reclamar por sus nietos y nietas nacidos en cautiverio o apropiados-adoptados con información falsa sobre sus orígenes. En el mismo año del golpe militar, padres, hermanos y cónyuges de detenidos-desaparecidos y de presos políticos «legales» constituyeron la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Madres y abuelas expresaron su protesta alrededor de la Pirámide de Mayo, saliendo del hogar a la plaza, del espacio privado al público. Se movilizaron a partir del papel que jugaban desde hacía décadas como guardianas y responsables del hogar; pero como desafiaron la política dictatorial destinada a privatizar las con-

secuencias de la represión y pudieron vencer el aislamiento provocado por el miedo, el terror o la pasividad, politizaron las demandas de respeto por la vida y el derecho de padres y familiares por conocer el destino de las víctimas.

Durante la dictadura, la movilización de las mujeres no sólo fue importante en el plano de los derechos humanos sino también en territorios aún poco conocidos. El cuidado de la vida, como en las movilizaciones por los desaparecidos, fue la base de las actividades contra el servicio militar obligatorio, cuestionando un eje importante de la organización militar y de la socialización de los jóvenes que se había impuesto en 1902. Las organizaciones feministas se lanzaron a una importante actividad pública para lograr la patria potestad compartida. También aparecieron las primeras protestas de amas de casa, organizadas a nivel barrial y vecinal, contra el alza del costo de vida. En este sentido, una de las primeras reacciones ocurrió en la ciudad de Rosario en 1982 cuando mujeres golpeando cacerolas y otros utensilios domésticos protestaron contra la carestía de la vida y la política económica del gobierno. Eran «actos relámpagos» que comenzaban en la esquina de un barrio y, cuando llegaba la policía, se dispersaban y se reunían en otra esquina. Ese mismo año, un grupo de amas de casa de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, decidió suspender sus compras los jueves. El movimiento se extendió a otros partidos del Gran Buenos Aires y a ciudades como La Plata, Córdoba y Rosario.

El deterioro de las condiciones y de la calidad de vida alimentó las protestas en los barrios, que no eran nuevas; como se ha visto, también hay una historia de luchas y demandas en los centros urbanos para mejorar la infraestructura barrial. Allí, la sociedad de fomento era la organización clave en la sociedad barrial, pues se en-

cargaba de organizar la auto ayuda y la presión sobre el Estado. El acceso a una vivienda digna fue un problema que se convirtió en estructural a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y la falta de políticas adecuadas resultó el rasgo distintivo. Como ya se ha señalado, el crecimiento de la población en las grandes ciudades y el déficit de viviendas dio origen, desde la década de 1930, a las villas miserias, con sus malas condiciones de vida debido a la ausencia de agua corriente, desagües cloacales, infraestructura educativa u hospitalaria. Para las autoridades militares, las villas eran espectáculos indeseables, y buscaron erradicarlas con el traslado de sus habitantes al cordón del Gran Buenos Aires.

Aunque es cierto que las necesidades habitacionales de la población se resolvieron históricamente en el mercado inmobiliario, también lo es que las invasiones de terrenos, muchas veces producto de acciones individuales y familiares, cristalizaron en acciones colectivas que dieron forma a las «tomas de tierras» producidas en el cordón suburbano de Buenos Aires. Por ejemplo, en 1981, se produjo un proceso de invasión de tierras en Villa Sola no, en donde se conformó una comisión vecinal que organizó y dirigió el resto de la ocupación, protagonizada por cerca de 20 mil personas, en su mayoría desocupados. Las ocupaciones eran ilegales, pero para los actores movilizados, el impulso provenía del sentimiento compartido de la legitimidad de los reclamos, ya que se consideraban sujetos de derechos que el régimen violaba sistemáticamente.

Esta protesta territorializada tuvo otra expresión en los llamados «vecinazos». En 1982, una movilización popular se opuso al cobro de una cuota adicional de impuestos municipales. «Impuestos sí, aumentos no» fue la consigna de quienes invocaban la falta de razonabilidad de las subas impositivas, pues las carencias urbanas

así como las prestaciones sociales eran notables. La protesta barrial y vecinal fue inicialmente un murmullo que se dejó oír en el cordón suburbano; pero cuando el movimiento, creció se produjo una masiva rebelión en la localidad de Lanús («Lanusazo») que convocó a miles de manifestantes.

La desocupación y los magros salarios produjeron otro movimiento en los barrios de la zona sur del Gran Buenos Aires: las «ollas populares». A principios de 1982 se organizaron grupos de vecinos, nucleados alrededor de las parroquias zonales para distribuir alimentos entre las personas más necesitadas. La organización de las ollas populares, además de mitigar el hambre, generaba un sentimiento de solidaridad barrial que alimentaba otros como los de pertenencia.

A pesar de la represión, las expresiones de descontento podían ocupar carriles distintos de los de la tradicional protesta obrera. Como se ha visto, durante la década del sesenta fue tomando forma una cultura de la rebelión juvenil que podía expresarse a través del movimiento estudiantil o de los partidos políticos; pero para la dictadura, el mero hecho de ser joven era peligroso; por lo que cerró todos los canales de participación con represión. La protesta juvenil encontró entonces una vía de expresión a través de la música, especialmente a partir de la Guerra de Malvinas. El rock nacional con su vitalidad y debilidad convocó a miles de personas jóvenes, en algunos casos hasta 60 mil, que se reconocían como parte de una identidad común y expresaban su oposición al régimen. También los trabajadores de la cultura tenían motivos para expresar su descontento. Además de las desapariciones y el exilio al que fueron empujados actores, actrices, escritores y periodistas, las prohibiciones, censuras y listas negras eran moneda corriente. Una de las expresiones de resistencia más notable fue

la organización del ciclo Teatro Abierto, un festival teatral que se realizó por primera vez en 1981 en el que se presentaban obras cuyos temas centrales se relacionaban con la violación de los derechos humanos y la falta de libertades. La respuesta del público fue espectacular, sobre todo entre los sectores medios y juveniles, y el fenómeno se repitió al año siguiente.

El fin de la dictadura militar y el triunfo del radicalismo encabezado por Raúl Alfonsín en 1983 abrieron nuevas expectativas en el conjunto de la población. El advenimiento de un nuevo gobierno democrático encarnaba un importante desafío tanto para los dirigentes en general como para el conjunto de la sociedad. En principio se trataba de encontrar una salida para las víctimas de la represión y de generar un nuevo acuerdo en la sociedad civil y en el campo político alrededor del mantenimiento de las instituciones democráticas. En segundo lugar, era necesario hallar el camino para el establecimiento de una democracia con bases más equitativas en los planos económico, social y cultural. Finalmente, debían colocarse los cimientos para el crecimiento de la economía.

Aunque había enormes expectativas, el terreno estaba minado. La herencia del pasado represivo había dejado huellas profundas y los militares no estaban dispuestos a aceptar la condena social. Además, una parte de la sociedad tenía dificultades para reconocer las responsabilidades propias en ese cruento proceso. Durante el primer gobierno civil de la transición democrática se sucedieron las asonadas militares que fueron minando la confianza en el poder del presidente constitucional para limitar los intentos desestabilizadores. Como si ello fuera poco, una parte de la oposición encarnada en el peronismo realizó un juego peligroso al dialogar con algunos grupos de las Fuerzas Armadas, que sólo tuvo fin

cuando en la presidencia de Menem se desarticuló el poder de los militares golpistas a los que se llamaba 'carapintadas'.

En el plano económico, el gobierno radical debió afrontar dificultades relacionadas con el estancamiento, la inflación y los vencimientos de la deuda externa. Al principio, el gobierno procuró mejorar los salarios de los trabajadores y, mediante el otorgamiento de créditos a un sector del empresariado, buscó reactivar el mercado interno y poner en movimiento el aparato productivo. Esta política inicial fracasó rápidamente y llegó a su fin cuando en 1984, se implementó una nueva devaluación de la moneda. La situación general se agravó y el Plan Austral fue otro intento de recuperar cierto equilibrio interno mediante el congelamiento de los precios básicos de la economía, el tipo de cambio, las tarifas y los salarios.

La política de ingresos fue el eje de la acción antiinflacionaria, que con el tiempo se reveló insuficiente y desembocó en el proceso hiperinflacionario. Éste repercutió de manera catastrófica sobre precios y salarios, y provocó la escasez de artículos de primera necesidad. En el medio se había producido el fracaso de los planes económicos denominados «Austral» y «Primavera». Por otra parte, la aplicación de las recetas del FMI para resolver los problemas fracasaron una y otra vez, agravando las tensiones sociales y políticas.

Más allá de los matices que diferenciaban a los diversos planes económicos, en el largo plazo, la política económica se fue revelando en parte como una continuidad a la inaugurada por los militares, y la llegada al gobierno de Carlos Saúl Menem en 1989, independientemente de las promesas de «salariazó» y «revolución productiva», cerró el círculo iniciado por el ministro Martínez

de Hoz en 1976. Se completó el proceso de desindustrialización en términos globales y de desinversión del sector, se produjo una importante fuga de capitales al exterior y los niveles de desocupación llegaron a cifras impensables cien años atrás. Acompañando estas tendencias, se generó un fuerte y constante debilitamiento del Estado y de los sectores medios y obreros.

En consecuencia, la protesta social se adecuó a estas circunstancias mostrando diversos tonos y matices a lo largo de los sucesivos gobiernos democráticos. Al comienzo, el triunfo del doctor Raúl Alfonsín abrió nuevas expectativas en torno a la reparación de las desigualdades y las injusticias o sobre la instauración de la vida democrática.

Ese anhelo democrático se extendió a diversos ámbitos como el gremial, renovando las antiguas aspiraciones de los militantes de base de desplazar a las viejas cúpulas sindicales y de elegir libre y limpiamente nuevas autoridades dentro de las asociaciones gremiales. Los comicios internos produjeron la lenta normalización de la vida sindical, ocluida durante la dictadura, y la confrontación electoral fue mayor que en el pasado. Entre 1984 y 1985, muchas fracciones opositoras llegaron a la conducción de sus gremios, como, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Gráfico Argentino, la Unión Ferroviaria o el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Hasta la UOM, bajo la férrea conducción de Lorenzo Miguel, perdió varias seccionales como Villa Constitución, liderada por Alberto Piccinini, o Quilmes, orientada por Francisco Gutiérrez.

Sin embargo, el camino a recorrer por los trabajadores no era tan claro. En principio, porque los gremios debían compaginar la nueva experiencia al calor de una

transición democrática dificultosa. Luego, porque el gobierno radical entró en conflicto con los gremios peronistas, ya que buscaba instaurar una mayor democracia sindical y limitar el poder de los jerarcas gremiales y la acción corporativa. Los recelos eran mutuos; el gobierno intentó desarticular el poder de los dirigentes sindicales y ellos respondieron con varias huelgas generales. Aun que los conflictos y comportamientos gremiales estuvieron marcados por la pulseada entre el gobierno radical y la oposición sindical peronista, debe destacarse que el restablecimiento de la democracia política y la plena vigencia del derecho constitucional de huelga diferenciaban claramente este momento del existente durante la dictadura. La CGT, encabezada por Saúl Ubaldini, declaró varios paros nacionales, muchos de ellos con movilizaciones. Pero estas huelgas eran utilizadas más como herramientas de negociación política que como arma para mejorar los derechos laborales o las condiciones y las fuentes de trabajo. Al quedar insatisfechas las aspiraciones de los trabajadores, comenzó a disminuir el nivel de adhesión a las medidas de fuerza.

El gremialismo convocó trece huelgas generales durante el período alfonsinista: una en 1984, dos en 1985, cuatro en 1986, tres en 1987 y tres en 1988. El objetivo declarado por la CGT era la oposición a la política económica gubernamental con el argumento de que el gobierno estaba subordinado a los dictados del FMI. Los conflictos laborales en los primeros años del gobierno radical adoptaron las formas más variadas: paros parciales o totales, por actividad o por empresa; huelgas de hambre; publicación de solicitudes; quites de colaboración; ollas populares. El Ministerio de Trabajo tuvo escasa intervención en la resolución de los conflictos y esta actitud prescindente dejó librada a los sectores patronales y obreros la decisión de tomar las medidas que consideraran

adecuadas para el logro de sus objetivos. Recién con el largo conflicto en la empresa Terrabusi el gobierno dispuso aplicar la conciliación obligatoria. Fueron los representantes de la Unión Industrial Argentina quienes presentaron una solicitud de mayor celeridad en la intervención gubernamental, pues querían limitar el uso al derecho de huelga y evitar la propagación de las protestas.

El estado permanente de huelga y movilización dañó al gobierno de Alfonsín, pese a que el movimiento obrero estaba dividido en diferentes fracciones como el integracionismo del Grupo de los 15, las 62 Organizaciones y los combativos. Por otra parte, la CGT, en su clásica actitud corporativa, estableció alianzas antigubernamentales públicas y secretas, implícitas y explícitas, con la Iglesia, los estudiantes, los grupos de izquierda y el propio Partido Justicialista, lo que acentuó la debilidad del gobierno. Recién en 1989, cuando el candidato peronista Carlos Menem se convirtió en presidente de la Nación, se moderó la movilización sindical. El dato más claro de este cambio de actitud de los dirigentes sindicales surge de la comparación del número de conflictos producidos antes y después del gobierno radical. En 1983, se protagonizaron 316 conflictos laborales, en 1986 ascendieron a 725 y llegaron en 1988 a 949; desde ese año comenzaron a declinar, reduciéndose de manera notable a partir de 1992, cuando sólo se contabilizaron 281 conflictos, hasta llegar a 165 en 1998. Por otra parte, las protestas laborales crecieron al ritmo de la inflación y comenzaron a disminuir durante la estabilidad económica asociada con la convertibilidad.

La construcción de la institucionalidad democrática a partir del gobierno de Raúl Alfonsín estuvo acompañada por la confrontación de diversos actores que otorga-

ban sentidos diferentes a sus prácticas. La apertura democrática recreó un espacio apto para una variedad de actuaciones públicas y colectivas, y se retomaron experiencias previas. También se revitalizaron las asociaciones de la sociedad civil en los barrios y las localidades que habían estado a la vanguardia de los reclamos contra los impuestos y de las protestas vecinales de 1982.

La resolución de los problemas cotidianos fue clave en las movilizaciones que ocurrieron en el tramo final del último gobierno dictatorial y se renovaron durante los gobiernos democráticos. Uno de esos problemas estaba constituido por las dificultades para acceder a una vivienda, lo que motivó la ocupación de terrenos fiscales tal como ocurrió en marzo de 1986, cuando unas cuatrocientas personas provenientes de Gregorio de Laferrere, González Catán e Isidro Casanova se apropiaron en plena noche de terrenos ubicados en el Partido de La Matanza. La formación del asentamiento estuvo rodeada de tensiones y amenazas, pero el barrio, que previamente había sido diagramado por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), se organizó con la elección de delegados que conformaron la comisión barrial.

Las ocupaciones de tierras y la conformación de asentamientos precarios muestra claramente cómo una acción colectiva da lugar a nuevos conflictos, al ritmo de los cuales se configuran nuevas identidades y se reconfiguran las existentes. La formación de los barrios generaba tensiones entre los “vecinos” que se oponían a los “villeros” o, mejor aún, entre los que tenían, aunque fuese poco, y los que nada poseían. Expresiones de esas tensiones son, por un lado, las palabras de un ocupante que señalaba “No queremos nada regalado, vamos a poner nuestro sudor y tratar de pagar el terreno que vamos

a habitar. No queremos una villa sino un barrio digno” y, por otro, las acciones de algunos vecinos que se movilizaban organizados en patrullas, portando armas de fuego y bombas molotov y dispuestos a prevenir las acciones de los sin techo. Además, las ocupaciones generaban el apoyo de las fuerzas políticas locales, sobre todo las opositoras al gobierno de turno, con el objetivo de obtener algún rédito político; al mismo tiempo, los gobiernos locales buscaban afianzar las bases clientelares otorgando o facilitando la legalidad de las acciones. Como si fuera poco, las acciones colectivas de este tipo reavivaban la discusión sobre la legitimidad de las ocupaciones en el marco del Estado de Derecho.

La trama de la protesta social durante los sucesivos gobiernos democráticos fue transformándose cada vez más y convirtiéndose en absolutamente diversa y heterogénea. Algunas manifestaciones conflictivas, como los saqueos, cruzaron los períodos gubernamentales de Raúl Alfonsín, Carlos S. Menem y Fernando de la Rúa. En cambio, los cortes de rutas y los movimientos contra los excesos policiales y el “gatillo fácil” se concentraron en la gestión de los dos últimos gobernantes. Por otra parte, los medios de comunicación masivos, más allá del manejo informativo, jugaron un papel importante para otorgar les visibilidad a las protestas, y hasta generaron fenómenos mediáticos alrededor de algunas de ellas.

En efecto, el largo conflicto protagonizado por los docentes de todo el país, expresado a través de huelgas y marchas, alcanzó su punto más alto de exposición pública con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional en abril de 1997, durante el gobierno de Menem. Allí, junto a los docentes que ayunaban en defensa de la educación pública y por el establecimiento de un Fondo de Financiamiento Educativo, se produjo un

incesante desfile de artistas, políticos e intelectuales y se realizaron varios programas radiales y televisivos. A pesar del apoyo recibido, recién el 30 de noviembre de 1999, la Cámara de Diputados aprobó el Fondo de Incentivo Docente dentro del Presupuesto Nacional, y el 27 de diciembre, luego de más de mil días de ayuno, la Carpa Blanca fue levantada. El acceso al gobierno de la alianza UCR-Frepaso abrió nuevas expectativas y operó como un bálsamo cuyo beneficio se esfumó rápidamente.

Otra de las protestas surgidas durante los gobiernos democráticos fueron los saqueos. En su realización se combinaron tanto las necesidades de la población como el impulso a la acción colectiva de las redes clientelares que alimentaban a los partidos políticos tradicionales como el peronista. El primer saqueo protagonizado por quienes habían perdido sus empleos y la protección del Estado se produjo cuando finalizaba el mandato presidencial de Alfonsín. Los más pobres y los desocupados fueron quienes, en mayo de 1989, asaltaron los comercios en diversas localidades del país. Desde entonces, la palabra saqueo comenzó a designar una compleja y amplia trama de actividades que abarcaban desde la toma de alimentos consumidos en el mismo lugar de los acontecimientos o transportados a las viviendas de los saqueadores, hasta la construcción de barricadas, el ape dreo de negocios, el incendio de algunos comercios, las marchas y los choques callejeros entre saqueadores y policías.

En 1989, la geografía de los saqueos fue amplia: abarcó el Gran Buenos Aires (Quilmes, General Sarmiento, Moreno, San Miguel y Tres de Febrero), Rosario, la ciudad de Córdoba y Las Heras, en Mendoza. La magnitud y la extensión de los acontecimientos hicieron que las autoridades votaran rápidamente el estado de sitio y que se reprimiera estas manifestaciones, lo que dejó un

saldo de catorce muertos, un centenar de heridos y decenas de detenidos; paralelamente, se repartieron toneladas de alimentos.

Aunque la toma de alimentos se produjo en diferentes localidades y provincias, sus consecuencias afectaron más al Poder Ejecutivo nacional que a los gobiernos provinciales. De modo que, en el contexto de los saqueos y la hiperinflación el presidente Alfonsín renunció y entregó el mando anticipadamente, como consecuencia de la fuerte presión de los factores del poder económico y de la oposición política, que empujaban la acción de los sectores populares.

Los saqueos fueron seguidos por una mayor organización, con la realización de ollas populares y la apertura de comedores barriales por parte de los vecinos. Esas organizaciones se vincularon con la Iglesia Católica, a través de la organización Cáritas, y con los partidos políticos como el peronismo, el radicalismo y diversas agrupaciones de izquierda. Las ollas populares se reprodujeron, organizadas por entidades gremiales como la UOCRA de Neuquén, que convocó a sus afiliados a realizar una frente a la Casa de Gobierno.

En el plano de las condiciones de trabajo, el dato más importante fue la aparición de la precarización laboral. En términos generales, las condiciones de trabajo comenzaron a modificarse durante el gobierno de Alfonsín, pero fue en el transcurso de la gestión menemista cuando se afianzó la política de inestabilidad y precarización del empleo. El objetivo fracasado de privatizar las empresas del Estado en la segunda mitad de los años ochenta se logró durante el gobierno peronista, así como también la modificación de la legislación en materia de contratos laborales. Para realizar cada una de las medidas gubernamentales se necesitaba el com-

promiso de la CGT de no realizar medidas de fuerza y el beneplácito de los dirigentes de los gremios afectados.

Menem aplicó decididamente las recetas del liberalismo económico y, aunque tardó en dominar la inflación y hasta tuvo un pico hiperinflacionario a fines de 1990, el rumbo de la economía se modificó con la incorporación al gabinete del economista Domingo Cavallo. Bajo su rígida conducción se liberaron los precios, se abrió casi por completo la importación, se eliminó la promoción industrial y el Estado resignó su intervención en la regulación del mercado financiero. Se produjo también una drástica reducción de los gastos gubernamentales, la venta de las empresas estatales, la paralización de las obras públicas y el recorte presupuestario de áreas sensibles como las de salud y educación. También se cambió la moneda, se estableció la paridad del peso con el dólar (convertibilidad) y el gobierno se comprometió a no emitir moneda sin respaldo. En el terreno laboral, se flexibilizaron los contratos de trabajo, se reglamentó de manera restrictiva el derecho de huelga y se redujo la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Las medidas del gobierno del doctor Menem colocaban a los líderes sindicales en una encrucijada que delimitó las respuestas de las organizaciones gremiales. Algunos dirigentes gremiales fueron más proclives a escuchar las demandas de sus bases y mantuvieron la táctica de golpear para negociar, aunque esa política fue neutralizada por el gobierno. Otros jefes sindicales se transformaron en los sostenedores de las políticas del gobierno, ganando a cambio ciertos beneficios pero dejando huérfanos a sus representados. En este último caso, los gremialistas fueron los ejecutores de los planes de ajustes, como sucedió con uno de los gremios de

empleados estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), donde Andrés Rodríguez se convirtió en el portavoz del menemismo.

Para otros líderes gremiales, los planes gubernamentales ponían en juego sus propios intereses económicos, y aspiraban a participar en los negocios resultantes de las privatizaciones. Los dirigentes de la Unión Ferroviaria tenían interés en la licitación de algunos ramales ferroviarios y el petrolero Diego Ibáñez fue integrado al directorio de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) luego de acordar la privatización de la compañía estatal y la reducción de los puestos de trabajo. Estos sindicalistas se transformaron en administradores y empresarios, y sus gremios, en empresas, con la conformación de compañías aseguradoras, bancos sindicales para inversiones, farmacias, compañías de turismo. Al finalizar el siglo XX, aparecían como la contracara de los sindicatos combativos de principios de ese siglo, que luchaban por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados.

Frente al sindicalismo «empresarial» estaban aquellos que no aceptaban la subordinación al proyecto de Menem y que buscaban mantener las bases de la solidaridad gremial y la defensa de sus intereses aun en un contexto adverso por la amenaza del despido y la contratación temporaria. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se organizó como alternativa a la CGT, que volvió a dividirse con la aparición del Movimiento de Trabajadores Argentinos (CGT). El movimiento sindical, en particular la CTA, tuvo un papel importante en la reactivación de la protesta social y hasta se pensó en la formación de un Partido de los Trabajadores en un contexto en el que los partidos políticos tradicionales mostraban su debilidad para consolidar un proceso democrá-

tico que incluyera a los sectores populares. Esos líderes gremiales debían remontar, además, el desprestigio en el que había caído la mayoría de la dirigencia sindical, puesto que, frente a la opinión pública, no se diferenciaban sus comportamientos.

Las medidas económicas y sociales del gobierno de Menem y las políticas de los gremios arrinconaron a los trabajadores en una actitud defensiva, pues debían detener la ola de despidos y suspensiones y proteger las fuentes de trabajo. En la experiencia de los obreros, la huelga era la herramienta de protesta conocida; sabían cómo organizarla y hacerla efectiva. La paralización de las actividades era una herramienta clave que se consolidó con lo largo del siglo XX, aunque los sectores de mayor actividad huelguística fueron cambiando con las transformaciones en la estructura económica o de acuerdo con la coyuntura política. En efecto, el debilitamiento de la industria convirtió a algunos gremios de servicios en los protagonistas de la lucha social. Poco quedaba de la fortaleza que en el pasado habían tenido los gremios de trabajadores ferroviarios, metalúrgicos, telefónicos, portuarios, o de la alimentación. Y aunque siguieron protestando y reclamando mayores salarios, mejores condiciones laborales y la defensa de las fuentes de trabajo, el número de huelgas que realizaron fue notoriamente inferior si se lo compara con las llevadas adelante en el sector servicios.

Las estadísticas de las huelgas, aun con las dificultades para elaborar los registros, muestran que, desde la gestión de Alfonsín hasta la de Menem, el mayor número se produjo entre los docentes, los empleados de la administración pública, los municipales, los trabajadores de la salud, los bancarios y los conductores de co-

lectivos. Junto a las huelgas, los trabajadores declaraban el estado de alerta y realizaban asambleas, movilizaciones y hasta ocupaciones de las empresas para evitar su cierre, que, en algunos casos, implicaban también la puesta en marcha y producción de las fábricas. En cuanto a las medidas de fuerza, se pueden contabilizar algunas de diversa envergadura en empresas importantes como Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Terrabusi, Rigolleau, So-misa y Lozadur, y en las fábricas de caramelos MU-MU, de cocinas Arthur Martin, cerámica Río Negro y en el frigorífico Pampero.

Los conflictos por reclamos salariales y contra los despidos abarcaban un vasto arco de actividades y de lugares, que se extendían por Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Rosario. La Capital Federal y el Gran Buenos Aires tuvieron el mayor número de huelgas y huelguistas como consecuencia lógica de la concentración de trabajadores existente en la región, les siguieron, en orden decreciente, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta. También fue importante el porcentaje de huelgas de los empleados públicos en La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Neuquén.

Precisamente, fueron los empleados públicos quienes protagonizaron acciones colectivas que culminaron de manera violenta. Las dos situaciones más llamativas fueron las protestas en Santiago del Estero y Jujuy. En 1993, empleados estatales y municipales, maestras primarias y docentes secundarios, jubilados y estudiantes reclamaron el pago de salarios, jubilaciones y pensiones que les adeudaban y protestaron por la aplicación de políticas de ajuste y contra la corrupción gubernamental en Santiago del Estero. La protesta terminó con el incendio y el saqueo de la Casa de Gobierno, la Legislatura provincial y las viviendas de políticos y funcionarios locales. En la provincia de Jujuy se sucedieron protestas de

los trabajadores estatales y municipales afectados por las reducciones en la coparticipación de impuestos para las provincias y por la transferencia del sistema educativo. Una de las más importantes de estas manifestaciones se produjo en 1997. El derrumbe de las finanzas públicas provocó profundas crisis que se convirtieron en crónicas, y en algunos casos, como el jujeño, implicó el conflicto permanente y la inestabilidad política, que se tradujo en la caída de cinco gobernadores.

La movilización de los trabajadores organizados no se mantuvo durante todo el gobierno de Menem debido a los límites impuestos por las direcciones gremiales y por el propio proceso de atomización de los conflictos y de debilitamiento de los trabajadores ocupados con contrataciones temporarias. Para examinar las mutaciones producidas en el decenio que va de 1993 al 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando la desobediencia civil y la protesta de amplios sectores de la población fueron decisivas en el derrocamiento del presidente Fernando de la Rúa, es necesario establecer los nexos entre la crisis social y la crisis política de los partidos tradicionales que se separaron de la sociedad, aprovecharon las estructuras clientelares en beneficio propio y realizaron pactos y acuerdos por fuera de los mecanismos institucionales del Estado. Además, es preciso prestar atención al desempleo masivo, como consecuencia de las medidas económicas del denominado "Plan Cavallo". La tasa de desocupación abierta urbana trepó al 13,8% en 1999, pero la suma de trabajadores desocupados y subocupados ha oscilado, desde fines de 1994, en torno al 30% en el ámbito nacional, con bolsones donde los niveles se elevan al 40%, en zonas como Florencio Varela y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

El desconocimiento de los convenios colectivos, el incremento de los ritmos de trabajo y de la productividad

obrero, las privatizaciones, la elevación de la edad jubilatoria, la rebaja de las indemnizaciones, el alargamiento de la jornada laboral y la caída salarial fueron un cóctel explosivo que estalló en las manos de los gobernantes cuando la población protestó de diferentes formas. Y allí emergieron otros repertorios de confrontación, vinculados al fenómeno de la desocupación en un contexto de fragmentación de los actores sociales y de multiplicación de las demandas sectoriales por la continua aplicación local de políticas neoliberales: *los cortes de rutas y el movimiento piquetero*.

La ejecución de los planes privatizadores afectó seriamente las economías provinciales. En el caso de Neuquén, la privatización de la empresa estatal YPF, ubicada en el área de Cutral Có-Plaza Huincul, llevó a la emergencia de protestas en forma de puebladas y cortes de rutas. Cuando entre el 20 y el 26 de junio de 1996 se produjo el corte de la ruta 22, quienes ejercieron la custodia de las barricadas recibieron el nombre de "piqueteros". Aunque inicialmente se diferenciaban piqueteros, fogoneros y zanjeros, pronto fueron homogeneizados bajo la común designación de "piqueteros", los que ocuparon la escena de la protesta bajo el reclamo de trabajo y la denuncia de la corrupción y la falta de honestidad de los políticos locales. Desde entonces, en forma creciente, la interrupción del tránsito en rutas y calles urbanas se transformó en la principal forma de protesta, pero también realizaron otras acciones, como la ocupación de iglesias católicas (la Catedral de Mar del Plata, por ejemplo) y sedes gubernamentales en el ámbito municipal.

En un efecto dominó, los cortes de rutas se extendieron como reguero de pólvora por Chubut, Córdoba, Río Negro, Tucumán, Neuquén y Salta. La interrupción del tránsito de vehículos no requiere, para ser eficaz, de la

presencia masiva como en las manifestaciones. Un reducido grupo de personas puede convertir el tránsito urbano en un caos o alterar la circulación en una ruta o un camino. Además, los medios de comunicación ayudan a otorgarles visibilidad a las protestas, aun sin proponérselo. Visibilidad y efectividad fueron claves en la extensión del piquete como factor de presión y forma de lucha.

En el período que se extiende entre el primer corte y los actuales, la experiencia del piquete enseñó cuáles eran las mejores condiciones y oportunidades para lograr resultados efectivos, y se consolidaron diferentes organizaciones que les dieron rostros diversos e identificables. También se fueron configurando rituales alrededor de los cortes de rutas: un grupo levanta las barricadas, se encienden neumáticos, los jóvenes cubren sus rostros y se colocan las banderas identificatorias de los diversos grupos políticos. El rito permite visualizar y definir un nuevo escenario para los conflictos, pues ya no se localizan en las fábricas y en sus adyacencias, como en el pasado, sino en regiones alejadas del centro político de Buenos Aires, en uno y otro extremo del país, de Cutral Có, en Neuquén, a General Mosconi, en Salta. En las protestas participan familias enteras: las mujeres organizan las ollas populares, los niños y jóvenes alimentan el fuego de las barricadas, y en el lugar se realizan asambleas para escuchar la opinión de los participantes y votar las decisiones. Tanto en los piquetes como en los saqueos, la presencia de las mujeres es alta; se calcula que ronda el 60%. Algunas de ellas fueron manzaneras (la organización asistencial conducida por Hilda de Duhalde en la provincia de Buenos Aires) que cuando experimentaron los límites del asistencialismo se volcaron de manera independiente a esta forma de lucha.

Las estadísticas publicadas en diferentes diarios y revistas muestran la magnitud de la protesta: en 1997 se realizaron 140 cortes de ruta; 51, en 1998 y 252, en 1999. La profundización de la crisis económica y posiblemente también la conciencia sobre la imposibilidad de modificar la política económica y social impulsaron el notable incremento de las interrupciones de tránsito; así, los 514 cortes del año 2000 pasaron a 1.282 en 2001 y 2.334 en 2002. Entre 2001 y 2002, casi todas las provincias tuvieron una ruta o un camino cortado, y en todo el periodo 1997-2002 sumaron 4.674. La situación era explosiva tanto en el interior como en Buenos Aires porque no había paliativos suficientes para la pobreza. En general, la ayuda llegaba tarde a los necesitados y a veces ni siquiera llegaba debido a la consolidación de una maquinaria de corrupción. El crecimiento del movimiento piquetero durante los años 2001 y 2002 preocupó al gobierno nacional, que planteó en diferentes oportunidades la necesidad de terminar con los cortes de calles y de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el 26 de junio de 2002 se realizaron nuevos cortes, se reprimió duramente, sobre todo en el puente Pueyrredón, donde muchos manifestantes fueron detenidos y perseguidos. Dos de ellos fueron asesinados por la policía en la estación de trenes de Avellaneda, lo que agudizó aun más la crisis social y política.

A lo largo de la segunda mitad de la década del noventa se conformaron comisiones de desocupados en diferentes lugares y comenzó a plantearse la unidad de acción. Los “piqueteros” demandaban alimentos y Planes Trabajar¹ pero pronto ampliaron sus reclamos al establecimiento de subsidios de desocupación, al mantenimiento de los servicios de luz y de gas a los desocupa-

¹Los Planes Trabajar son subsidios para desocupados de 120 a 160 pesos a cambio de unas horas diarias de tareas comunitarias.

dos y jubilados y a la eximición del pago de los impuestos. Incluso comenzó a discutirse sobre la necesidad de reclamar planes de empleo, ya que el trabajo permitía la (re)inclusión social de las clases más desposeídas. El 6 de septiembre de 1996 por primera vez el “movimiento piquetero” marchó hacia la Plaza de Mayo. “La marcha contra el hambre, la desocupación y la represión” congregó varios miles de personas y se hizo plenamente visible. Durante los años siguientes, las protestas piqueteras de desocupados se reprodujeron en casi todo el país, desde Jujuy a Santa Cruz. El incremento de los cortes de rutas como medio de lucha alarmó a las autoridades, que recurrieron unas veces a la represión y otras a la negociación, en particular cuando los manifestantes estaban dispuestos a dialogar.

La extensión de la protesta favoreció el surgimiento y la organización de comisiones de desocupados, asambleas populares y organizaciones no gubernamentales; incluso el cuadro del movimiento piquetero se hizo cada vez más complejo. Las organizaciones de bases se multiplicaron: la Federación de Tierra y Vivienda, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora Aníbal Verón, el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), surgido como una organización de jubilados en oposición a la destrucción del sistema previsional. Los desocupados se han organizado, debaten sobre los objetivos, las características y las formas de organización, y algunas agrupaciones han organizado comedores, merenderos, hornos de pan y huertas.

Si la protesta de los desocupados ocupó la escena, ello no significó que se abandonaran las demandas de otros actores. Los organismos de derechos humanos, no sin conflictos internos, continuaron efectuando

sus reclamos, aunque debieron adecuarse a las nuevas situaciones. La novedad en este plano la aportaron los jóvenes nucleados en la agrupación HIJOS, que se constituyó en un movimiento social para exigir justicia que se articula en torno a los “escraches”, es decir, la denuncia de la impunidad y la visibilidad de los genocidas para evitar que se mantengan en el anonimato. Los “escraches” son una herramienta política, una forma de movilización y de participación que incluye casi siempre la presencia de una murga y de grupos de teatro. Como ocurriera con los “piquetes”, pronto fueron usados por otros actores sociales, lo que configuró una forma nueva de acción colectiva.

La llegada al gobierno de la alianza UCR-FREPASO a fines de 1999 abrió un breve paréntesis esperanzador, con su promesa de modificar los rasgos más cuestionados del “modelo” menemista: personalismo, pactos secretos, corrupción, falta de control. Sin embargo, una vez en el gobierno, la distancia entre las promesas y la realidad fue el detonante para que las voces de protesta, algunas afónicas y cansadas de no ser escuchadas, se hicieran oír nuevamente.

Al poco tiempo, todo parecía conducir a un callejón sin salida, pues a la recesión económica —que llevaba más de tres años—, la continua caída del PBI y la profundización del endeudamiento externo se sumaban las políticas de ajuste permanente, que, como en una espiral, sólo acentuaban la recesión, la disminución de la recaudación y el déficit fiscal. Domingo Cavallo, el ministro de Economía del gobierno de la Alianza, que también había acompañado a Menem, lanzó un programa de “déficit cero”, que incluyó una baja de salarios y pensiones del 13%, mientras se seguían pagando los intereses de la deuda pública y se acentuaba la fuga de las reser-

vas y los depósitos del sistema bancario. Con el objetivo de poner fin a la salida de dinero y como una forma de salvar al sector financiero privado y público de la bancarrota, el 3 de diciembre de 2001, el gobierno bloqueó los depósitos y salarios existentes en los bancos.

Toda la situación contenía los componentes para un cóctel explosivo. Los niveles de pobreza crecieron de manera alarmante, los sectores de la clase media vieron seriamente dañada su capacidad de consumo así como deterioradas las expectativas que había alimentado un dólar barato. Los gobiernos nacional y provinciales cortaron la correa que mantenía la ilusión del salario y la provisión de alimentos; así fueron interrumpidos los comedores escolares, la asistencia social en todas sus formas (subsidios de desempleos y reparto de alimentos) y el pago de salarios, que en algunas provincias llevaba meses de atrasos. Las cifras de desocupación según el Instituto Nacional de Estadística y Censos acusaban que casi el 35% de la población económicamente activa tenía serios problemas de empleo, crecía el número de los desocupados y la cantidad de personas que estaban por debajo de la línea de indigencia. Así se profundizaron los nuevos contrastes: mientras familias enteras deambulaban por la ciudad buscando alimento, el campo duplicaba la producción agrícola y triplicaba las exportaciones de ese origen; en tanto los más pobres carecían cada vez más de vivienda, seguridad y educación los más ricos se concentraban en barrios privados y cerrados donde esperaban encontrar refugio y seguridad.

No sólo la crisis económica y social era grave, también lo era la crisis política. La alianza política de la UCR y el FREPASO se resquebrajaba con la renuncia del vicepresidente y el ingreso de Cavallo al gabinete. El justicialismo, por otra parte, se rearmó después de la derrota electoral y triunfó en las elecciones para renovar

las cámaras legislativas, pero se produjo un importante crecimiento de la abstención electoral y de los votos en blanco e impugnados. La política se alejaba cada vez más de las expectativas y los deseos de una población que, por otra parte, no había colocado límites adecuados a las decisiones tomadas por los gobernantes.

Durante diciembre de 2001 se multiplicaron las protestas. El día 12, la CGT liderada por Hugo Moyano convocó a una manifestación frente al Congreso de la que también participaron agrupaciones de izquierda, bajo la consigna "Huelga general hasta que se vayan". La Asociación de Trabajadores del Estado llamó a un paro de veinticuatro horas, y junto a la CTA, convocaron una marcha a Plaza de Mayo, reclamando que se fueran los jefes de los gobiernos nacional y provinciales. El clima de desobediencia civil era evidente en las continuas manifestaciones, los cortes de calles y de rutas, los apagones, los cacerolazos y los bocinazos.

La CGT convocó para el 13 de diciembre a un nuevo paro general, el séptimo contra el gobierno de De la Rúa, que, esta vez, contó con una importante adhesión. Aunque no había sido declarado como paro activo, se realizaron movilizaciones en las ciudades de Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, San Juan, Tucumán, Mendoza y General Roca, y en algunas de ellas se produjeron violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes.

En tanto, a veces con sospechosa ausencia de autoridades, se produjeron saqueos a grandes supermercados (Carrefour, Makro, Norte, Disco, Auchán) en varias provincias del país. Pero no fueron los únicos afectados por la ola de saqueos y amenazas. Numerosos grupos saquearon también otros supermercados de menor en-

vergadura y hasta pequeños comercios barriales, muchos de ellos propiedad de habitantes chinos y coreanos. El escenario fue amplio y se produjeron acciones de este tipo en las provincias de Buenos Aires (Moreno, San Miguel, San Isidro, San Martín, José C. Paz, José León Suárez, Ciudadela), Entre Ríos (Concepción del Uruguay), Mendoza (Guaymallén y Godoy Cruz), Santa Fe (Rosario, Empalme Graneros) y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Constitución y Villa Lugano. Es difícil resumir en unas breves líneas el número de saqueos y la magnitud de las personas involucradas en ellos, incluso diferenciar los que fueron saqueos propiamente dichos de las demandas de alimentos y los que fueron espontáneos de aquellos inducidos. La consideración de estos últimos es importante en cualquier análisis, porque el engaño al que fueron sometidos los manifestantes (entrega de alimentos en malas condiciones, demoras en el cumplimiento de las demandas, incumplimiento de la palabra dada) alimentó la insatisfacción, el resentimiento y la ira de algunos de ellos.

Los saqueos o simplemente la demanda de alimentos ocurrieron en las provincias gobernadas tanto por la alianza UCR-Frepaso como por el peronismo, pero las acciones colectivas transcurrieron entre la espontaneidad y la presión de diferentes punteros políticos que buscaban debilitar así a sus opositores. Sin embargo, hay un elemento común que cruzó los comportamientos populares de esos días: la impaciencia, la rabia y la decisión de protestar.

El 19 y el 20 de diciembre de 2001 estallaron todos los componentes del largo y continuo estado de postergación de la población y de las arbitrariedades; y cuando el gobierno declaró el estado de sitio, las clases medias, cuyos ahorros fueron confiscados por los bancos priva-

dos y públicos, salieron a la calle y marcharon a la Plaza de Mayo golpeando cacerolas.

Desde entonces, los “cacerolazos” se repitieron cotidianamente, y el rostro de la protesta incluyó a ahorristas y deudores, bancarios y no bancarios. La “rebelión de las cacerolas” desembocó en las asambleas populares de grupos de vecinos que se reunían para deliberar en plazas y esquinas de la ciudad de Buenos Aires así como en algunas del interior país. Los asambleístas cuestionaban todo: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las formas de la representación política y, en algunos casos, hasta el comportamiento que los ciudadanos habían tenido hasta ese momento. Las asambleas se organizaron sobre la base del territorio barrial y rápidamente se reunieron bajo un organismo coordinador, la Asamblea Interbarrial. Con la excepción de una treintena de asambleas en Santa Fe y una decena en Córdoba, el fenómeno estuvo esencialmente limitado a Buenos Aires, en donde se multiplicaron como hongos: durante el año 2002 funcionaron 112 en la Capital Federal y 105 en localidades de la provincia de Buenos Aires, aunque actualmente, sólo un año después, es visible su decadencia.

Las asambleas barriales se sumaron a saqueos, cacerolazos, cortes de rutas y escraches para configurar un cuadro heterogéneo de formas, actores y demandas. En estas protestas convergieron todas las experiencias acumuladas durante las últimas décadas: conviven los elementos residuales de la lucha obrera y los nuevos repertorios de acción colectiva que resultan del complejo cuadro de los cambios estructurales, de las acciones gubernamentales y de las prácticas sociales de sus protagonistas. De esa inmensa telaraña cobra

fuerza la idea de que la gente común está utilizando nuevas herramientas para reclamar por sus intereses. Las profundas transformaciones parecen anunciar que, posiblemente, estemos asistiendo a la conformación de un nuevo entramado social.

Bibliografía

AA.VV, "La protesta social en perspectiva", en *Entrepasados*, Revista de Historia, año XI núm. 22, 2002, Buenos Aires.

ANSALDI, Waldo, *Conflictos obrero-rurales pampeano (1900-1937)*, Buenos Aires, CEAL, 1993.

ARCONDO, Aníbal, "El conflicto agrario argentino de 1912. Ensayo de interpretación", en *Desarrollo Económico*, vol. 20, núm. 79, octubre-diciembre de 1980 Buenos Aires.

AUYERO, Javier, "Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina", en *Desarrollo Económico* vol. 42, núm. 166, julio-septiembre de 2002.

BILSKY, Edgardo J., *La semana Trágica*, Buenos Aires CEAL, 1984.

BRENNAN, James Paul, *El Cordobazo. Las guerras obrera en Córdoba*, 1955-1976, Buenos Aires, Sudamericana 1996.

CRENZEL, Emilio, *El Tucumanazo*, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1997.

CHERESKY, Isidoro y Jacques Chonchol, *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*, Buenos Aires, EU DEBA, 1984.

DEL CAMPO, Hugo, *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires, CLACSO, 1983.

FALCÓN, Ricardo, *El mundo del trabajo urbano (1890- 1914)*. Buenos Aires, CEAL, 1986.

155

FAVARO, Orietta et al., *Neuquén. La construcción de un orden estatal*, Neuquén, Cehepyc, 999.

GODIO, Julio, *El movimiento obrero argentino*, Buenos Aires, Legasa, 1989.

GORDILLO, Mónica, *Córdoba en los 60: la experiencia del sindicalismo combativo*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1996.

HOROWITZ, Joel, *Argentine Unions, the State & the rise of Peron*, 1930-1945, Berkeley, University of California, 1990.

IÑIGO CARRERA, Nicolás, *La estrategia de la clase obrera*, 1936, Buenos Aires, La Rosa Blindada-PIMSA, 2000.

JAMES, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina*, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

JELIN, Elizabeth, *Movimientos sociales y democracia emergente*, 2 volúmenes, Buenos Aires, CEAL, 1984.

LOBATO, Mirta Zaida, *La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera*, Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo Libros / Entrepasados, 2001.

MCGUIRE, James, "Strikes in Argentina: data sources and recent trends", en *Latin American Research Review*, vol. 31, núm. 3, 1996.

MERKLEN, Denis; *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*, Buenos Aires, Catálogos editora, 1991.

OGANDO, Ariel: "Desocupados y cortes de ruta en el Noroeste argentino", en *Herramienta*, núm. 15, año 5, Buenos Aires, 2001.

PALOMINO, Héctor, *Cambios ocupacionales y sociales en Argentina*, 1947-1985, Buenos Aires, CISEA, 1987.

QUINTAR, Juan, *El choconazo*, Neuquén, Educo, 1998.

SÁNCHEZ, Pilar, *El cutralcazo. La pueblada de Cutral C6 y Plaza Huincul*, Buenos Aires, Ágora, 1999.

SHORTER, Edward y Charles Tilly, *Las huelgas en Francia, 1830-1868*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985.

SURIANO, Juan, *Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910*, Buenos Aires, Manantial, 2001.

SURIANO, Juan (comp.), *La cuestión social en Argentina, 1870-1943*, Buenos Aires, La Colmena, 2000.

TARROW, Sidney, *El poder del movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza, 1997.

TORRADO, Susana, *Estructura social de la Argentina: 1945-1983*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1992.

TORRE, Juan Carlos (comp.), *La formación del sindicalismo peronista*, Buenos Aires, Legasa, 1988.

TORRE, Juan Carlos (comp.), *El 17 de octubre de 1945*, Buenos Aires, Ariel, 1995.